

F011
37.014JY3

1

17868

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PRESIDENCIA DEL DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA

CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LOS CONTADORES FISCALES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1911

- I.—Nota de la Contaduría General de la Nación
Nº. 926, de 30 de Septiembre.
- II.—Nota al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública remitiendo copia de los informes, Nº. 7422.
- III.—Mensaje del Señor Presidente.
- IV.—Dictamen del Comisionado de Hacienda.
- V.—Resolución del Honorable Consejo de 21 de Noviembre.
- VI.—Resolución sobre presupuesto interno del Consejo.
- VII.—Nota del Consejo a la Contaduría General de la Nación remitiendo informes, Nº. 7421.



BUENOS AIRES

TALLERES GRÁFICOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL

1912

017868	
SIG	Fo 1 37,014,573
LIS	1

CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LOS CONTADORES
FISCALES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1911

**Nota del Presidente del Consejo al Ministro de Justicia
é Instrucción Pública**

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1912.

*Excmo. Señor Ministro de Justicia é Instrucción
Pública, Doctor Don Juan M. Garro.*

En atención á lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N.º 1420 me creo en el deber de llevar á conocimiento de V. E. los informes producidos como consecuencia de la resolución dictada por la Contaduría General, con fecha Abril 23 del año corriente, por la cual encomendó á los Señores Contadores Fiscales el estudio de diversos puntos conexos con la administración económica del Consejo Nacional de Educación, durante el ejercicio de 1911.

Me apresuro á poner esos informes en noticia de V. E., sin esperar las oportunidades usuales, por el hecho notorio de haberse atribuído trascendencia tan capital al asunto que los motiva, que la exposición de trámite de los Señores Contadores Fiscales ha sido publicada solemnemente en el Diario de Sesiones de la H. Cámara de Diputados de la Nación.

La Contaduría General, entretanto, no ha formado aún apreciación alguna y ha solicitado del Consejo Nacional el «aporte de los antecedentes ilustrativos de cada caso», lo que le permitirá, según sus propias palabras, encarar y resolver los múltiples puntos de administración que el

informe (de los Señores Contadores) precisa, con un completo conocimiento de todos los elementos de juicio pertinentes.

Con el fin de satisfacer este pedido se han realizado por los funcionarios del Consejo los estudios cuya copia me es grato remitir al Señor Ministro que ponen en clara transparencia las omisiones y errores de los Señores Contadores Fiscales y que revelan la base deleznable de las observaciones por ellos formuladas.

Esos estudios son, quizás, demasiado prolijos, pero como se ha agigantado tanto una función administrativa de examen económico, que debería ser y es, en realidad, normal y sencilla; como se ha procurado suscitar, á su derredor, impresiones y expectativas; como los mismos Señores Contadores se han creído, tal vez, investidos de una misión excepcional; como su informe ha roto el molde de los de su clase y en lugar de circunscribirse al análisis de cuentas, destina largas páginas á disquisiciones técnicas sobre derecho, sobre educación, sobre arquitectura; como se le ha exteriorizado, dándole los prestigios de la publicidad de los debates parlamentarios, ha sido indispensable analizar en detalle caso por caso, punto por punto, á fin de no dejar en pie ninguna de las reflexiones aducidas por más palmariamente equivocadas que fuesen, y no obstante la seguridad que abrigo de que la Contaduría General, en la inmensa mayoría de los expedientes examinados, no requiere explicación alguna para desestimar las conclusiones de ese informe.

Los Señores Contadores se han sentido asaltados por la duda. «No ha dejado de presentársenos

en más de un caso» dicen, «la dificultad ó la duda de si un acto del H. Consejo, ó del Señor Presidente, se encontraba encuadrado dentro de las facultades propias que le da esa autonomía». Pero como todo es excepcional en este asunto, esa incertidumbre no redundaría en beneficio de la administración, sino, que—por una anomalía inexplicable,—ella inclina el ánimo en contra de las autoridades escolares, cuyos procederes se amparaban en el espíritu y aun, en el texto de la ley, en hábitos uniformes y en antecedentes tradicionales. La duda en el criterio de los Señores Contadores se resuelve en contra del Consejo, en contra de la corrección de sus actos, en contra de sus facultades, en contra de la posibilidad de su eficacia, en contra del auxilio y protección á instituciones necesarias, indispensables por hoy, para la enseñanza; en contra del amparo á obras de cultura, en contra del empeño de acentuar el espíritu nacional, en contra de las disposiciones tutelares del maestro enfermo y desamparado, en contra de los funerales decretados á algún caído en la tarea ejemplar del magisterio.

Y esa duda de los Señores Contadores ha sido casi siempre, Señor Ministro, el resultado de haber salido del círculo de su competencia y de sus funciones. Si se hubieran circunscripto á desempeñar la misión que, en términos concretos, les confió la Contaduría General, quizás no habrían logrado exteriorizaciones brillantes para su informe, pero tampoco habrían cometido los errores en que incurren en arte arquitectónico, en cuestiones educacionales, en ciencias jurídicas; quizás no habrían hecho observaciones que indu-

cen un bajo justiprecio pecuniario al talento de Leopoldo Lugones ó un desconocimiento absoluto de su admirable Historia de Sarmiento; quizás no habrían confundido las obras de texto con libros de biblioteca ó publicaciones destinadas á festividades cívicas; quizás no habrían hecho indicaciones de las cuales surge que á los reglamentos que el Consejo dicta no puede el mismo Consejo introducir excepciones cuando circunstancias especiales se lo prescriben; quizás no habrían puesto en tela de debate actos múltiples destinados á elevar el nivel de la enseñanza y la moral y dignidad de quienes la dirigen desde la cátedra de las escuelas primarias.

Los Señores Contadores han prescindido de la magnitud de las tareas que pesan sobre el Consejo. Han tramitado, durante los cuatro años que han tenido el honor de presidir sus sesiones, 25.548 expedientes que abarcan la inmensa complejidad de materias de una administración tan vasta y tan variada. En el año 1911, á que se refiere el informe, el número de esos expedientes ha alcanzado á 25.265, y de ese cúmulo sólo han podido entresacarse, para formular reparos, 256, —el uno por ciento,—relativos, los más, á asuntos insignificantes, de menor cuantía, en cuya solución el Consejo ó el Presidente han procedido dentro de las amplias facultades que las leyes les acuerdan, no obstante la duda y consiguiente opinión adversa de los Señores Contadores.

El Consejo Nacional desde el día en que ocupó su presidencia ha administrado, con el celo y dedicación que son notorios, la crecida suma de \$ 111.530.978.30 moneda nacional, de los cua-

les, en el mismo año 1911, han egresado \$ m/ 29.162.591.88; y conviene dejar constancia para dar al informe las proporciones que le corresponden, de que sus reparos, después de haber sido estudiada la gestión de esa importante cantidad, sólo se refieren á \$ 417.627.86 sobre cuya inversión la Contaduría General debe pronunciarse, y derivan: de diferencias en el precio de algunas construcciones, porque los Señores Contadores parecen suponer que antes de comenzarse un edificio deben realizarse cálculos que no difieran en un sólo centavo del costo real ulterior; de emolumentos á maestros en disponibilidad porque no admiten las razones de humanidad y amparo al magisterio que obligan á este procedimiento, sin duda defectuoso, pero legal é indispensable mientras no sea substituído de licencias concedidas con goce de sueldo por más de quince días, por motivos de enfermedad ú otros igualmente graves; de subvenciones pequeñas á institutos que cooperan con el Estado en la misión de extender la instrucción primaria; de viáticos autorizados por cláusula expresa de la ley de presupuesto vigente; de compras de libros que, no obstante la duda de los Señores Contadores, puede verificar el Consejo ya que le compete «auxiliarpublicaciones cooperativas de la educación común»; de adquisición de materiales escolares hecho sin licitación en casos en que la licitación no procede de acuerdo con la ley de contabilidad, pero debe proceder según los Señores Contadores; de gastos de entierro y luto á la familia de algún viejo servidor que cae en desempeño de una misión escolar. Es fácil, Señor

y á razones de humanidad, deben tendérseles manos protectoras, no obstante las dudas y reparos y observaciones de los Señores Contadores Fiscales; para haber conseguido un pequeño aumento en la mezquina remuneración de que gozan esos maestros, respecto de quienes se ha podido, aunque no todavía en la latitud deseada, hacer práctico el sistema de ascensos que estimula y alienta y dignifica; para haber establecido el Museo Escolar Sarmiento, exponente tangible de los progresos alcanzados y medio seguro de educación objetiva; para haber llegado á obtener la reforma de la ley de impuesto á las sucesiones que se inspira en principios jurídicos modernos, los cuales pugnan aún por abrirse camino en otros países y que acrecentará, en fuertes cantidades, el tesoro común de las escuelas; para haber proyectado leyes sobre seguro escolar, sobre reforma á la legislación de subsidios; para haber creado la Inspección General de Escuelas Particulares, la Inspección General de Contabilidad, la Oficina de Control, á fin de hacer cumplir los preceptos vigentes é impedir que queden, como letra muerta, en publicaciones y archivos; para haber hecho efectivas, con éxito lisonjero, las disposiciones sobre concursos de textos y haber contribuído, de esa manera, á enriquecer la literatura pedagógica y á generalizar libros preparados de conformidad á las tendencias actuales de la enseñanza nacional; para haber formado los programas analíticos de las escuelas privadas y obtenido su aplicación, para haber impulsado publicaciones como algunas de las que objetan los Señores Contadores y que constituyen un aporte de primer plano á las letras nacionales

y otras,—como, la Historia de la Instrucción Primaria en la República Argentina (1810 á 1910) y el Atlas Escolar, por ejemplo,—cuya importancia y cuya utilidad se manifiestan por sí mismas; para haber dado nueva organización á las Escuelas Normales cuya administración ha pasado á depender del Consejo Nacional; para introducir reformas infinitas en todo el régimen de fondo y de forma del complicado y vasto mecanismo de la educación primaria y normal de la Nación.

Durante el mismo tiempo de mi actuación como Presidente del Consejo se han construído quince edificios escolares en la Capital, treinta y cuatro en las provincias, veintiséis en los territorios, lo que hace un total de setenta y cinco edificios, cifra jamás alcanzada en el país en un período de cuatro años. Además se han hecho reparaciones de importancia muchas de ellas, en la inmensa mayoría de las propiedades fiscales donde funcionan los institutos de enseñanza.

Cuando tuve el honor de hacerme cargo del puesto, en 1908, funcionaban, dependientes del Consejo Nacional: en la Capital 172 escuelas diurnas y 43 nocturnas; en las provincias 266; en los territorios 162. Desde ese momento hasta hoy han sido creadas: en la Capital 62 escuelas diurnas y 27 nocturnas; en las provincias 1062, y en los territorios 131. Existían, en otros términos, 643 escuelas que han sido aumentadas, en la actualidad hasta 1925; y he tenido el placer de ver aumentarse la población escolar del país en ciento once mil novecientos cincuenta y ocho alumnos sobre los ciento cincuenta y ocho mil novecientos noventa y siete que acudían á las escuelas hace

Ministro, que en la amplia tarea del Consejo Nacional, se deslicen algunos errores, ya que ellos son inseparables de la condición humana,—y lo revelan los mismos Señores Contadores, en más de un caso, al indicar reparos basados en falta de formalidades que no faltan en realidad y que han debido saber que han sido llenadas,—pero puedo asegurar á V. E. que, aun esos errores, han respondido al propósito primordial de extender é intensificar la instrucción pública que, á despecho de las trabas con que se pretenda entorpecerlo por rebuscados é imaginarios recaudos extrínsecos, tendrá que sobreponerse á todos los obstáculos por que se liga á la solución de los más grandes problemas nacionales.

Por mi parte, me siento íntimamente satisfecho de haber contribuído á hacer práctico tal propósito, no obstante los desengaños y los ataques injustos de que he sido víctima. He aportado á la instrucción primaria el contingente de todas mis actividades y de todas mis energías, guiado únicamente por la trascendencia del objetivo final y convencido de que nada importan las dificultades, sin duda transitorias, consiguientes á erradas apreciaciones, ante el interés público, real y palpitante, vinculado á la obra de la educación popular.

Es posible que, en el inmenso cúmulo de expedientes haya demorado alguna vez y por excepción, formalidades externas, subsanadas más tarde, pero ello es el resultado fatal de los hábitos administrativos que fomenta, en gran parte, nuestra legislación, imbuída aún, á este respecto, del espíritu curial de las viejas Recopilaciones de la Colonia, que inspira el informe de los Señores Contadores.

Quizás, también, esas posibles demoras han respondido á la necesidad de atender con preferencia las múltiples cuestiones que han constituido la plataforma del Consejo durante el período de mi presidencia.

Hemos tenido que desenvolver una acción enérgica, de todos los momentos, para lograr los resultados que son su fruto; para haber dado á la enseñanza, la orientación nacionalista y patriótica impuesta por exigencias impostergables de nuestro pueblo en formación; para haber realizado la reforma de los programas de enseñanza primaria y para modelarlos de acuerdo con los dogmas científicos y con las peculiaridades de nuestra idiosincracia; para haber reglamentado la enseñanza privada, de particulares y corporaciones, dentro del concepto argentino y haberla sometido á regímenes tendientes á plasmar el carácter de las nuevas generaciones en las ideas de civismo que el Estado tiene interés en extender y en arraigar; para haber adoptado medidas conducentes al mejoramiento de la raza, creando las escuelas de niños débiles en esta Capital y en el Tandil, que constituyen un verdadero progreso educacional y que han merecido aplausos entusiastas de estadistas y sociólogos; para haber creado la Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar cuyos resultados pedagógicos hacía presumir la teoría y se han verificado en los hechos; para haber fundado la Asociación Pro Maestros de Escuela, destinada á aliviar las necesidades del humilde pero real servidor de la República, que se debate entre los deberes de su elevada misión y las miserias de la vida, y á quien, en homenaje á la instrucción

cuatro años, lo que forma, en la actualidad, un conjunto de doscientos setenta mil novecientos cincuenta y tres educandos.

Al bosquejar este cuadro de la labor desenvuelta durante el corto lapso que él abarca, no me mueve el deseo pueril de poner en transparencia mi propia colaboración en la obra. Al aportar mis esfuerzos, jamás he pensado en satisfacciones personales, por legítimas que fuesen. Me ha guiado siempre, únicamente, mi convicción de que en la instrucción y educación del pueblo radica el propulsor más eficaz de nuestros progresos y de que, en consecuencia, cada jalón que se coloque, como señal de un paso hacia adelante en el desarrollo de esa misión de gobierno, comporta una conquista definitiva de cultura y de civilización.

He indicado esos lineamientos de trabajos y de iniciativas para que V. E. aprecie, con relación á ellos, la importancia real que puedan tener las dudas de los Señores Contadores Fiscales sobre una parte mínima de los expedientes resueltos y la importancia real de las observaciones de mera apariencia que formulan como corolario, aun sin necesidad de ocurrir á los prolijos y minuciosos informes de los funcionarios del Consejo que, al estudiar en detalle todas esas observaciones, las aquilatan, las desmenuzan y las destruyen.

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida consideración.

J. M. RAMOS MEJÍA.
Segundo M. Linares.

III

Mensaje del Señor Presidente contestando las observaciones de los Señores Contadores Fiscales

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1912.

Honorable Consejo:

Mi quebrantado estado de salud, que desde el mes de Julio ppdo. me retuvo alejado de la presidencia del H. Consejo, me impidió tomar vista antes de ahora—como lo hubiera deseado vivamente—de la resolución adoptada por V. H. en sesión de 29 de Octubre ppdo., y por consiguiente, de las observaciones formuladas por los Señores Contadores Fiscales en su informe presentado á la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de ésta, fecha 23 de Abril del corriente año y relativas á actos emanados del suscrito en uso de las propias atribuciones que le acuerdan la Ley N.º 1420, los decretos reglamentarios de la misma y resoluciones de V. H.

Impuesto ahora de aquellas y no obstante el estado actual de mi salud, quebrantada aún, me he apresurado á ponerme de nuevo al frente de la Repartición, para asumir como corresponde y desde ya lo hago, toda la responsabilidad de mis actos como Presidente del Consejo Nacional de Educación;—y evacuando la vista conferida, paso á exponer á V. H.

Los actos del suscrito observados por los Señores Contadores Fiscales en su mencionado informe, consisten, siguiendo la enumeración de éstos en:

- a). Nombramiento del personal administrativo y del magisterio.
- b). Sumas entregadas por distintos conceptos por resolución de la Presidencia.
- c). Gastos de entierro y luto.
- d). Compras de libros.
- e). Gastos de diversa naturaleza autorizados por la Presidencia sin intervención del Consejo.
- f). Sueldos, sobresueldos, retribuciones extraordinarias y viáticos.
- g). Maestros en disponibilidad.
- h). Licencias al personal administrativo acordadas por la Presidencia.
- i). Licencias al magisterio acordadas por la Presidencia.
- j). Resoluciones varias de la Presidencia.

Pero, como se trata, en todos los casos, de resoluciones, lo repito, adoptadas por el suscrito en uso de sus atribuciones privativas que le acuerdan la Ley y disposiciones reglamentarias vigentes, como voy á demostrarlo, cree que para su mejor justificación y mayor claridad, conviene agrupar los actos observados por los Señores Contadores Fiscales, en razón de la disposición legal ó reglamentaria en virtud de la cual se han producido, precediendo cada grupo con la enunciación de la disposición respectiva. Y así, tendríamos:

I

Resoluciones de la Presidencia que encuadran dentro de las atribuciones privativas que le confieren las disposiciones del artículo 65—inciso 2.º de la Ley N.º 1420 y del artículo 15 del decreto reglamentario de 15 de Marzo de 1902, cuyo texto se transcribe:

«Artículo 65. *El Presidente del Consejo Nacional de Educación, tiene, además, las siguientes atribuciones y deberes especiales:*»

.....

.....

2.º *Ejecuta las resoluciones del Consejo.*

Decreto reglamentario de 15 de Marzo de 1902:

Artículo 15. «Una vez dictada una resolución por el Consejo Nacional, *son del resorte exclusivo del Presidente todos los actos sucesivos que de ella emanen ó sean necesarios para su cumplimiento.*»

Están comprendidas dentro de estas disposiciones, las siguientes resoluciones de esta Presidencia, observadas por los Señores Contadores Fiscales:

N.º 2.—Expediente N.º 9858.—Vida de Sarmiento por Lugones.—Adquisición y pago.

N.º 3.—Orden de pago por \$ 300 (trescientos) á favor de D. Leopoldo Lugones importe del pasaje que se le acordó de Buenos Aires á Londres en cumplimiento de comisión del H. Consejo.

N.º 4.—Expediente N.º 1568/911.—Giro al Señor Lugones por \$ 1.333,73 (un mil trescientos treinta y tres pesos con setenta y tres centavos) por pago de colaboraciones á *El Monitor*.

N.º 5.—Expediente N.º 9883.—Pago de gastos al Dr. Beltrán, por conferencias, impresión de las mismas y derechos abonados á la Sorbona.

N.º 6.—Notas N.ºs 6778—7255 y 8415, pago de viático y reintegro de gastos al conferencista Dr. Beltrán.

N.º 12.—Nota N.º 10733 mandando pagar \$ 770 (setecientos setenta) por gastos de entierro á la maestra de la Escuela N.º 3 del C. Escolar 8.º D.ª María Velazco, fallecida.

N.º 14 al 24.—Expedientes N.ºs 6428—I/911.—8306 — L/911. — 12928 — L/911. — 7680/911. — 498 — L/911.—8290—L/911.—6162—A/911.—6526—S/911.—13878—B/911.—14926—L/911.—y 5896—P/911.

N.º 45.—Expedientes N.ºs 14298 y 13274/911—mandando pagar \$ 10.500 (diez mil quinientos) á Gotuzzo, por medallas.

N.º 46.—Expediente N.º 8525/911—mandando pagar á los mismos \$ 1.460 (un mil cuatrocientos sesenta).

N.º 47.—Expediente N.º 16201—A/910—mandando abonar \$ 3.500 (tres mil quinientos) por cintas cinematográficas adquiridas á Andrés F. Aguirre.

N.º 65.—Expediente 53.535/911—pago á J. A. Medina de \$ 400 (cuatrocientos) importe de la impresión de 1.000 (mil) ejemplares del Himno á Sarmiento (Resolución del H. Consejo de acta de 16 de Agosto de 1910—Expediente N.º 9.558—C—artículo 8.º).

N.º 67.—Notas N.ºs 7.407, 7.408 y 7.409—Compra de 30.000 (treinta mil) retratos de Sarmiento por \$ 2.880 (dos mil ochocientos ochenta). (La misma autorización antes citada).

N.º 69—71—72—73—74 y 75.—Expedientes N.ºs 6.568—M/911—2.225—C/3.º—15.818—E—10.541—M/911 y 11.281—M/911—relativos á adquisiciones de pianos para las escuelas á precios de contrato aprobados por el H. Consejo.

N.º 83.—Expediente N.º 10.979/911.—Sueldos de vacaciones concedidos al subpreceptor de Escuela Militar, D. José Flores Pórramón (Reglamentario).

N.º 89.—Nota N.º 657 de 11 de Febrero de 1911 mandando entregar al Señor Vocal D. J. B. Zubiaur \$ 1.000 (un mil) en concepto de viático como presidente de la Comisión constituida para representar al H. Consejo en la colocación de la piedra fundamental de la escuela á construirse en homenaje á Sarmiento en Villa San Francisco del Monte de Oro (San Luis).

II

Resoluciones de la presidencia que encuadran dentro de las atribuciones privativas conferidas al suscrito por el artículo 65—inciso 3.º (primera parte) de la Ley N.º 1420, cuyo texto se transcribe:

«Artículo 65—*El Presidente del Consejo Nacional de Educación, tiene además, las siguientes atribuciones y deberes especiales*».

3.º (primera parte)—*Dirige inmediatamente por sí solo las oficinas de su dependencia, provee á sus necesidades*».....

Están comprendidas dentro de esta disposición legal, las siguientes resoluciones del suscrito,

observadas por los Señores Contadores Fiscales:

N.º 48.—Expediente N.º 6.002—D/911—autorización al arquitecto Señor Altgelt para utilizar los servicios de dos ayudantes y mandándoles pagar por aquellos.

N.º 49/50.—Expedientes N.ºs 17.188 y 14.445/911.—Aprobando rendiciones de cuentas del Inspector Administrativo de las escuelas de Niños Débiles.

N.º 63.—Expediente N.º 2.494/911.—Provisión de artículos de escritorio é impresiones á la Inspección de Escuelas Particulares.

N.º 82.—Expedientes N.ºs 11.727/911--14.788/910--2.606/911--3.839/911--2.765/911--5.714/911--12.934/911 y 16.145/910—relativos á adquisiciones de varias máquinas de escribir con destino á las oficinas. Expedientes N.ºs 16.333/910—8.945/911—1.390/911—7.546/911.—329—C/911 y 7.957/911—por muebles y útiles para las oficinas y trabajos de electricidad para las mismas.

N.º 86.—Expediente N.º 14.244.—Liquidación de diferencia de sueldos á favor de D. Juan C. Allievi.

N.º 90.—Nota N.º 5080, de 19 de Abril de 1911 mandando pagar al escribiente de Secretaría Don Antonio De Ninno \$ 100 (cien) por trabajos extraordinarios.

N.º 91.—Expediente N.º 3.499—Acordando \$ 50 (cincuenta) de sobresueldo mensual al auxiliar de Secretaría D. Lorenzo Fazio Rojas.

N.º 92.—Expedientes N.ºs 14.418—O/910—15.527—O/911—39/910 y 1930—O/911—pago de servicios extraordinarios á empleados de la Oficina de Decorado Escolar.

N.º 93.—Nota N.º 898—Pago de \$ 100 (cien) por trabajos extraordinarios al empleado de Secretaría D. Dionisio Camozzi.

N.º 94.—Expediente N.º 1.994—E/911.—Pago de trabajos extraordinarios á dibujantes de Estadística y nombramiento de auxiliar de Dibujo para la misma Oficina.

N.º 99.—Expediente N.º 16.487—S/911.—Licencia al Prosecretario D. Santiago López, para gestionar su jubilación.

N.º 100.—Expediente N.º 8.127—A/911.—Licencia al Jefe del Archivo D. Camilo López, para gestionar su jubilación.

N.º 101.—Resolución de 18 de Junio de 1912—adscribiendo á D. Víctor Pita á la Oficina de Obligación Escolar y Multas.

N.º 102.—Expediente N.º 156—C/910.—Licencia al Oficial Primero de Contaduría D. Ramón Carou.

N.º 103.—Expediente N.º 15.730—D/910.—Licencia al Tenedor de Libros del Depósito, D. Félix M. de Olazábal.

N.º 104.—Expediente N.º 11.807—B/910.—Licencia á la empleada de la Biblioteca D.^a María Eugenia Rauch.

N.º 105.—Expediente N.º 7.455—P/911.—Licencia al empleado de Secretaría D. J. J. Cardellino.

N.º 106.—Expediente N.º 1.131—I/911 y 13.287—I/911.—Licencias concedidas al ordenanza Manuel Güiraldes.

III

Resoluciones de la presidencia que encuadran dentro de las atribuciones que le confieren á la misma la disposición contenida en el inciso 3.º (segunda parte) del artículo 65 de la Ley N.º 1420 y la resolución del H. Consejo adoptada en sesión de 22 de Febrero del corriente año, (cuyo texto se transcribe á continuación) fijando el verdadero alcance de esta disposición legal:

«Ley N.º 1420—Artículo 65—*El Presidente del Consejo Nacional de Educación, tiene, además las siguientes atribuciones y deberes especiales:*

»
» 3.º—(segunda parte) *atiende en casos urgentes, no estando reunido el Consejo, todo lo relativo al gobierno y administración general de las escuelas, con cargo de darle cuenta.*

Resolución del H. Consejo adoptada en sesión de 22 de Febrero del corriente año por unanimidad de los votos de los miembros presentes: Dr. José María Ramos Mejía, Dr. Pastor Lacasa, Dr. Joaquín M. Cullen y Sr. Enrique de Vedia; fijando el verdadero alcance de esta disposición:

«SESIÓN 8.ª

«Día 22 de Febrero de 1912

»
» En seguida, el Señor Presidente dió cuenta de la siguiente resolución, que, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, adoptara con fecha 10 del corriente:

» Expediente N.º 7.809—C/911.—Visto lo manifestado precedentemente por la Directora de

» la Escuela Normal de Profesoras N.º 1 de la Capital, D.ª Eufemia Gramondo, quien acciéndole á los beneficios de la Ley de Jubilación, solicita su retiro de ese cargo,

SE RESUELVE:

» 1.º—Acceder al retiro solicitado por D.ª Eufemia Gramondo, de la dirección de la Escuela de Profesoras N.º 1 de la Capital, dándosele las gracias por los servicios que ha prestado á la enseñanza.

» 2.º—Nombrar directora de la Escuela Normal de Profesoras N.º 1 de la Capital, á la Profesora Normal D.ª Rosario Vera Peñaloza, con cargo de tomar posesión de su puesto á la mayor brevedad».

»
» El Señor Presidente expuso en seguida circunstanciadamente las razones que fundamentan aquella decisión y abundando en ellas el Vocal Dr. Lacasa, agregó que la actual Vicedirectora de aquella escuela, Señorita Aguirre, acreedora por sus condiciones al ascenso, le había manifestado con reiteración la imposibilidad en que se encontraba para aceptarlo, dada su quebrantada salud y que, en consecuencia, por su parte, daba su voto por la aprobación del nombramiento hecho por el Señor Presidente. En el mismo sentido se expresó el Vocal Señor Vedia, y en seguida pidió la palabra el Vocal Señor Cullen para expresar que no tenía inconveniente en dar también su conformidad en este caso, pues sus informes coincidían con los que se acababan de expresar, pero que creía que tratándose de atri-

» bucciones propias del H. Consejo, correspondía
» que se hiciera en este sentido una indicación al
» Señor Presidente á fin de que en lo sucesivo so-
» metiera estos casos á la previa consideración
» del H. Consejo, pues en el presente no habían
» mediado razones de urgencia para proceder en
» otra forma.

«El Vocal Dr. Lacasa dijo entonces que la
« «urgencia» solo podía apreciarla el que hubie-
» ra de satisfacerla, y así lo había hecho el Señor
» Presidente cuyo procedimiento podía ó no ser
» discutido, pero no el criterio con que apreciara,
» dentro de su responsabilidad, la «urgencia» en
» resolver casos como el que sometía á la apro-
» bación del H. Consejo.

«El Señor Presidente manifestó entonces que
» pasando por alto lo de la indicación formulada
» por el Vocal Dr. Cullen, pues no creía neces-
» rio reiterar siquiera su respeto y consideración
» hacia las atribuciones del H. Consejo y de los
» Señores Vocales particularmente, hacía notar
» que su procedimiento se ajustaba estrictamente
» á las prescripciones de la Ley, cuyos artículos
» pertinentes—59 y 65—leyó en ese momento; agre-
» gando que cuando la Ley lo autoriza á proce-
» der, «no estando reunido el Consejo» es á fin
» de conjurar los inconvenientes de posibles au-
» sencias de éste en la época de vacaciones.

«El Vocal Dr. Cullen á su vez, manifestó su
» disconformidad con este concepto, pues en su
» opinión, el H. Consejo no tiene «vacaciones» des-
» de que debe sesionar, durante todo el año, y en
» «la época de vacaciones escolares, una vez por
» semana cuando menos y que, en consecuencia,

» la atribución que el Señor Presidente había ejer-
» cido le corresponde en toda época y momento
» en que el H. Consejo no esté «reunido», es de-
» cir, que no esté en sesión. El Vocal Señor Vedia
» adhirió á la opinión del Vocal Dr. Cullen, quedan-
» do así establecido, y dándose el punto por sufi-
» cientemente discutido quedó aprobado, con el
» voto de los Señores Vocales presentes el nom-
» bramiento de la directora de la Escuela Normal
» de Profesoras N.º 1 á favor de la Señorita Ve-
» ra Peñaloza».

Se encuentran comprendidas dentro de las atribuciones dadas á la Presidencia por las disposiciones legales y del H. Consejo, antes transcritas, las siguientes resoluciones de la misma observadas por los Señores Contadores Fiscales, y adoptadas con cargo de dar cuenta al H. Consejo:

N.º 10.—Expediente N.º 15.076/911.—Entrega de \$ 1.000 (mil) á D.ª Constancia Zukas, en calidad de subsidio para la construcción de un edificio escolar para la escuela nacional á crearse en Comodoro Rivadavia (Chubut).

N.º 11.—Expediente N.º 9.118/911.—Pago de gastos de entierro y luto por fallecimiento de la directora de la Escuela N.º 10 del Consejo Escolar 2.º—, D.ª Mercedes Muñoz.

N.º 13.—Expediente N.º 14.965—4º/910.—Pago de los haberes que le hubieran correspondido á la maestra fallecida Carolina M. de Herrera á favor de su señora madre.

N.º 26.—Expediente N.º 45.907/911.—150 La Guerra del Paraguay «Thompson» \$ 1.800 (un mil ochocientos).

N.º 27.—Expediente N.º 16.290/911—20 Notas Biográficas «Scotto». 120 (ciento veinte).

N.º 28.—Expediente N.º 2.301/911—300 La naturaleza y el hombre «Jijena» \$ 1.500 (un mil quinientos).—Escuelas Capital.

N.º 29.—Expediente N.º 4.959/911—600 La Naturaleza y el hombre «Jijena» \$ 3.000 (tres mil).—Escuelas Normales.

N.º 30.—Expediente N.º 15.174/911—500 Páginas Argentinas «Leguizamón» \$ 1.250 (un mil doscientos cincuenta).

N.º 31.—Expediente N.º 5.385/911—50 Les Armées russes «Rostagno» \$ 800 (ochocientos).

N.º 32.—Expediente N.º 7.694/911—50 Les Armées russes «Rostagno» \$ 800 (ochocientos).

N.º 33.—Expediente N.º 13.870/911—100 Curso gradual de dibujo «Servi» \$ 1.000 (un mil).

N.º 35.—Expediente N.º 11.069/911—20.000 folletos Jura de la Bandera \$ 950 (novecientos cincuenta).

N.º 36.—Expediente N.º 342/911—3 Historia constitucional de la República Argentina «Varela» \$ 500 (quinientos).

N.º 37.—Expediente N.º 1.755/911—200 Canto á la patria «Oyuela» \$ 600 (seiscientos).

N.º 39.—Expediente N.º 8.601—P/911—500 Sudamericanos célebres «Paz Soldan» \$ 500 (quinientos).

N.º 40.—Expediente N.º 7.218—200 Laurel y Encina «Donnel y Palmer» \$ 320 (trescientos veinte).

N.º 41.—Expediente N.º 834/911—100 de Buenos Aires á Santiago de Chile «Pearson» \$ 300 (trescientos).

N.º 43.—Expediente N.º 5.724—B/911—50 Plazas y calles de Buenos Aires «Boero» \$ 200 (doscientos).

N.º 44.—Expediente N.º 12.183—R/911—Pago de \$ 135 (ciento treinta y cinco) á Luis F. Rivarola por impresión de 1.000 ejemplares de la Canción patriótica de Esteban de Luca.

N.º 51.—Expediente N.º 2.435—C/911—Adquisición de mobiliario y útiles, con destino á las escuelas normales.

N.º 53.—Expediente N.º 7.644/911—Construcción de un baño en la escuela calle Tacuarí 567.

N.ºs 54, 55, 56 y 57.—\$ 54.457 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete) abonados á los diarios por publicaciones y expedientes N.ºs 129/911—8.633/911 y 9.981/911.

N.º 58.—Expediente N.º 13.472/910—Impresión de planos para la Dirección General de Arquitectura por la casa de J. Weiss y Preusche.

N.º 49/50.—Expedientes 17.188/911 y 14.445/911—Aprobación de las rendiciones de cuentas por \$ 1.552,15 (un mil quinientos cincuenta y dos pesos con quince centavos) y \$ 920,36 (novecientos veinte pesos con treinta y seis centavos), respectivamente, del Inspector Administrativo de Escuelas de Niños Débiles, Don C. T. Calderón.

N.º 64.—Expediente N.º 15.140/911—Pago de \$ 500 (quinientos) á Don Santiago Canale, por sandwiches adquiridos para conmemorar el 12 de Octubre en el cuartel de Granaderos á Caballo.

N.º 66.—Expediente N.º 16.355/910—Acordando \$ 100 (cien) á la Comisión Nacional de la Juventud.

N.º 68.—Expedientes N.ºs 13.145—5.º y 450—C—

Autorizando al Tesorero para cancelar deudas de pavimentación.

N.º 70.—Expediente N.º 8.162—M/911—Compostura urgente de pianos.

N.º 76.—Expediente N.º 15.378—D/910—Provisión de materiales para el taller de Reparaciones del Depósito.

N.º 77.—Expediente N.º 13.037—D/910—Provisión de artículos para el taller de Reparaciones del Depósito.

N.º 78.—Expediente N.º 6.083/911—\$ 500 (quinientos) entregados al Inspector Arancibia, para pago del transporte de un salón desmontable de madera, con destino á escuela.

N.º 79.—Expediente N.º 7.948—L/911—Adquisición de 100 ejemplares de la obra «Enseñanza de adultos é instrucciones complementarias de la escuela en Norte América», por Zubiaur.

N.º 80.—Expediente N.º 946—A/911—Pago de \$ 500 (quinientos) importe de 50 bancos construídos para las Escuelas de Niños Débiles por P. Alegre.

N.º 81.—Expediente N.º 1224—D/911—Autorización al Jefe del Depósito para adquirir alfajías para embalaje por valor de \$ 840 (ochocientos cuarenta).

N.º 81.—(bis) Expediente N.º 12.515—I/909—Autorización al Jefe del Depósito para adquirir á precios de licitación ó aprobados \$ 24.794,45 (veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos) en artículos para las escuelas.

N.º 82.—(bis) Expediente N.º 12.447/911—Liquidación y pago á favor del profesor de gim-

nasia de las Escuelas de Niños Débiles, Don Héctor Zambra.

N.º 95.—Expediente N.º 16.275—D/910.—Agui-
naldo acordado al personal de servicio de la
Repartición.

IV

Resoluciones de esta Presidencia que encuadran dentro de las facultades que le diera el H. Consejo, por el Acuerdo de 29 de Diciembre de 1910, aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública, y cuyo texto en la parte pertinente, se transcribe á continuación:

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1910.

«Habiendo el Poder Ejecutivo, por decreto
» de 21 del corriente, reintegrado á la inmediata
» dependencia del Consejo Nacional de Educación
» á partir del 1.º de Enero próximo, todas las
» escuelas normales de carácter nacional, existen-
» tes en la República, siendo en consecuencia
» urgente proveer á la más pronta organización
» del servicio especial que requerirá esta nueva
» é importante rama de la enseñanza primaria,
» como lo dispone el artículo 3.º del expresado
» decreto,

El H. Consejo en sesión de la fecha,—

RESUELVE:

«Art. 1.º La Dirección y Administración de
» las Escuelas Normales, estará á cargo de la Se-
» cretaría General de Enseñanza Normal, que fun-
» cionará bajo la inmediata dependencia del Pre-
» sidente del Consejo Nacional de Educación, con
» un Secretario General, que será á la vez, Jefe

» de la Inspección de Enseñanza Normal; un Pro-
» secretario, y demás personal técnico y adminis-
» trativo necesario».

En uso de las atribuciones que le confiere al
suscrito este Acuerdo del H. Consejo, adoptó la
siguiente resolución:

N.º 51.—Expediente N.º 2.435—C/911.—Adquisi-
ción de mobiliario y útiles para las escuelas nor-
males, con cargo de dar cuenta al H. Consejo.

V

Actos de esta Presidencia observados por los Señores Contadores
Fiscales y que fueron ya aprobados por el H. Consejo, por
resolución fecha 21 de Marzo del corriente año; cuyos ante-
cedentes y parte dispositiva pertinentes, se transcriben á con-
tinuación, tomados del acta respectiva:

«SESIÓN 13.^a

«Día 16 de Marzo de 1912

«.....Se leyó en seguida la siguiente comuni-
» cación presentada por el Señor Vocal Doctor
» Cullen, resolviéndose pasarla en vista al Señor
» Presidente del H. Consejo:

.....
.....
» propongo al H. Consejo el siguiente proyecto de

RESOLUCIÓN:

«Art. 1.º—El Consejo Nacional de Educación
» desaprueba el proceder del Señor Presidente
» sobre nombramientos de personal docente, de-
» claraciones del mismo en estado de disponibili-
» dad y otorgamientos de becas.

«Art. 2.º—Desaprueba también el proceder del
» Señor Secretario, que ha autorizado esos actos
» y no ha presentado á la resolución del Con-
» sejo, los asuntos que incuestionablemente le co-
» rresponden.

«Art. 3.º—El Señor Presidente someterá á la
» resolución del Consejo todos los nombramientos
» que ha hecho, las becas que ha concedido y la
» lista de todo el personal en estado de disponi-
» bilidad, con expresión de nombres, fechas, suel-
» dos, causas y tiempo que ha durado la dispo-
» nibilidad.

«Art. 4.º—El Señor Secretario presentará en
» la primera sesión todos los expedientes á des-
» pachar sobre nombramientos de personal docen-
» te y concesión de becas y procederá en la mis-
» ma forma en adelante.

«SESIÓN 15.^a

«Día 21 de Marzo de 1912

.....
«....En seguida, se entró á considerar el asun-
» to promovido por el Señor Vocal Dr. Cullen en
» su comunicación que presentara en la sesión
» de 16 del corriente; y atento á que el Vocal
» Dr. Lacasa no conocía la expresada comunica-
» ción, el Señor Secretario procedió á leerla nue-
» vamente.

«Acto continuo se pasó á dar lectura al si-
» guiente mensaje del Señor Presidente, explican-
» do sus procedimientos en los casos señalados por
» el Señor Vocal Dr. Cullen, en su mencionada
» comunicación:

.....

» «El hecho de dar cuenta en sesión no revis-
» te absolutamente urgencia, porque ello consti-
» tuye una formalidad legal que puede llenarse
» con algunos días de retardo, sin que por eso
» se perturbe la administración y organización de
» las escuelas. Así también lo ha reconocido siem-
» pre el Consejo cuando jamás ha exigido premu-
» ra en tales casos.

» «Por otra parte, la Ley y los decretos regla-
» mentarios de la misma no fijan término para
» llenar esta formalidad y más bien el H. Conse-
» jo recientemente, en su sesión de 22 de Febre-
» ro ppdo., ha establecido, por unanimidad de vo-
» tos, que la urgencia solo puede apreciarla el Pre-
» sidente del Consejo dentro de su responsabili-
» dad.

» «Tal es el procedimiento que el suscrito en-
» contró sancionado por la práctica al hacerse
» cargo de la Presidencia del Consejo y tal es
» el que ha seguido hasta la fecha sin el menor
» inconveniente por parte del H. Consejo y mucho
» menos de la Presidencia que solo ha persegui-
» do invariablemente el mejor servicio público.

» «Continuando el Dr. Lacasa con el uso de la
» palabra comenzó haciendo un estudio sobre el
» claro, explicativo y satisfactorio informe de la
» Presidencia, que podría considerarse como do-
» cumento público por su verdad; hizo también
» un detenido estudio de la acción inteligente del
» Señor Presidente desde su ingreso al H. Conse-
» jo. Estudió después las orientaciones principa-
» les que debía imprimir el H. Consejo á la ense-

» ñanza primaria, entrando con este motivo á consi-
» derar en su fondo y en sus disposiciones gene-
» rales la Ley de 1884, que consideró la más impor-
» tante de las orgánicas dictadas para el país,
» agregando que los poderes públicos y los gran-
» des hombres que intervinieron en su facción,
» la consagraron por su elevación y su toleran-
» cia á la altura de un monumento nacional; que,
» efectivamente, no podía haber objetos más no-
» bles que los que persigue esa Ley; que ella pre-
» vé á todos los grandes rumbos hacia donde
» marcha la Nación, y puesta en acción con efica-
» cia y sin espíritu estrecho ha de formar el pue-
» blo nacional, eliminando el analfabetismo y
» dando el verdadero concepto del ciudadano;
» que el Dr. Ramos Mejía, que por sus cualida-
» des era un exponente de nuestra mayor cultu-
» ra, se encontraba perfectamente encuadrado den-
» tro del concepto que la Ley tenía del cargo de
» Presidente del H. Consejo. Analizó la diferencia
» que existía entre la condición de Presidente y
» la de los Vocales, así como la diferenciación
» prescripta por la Ley para el nombramiento
» del uno y de los otros, de lo que derivaba la
» capacidad de acción que á cada uno de ellos
» incumbía, según su cargo respectivo.

» «Dijo que la obra del Consejo Nacional de
» Educación debía medirse por las orientaciones
» que se señalaran ó por los grandes actos cu-
» yos efectos debían refluir ventajosamente so-
» bre la masa escolar de la Nación.

» «Que así por ejemplo, la intensificación de
» la enseñanza nacional se encontraba en ese ca-
» so, pues sus resultados eran de evidencia inne-

» gable, como se desprendía del siguiente hecho:
 » en plena Capital Federal, en barrios apartados,
 » solo se conocían próceres de países extranjeros,
 » á quienes se rendía culto, desconociéndose por
 » completo el sentimiento nacional y se usaban
 » divisas sectarias y al presente debido á aquella
 » acción eficiente del Señor Presidente Dr. Ramos
 » Mejía, con la colaboración del H. Consejo, en
 » todos los barrios y escuelas como en todas las
 » demás escuelas dependientes de este cuerpo que
 » existen en todo el territorio de la Nación, solo
 » se rinde culto á la patria y á una sola enseña
 » nacional, que se levanta sobre cada escuela y
 » que es saludada por los niños con himnos al ser
 » izada y arriada todos los días; que es en esta
 » forma como el H. Consejo tiende á afirmar el
 » sentimiento nacional.

«Hizo referencia después á la creación de
 » mil escuelas nacionales en las provincias, que
 » llevaban la acción educadora á todos los puntos
 » del país y dijo que este gran hecho solo produ-
 » jo alarma en los espíritus apocados, que olvi-
 » dan lo que Sarmiento decía: Que para crear
 » escuelas siempre había autorización y autoridad,
 » y agregó: que el asunto se debatió mucho; el
 » Poder Ejecutivo lo envió al Congreso y este
 » alto cuerpo del Estado, procediendo en armo-
 » nía con la Ley de Educación Común, votó los
 » fondos necesarios y mantuvo las escuelas crea-
 » das. Así se salvaron de la ignorancia ciento cin-
 » cuenta mil niños, por haberse aplicado con altu-
 » ra los anhelos de la citada Ley.

« Mucha obra benéfica, silenciosa y grande,
 » agregó, ha realizado el Consejo en ese sentido. »

«.....
 » Esa es la obra del H. Consejo, dijo, llevada
 » en mucha parte á cabo por iniciativas de su
 » Presidente, y á este funcionario, agregó, que se
 » encuentra consagrado por completo á una obra
 » tan grande, se le quiere entorpecer, á mi juicio,
 » erróneamente, en sus altas miras, presentándole
 » dificultades de detalle; que basta mencionarlas
 » para darse cuenta de que son nimias y que, sin
 » embargo, el Señor Presidente en su informe lle-
 » no de verdad y sencillez ha disipado toda du-
 » da, dejando en evidencia que los actos que se
 » le imputan como arbitrariedades no son sino el
 » cumplimiento mecánico de lo que el H. Consejo
 » resuelve y anhela, teniendo en cuenta su misión
 » legal y de conciencia.

«Estudió en detalle los actos de la Presiden-
 » cia á que se refiere el Dr. Cullen, á la luz de
 » las disposiciones de la Ley, afirmando que nin-
 » guno de ellos importaba una infracción de
 » aquella; agregando que el H. Consejo debía con-
 » tinuar su obra de difundir la instrucción prima-
 » ria con la mayor amplitud, pues en ello estaba
 » interesado vivamente el país como también el
 » Señor Presidente de la Nación que en su elevado
 » programa y en diversos mensajes al H. Congre-
 » so y discursos públicos había elogiado la acción
 » del Consejo Nacional de Educación, alentándolo
 » en sus propios anhelos por considerar que esa
 » obra que consideraba suya, era talvez la más
 » fecunda para la grandeza nacional.

«En mérito de estas consideraciones, termi-
 » nó solicitando la aprobación de la conducta del
 » Señor Presidente y, como consecuencia, la del
 » Señor Secretario General.

«El Vocal Señor Vedia pidió en seguida la
» palabra y dijo que era poco lo que quedaba que
» agregar á cuanto había dicho el Vocal Dr.
» Lacasa y que él hacía suyo
» y que, en definitiva, se declaraba plenamente
» satisfecho con la exposicion del Señor Presiden-
» te: que, en consecuencia, reconocía la inconsis-
» tencia de los cargos formulados por el Vocal Dr.
» Cullen y que pedía al H. Consejo una resolu-
» ción que así lo expresara.

«Después pidió la palabra el Señor Vocal Ji-
» jena, y en uso de ella, dijo: que en la acusa-
» ción hecha por el Vocal Dr. Cullen debía consi-
» derarse los hechos denunciados como irregulares
» ó ilegales cometidos por la Presidencia absor-
» biendo facultades propias del H. Consejo.

«Que pensaba que el Señor Vocal Dr. Cullen
» había equivocado el procedimiento, pues concre-
» tando cada caso, debió pedir explicaciones al
» Señor Presidente ante el H. Consejo de los ac-
» tos que considerara ilegales, siempre que ellos
» se refieran al tiempo en que ha intervenido ó
» debió intervenir como Vocal; pero que no creía
» que tenía derecho alguno como tal para pedir
» se revean resoluciones aprobadas legalmente
» con anterioridad á su nombramiento.

«Todos los nombramientos de maestros y
» empleados hechos con carácter de urgencia, han
» venido, agregó, á conocimiento del H. Consejo,
» han sido sancionados con la severidad que exi-
» ge la Ley, *dado que en todas las actas en las que*
» *constan las resoluciones del H. Consejo en quó-*
» *rum legal no consta en ellas observaciones ni re-*
» *solución desaprobatoria.*

«Manifestó que podía afirmar que conocía
» perfectamente sus deberes y derechos como Vo-
» cal y que, por sus antecedentes de funcionario
» como por su educación y dignidad de caballero,
» jamás había hecho delegación de lo que conside-
» raba las facultades de su mandato. No, no lo había
» hecho ni lo haría en ninguna circunstancia, y
» que el mismo Señor Presidente sabía que más
» de una vez habían tenido disidencias en la in-
» terpretacion de tal ó cual atribución, pero cono-
» cía tambien cómo se habían solucionado discre-
» tamente aquellas, atendiendo los intereses supe-
» riores de la educación común ó de su adminis-
» tración.

«Insistió en que era menester hacer esta afir-
» mación porque ello importaba el fundamento de
» su voto en contra del proyecto presentado por
» el Dr. Cullen, desautorizando los nombramientos
» de maestros y empleados, hechos según él por
» el Señor Presidente, cuando la realidad es que
» han sido resueltos por el H. Consejo, como
» consta en las actas aprobadas.

«Dijo, además, que la exposición detallada
» del Señor Presidente explicando y refutando
» todos los puntos del proyecto-acusación del Vocal
» Dr. Cullen, llevaba á su espíritu el pleno con-
» vencimiento de que no queda ningún cargo sub-
» sistente y que era por ello que se adhería al
» proyecto de resolución del Vocal Señor de Ve-
» dia, debiendo hacer constar que cuando pidió en
» la sesión anterior se aplazara para la presente
» para ser tratado en Consejo pleno el mencio-
» nado proyecto, era no solo por ser graves los
» cargos sino también porque los mandatos de la

» Ley, en casos de disconformidad sobre actos re-
» lativos al gobierno y administración general de
» las escuelas, el Consejo no podrá, dice la Ley,
» desaprobar los actos de su presidencia sino con
» el voto de dos tercios de sus consejeros.

«Creo pues, terminó, que el Consejo está ha-
» bilitado para resolver hoy mismo sobre el pro-
» yecto en discusión.

«Puesto en seguida á votación el proyecto del
» Vocal Dr. Cullen, fué rechazado con el solo voto
» á su favor del autor del mismo.

«Puesto acto continuo á votación la moción
» del Señor Vocal de Vedia, quedó aprobada en
» los siguientes términos:

«Desestimar por infundados los cargos for-
» mulados por el Vocal Dr. D. Joaquín M. Cullen,
» aprobándose la conducta observada por el Se-
» ñor Presidente Dr. D. José María Ramos Mejía
» en todos los casos comprendidos en aquellos,
» así como la del Señor Secretario D. Segundo M.
» Linares; mandando publicar todos los anteceden-
» tes de este asunto».

Parte pertinente del Decreto del Poder Eje-
cutivo fecha 28 de Mayo ppdo. sobre la nota
presentada por el Vocal Dr. Cullen:

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1912.

«Vista la nota del Vocal del Consejo Nacional
» de Educación, Dr. Joaquín M. Cullen, en la que
» pide que el P. E. previo informe del Señor Pro-
» curador General de la Nación acerca de la pro-
» cedencia de su gestión, declare nula la resolu-
» ción de dicho Consejo del 21 de Marzo ppdo.,

» se avoque el conocimiento de todas las ilegali-
» dades que denuncia, ordene su esclarecimiento
» con intervención de la Contaduría General res-
» pecto de los cargos sobre inversiones indebidas
» de fondos y dicte resolución condenatoria de
» ellos, y considerando: que los actos del Pre-
» sidente del Consejo y de éste mismo que se de-
» nuncian como arbitrarios y cuya nulidad se so-
» licita, *no importan á juicio del P. E. un alza-
» miento de ellos contra las leyes y decretos que
» establecen y delimitan sus atribuciones aunque
» puedan no ajustarse estrictamente á las que á
» uno y otros les incumbe*»....

Se encuentran comprendidos dentro de estas
disposiciones los siguientes actos de la Presidencia:

N.º 1.—Nombramiento del personal adminis-
trativo y del magisterio.

N.º 85.—Expediente N.º 13.010—B/910.

N.º 98 y 101.—Disponibilidad de maestros.

VI

Actos de la Presidencia observados por los Señores Contadores
Fiscales, que encuadran dentro de la resolución del H. Con-
sejo, adoptada en sesión de 30 de Mayo del corriente año,
y cuyo texto en la parte pertinente se transcribe á conti-
nuación:

«Expediente N.º 5.332—P.—El H. Consejo de
acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Es-
pecial,

RESUELVE:

» 1. Aprobar la reorganización del personal téc-
» nico y administrativo de la Repartición propues-

» ta por el Señor Presidente en su mensaje de 7
» de Mayo corriente, en la forma dictaminada por
» la expresada Comisión Especial, con arreglo á
» las siguientes bases:

- «a) — Adaptación del personal actual con la distribución y denominación expresadas en el presupuesto vigente.
- «b) — Asignación de los viáticos que están taxativamente expresados en la Ley y de los que están comprendidos en los Items 27 y 28 del Inciso 14 del Presupuesto General.
- «c) — Imputación de los gastos que demanda el personal que no está expresamente determinado en el Presupuesto, cuyos servicios son necesarios para el cumplimiento de la Ley 4874, al Item 2—Partida 1 del Inciso 14, sea en sueldos ó en remuneraciones extraordinarias necesarias, que se relacionan á aquella ley».

Están comprendidos en esta resolución las siguientes medidas adoptadas por la Presidencia:

N.º 84.—Expediente N.º 13.253—P.—Nombramiento del auxiliar de Estadística Don Eduardo del Saz.

N.º 87.—Expediente N.º 16.405—C/911.—Sobresueldo á Don Julio Migoya García.

N.º 88.—Expediente N.º 13.540—P/911.—Viático á la auxiliar de Dibujo Doña Amalia Vigliani.

N.º 96.—Sueldos y viático de Don Andrés Freyre.

VII

Resoluciones varias de esta Presidencia observada por los Señores Contadores Fiscales y que requieren una explicación especial

N.ºs 8 y 42.—Nota N.º 8.095 y expediente número 15.576/911—mandando abonar por la primera la suma de dos mil pesos (\$ 2.000) á Don M. Rojas Silveyra y adquiriendo por el segundo cien ejemplares de «La Tradición Puntana» por Gez, por la suma de cien pesos (\$ 100). Tanto una como otra resolución de esta Presidencia emanan de las autorizaciones respectivas acordadas por el H. Consejo en sesiones de 23 de Agosto de 1910 y de 4 de Junio y 18 del mismo mes y año, respectivamente, como se comprueba con la siguiente transcripción de las actas respectivas, en la parte pertinente:

El H. Consejo, en sesión del 23 de Agosto de 1910,

RESUELVE:

«Expediente N.º 11.167—P—Autorizar á la Presidencia para que bajo su dirección ordene la
» impresión de un libro que contenga las cien
» mejores poesías para niños, de autores argentinos, y que se publicará en edición económica
» y de carácter popular para ser distribuída entre los maestros y alumnos de las escuelas dependientes del Consejo Nacional».

El H. Consejo, en sesión de 4 de Junio de 1910,

RESUELVE:

«Adquirir del señor J. W. Gez cien ejemplares
» del libro «La Tradición Puntana» de que es

» autor, al precio de un peso $\frac{m}{n}$ (\$ 1.00) cada uno».

Pero es que hay más aun.

El H. Consejo, en sesión de 18 de Junio de 1910,

RESUELVE:

«Expediente 7.914—P—Rectificar la resolución
» de 4 del corriente en el sentido de que el pre-
» cio de cada ejemplar del libro «La Tradición
» Puntana», adquirido del Señor Juan W. Gez, es
» de dos pesos $\frac{m}{n}$ (\$ 2.00) y no de un peso (\$ 1.00)
» como se ha consignado por error».

N.^{os} 25 y 34.—Expediente N.^o 10.695—E/910 y
15.389—P/910.—La adquisición del libro «Primeras
hojas» de la Señora Amico, efectivamente fué au-
torizada y resuelta en sesión por el H. Consejo.

En cuanto al «Libro amigo» consta la auto-
rización del gasto en actas de 10 de Agosto y 2
de Noviembre de 1911.

N.^{os} 52 y 60/62.—Expedientes N.^{os} 7.135/911 y
6.814—6.815 y 6.816/911. — Al igual de casos an-
teriores se trata en los presentes también de omi-
siones de la Secretaría, desde luego que todas
estas resoluciones de la Presidencia, observadas
por los Señores Contadores, fueron adoptadas con
cargo de dar cuenta al H. Consejo.

N.^o 59.—Expediente N.^o 7.764 — M— El pago
de la suma de seiscientos setenta pesos (\$ 670)
á los Señores Massa y Acal por un servicio de
lunch en la inauguración de los edificios escolares
de la Capital y en el Centenario de Sarmiento, fué
oportunamente autorizado por el H. Consejo en
la resolución ya transcrita anteriormente, auto-
rizando los gastos de la celebración del expresa-

do Centenario, con imputación á «Recursos del
Consejo».

N.^o 97.—Respecto al visitador de las escuelas
Señor Matías Ramos Mejía, debo manifestar lo si-
guiente: Este maestro ocupaba el puesto de sub-
preceptor en la escuela militar anexa al Depósi-
to de Marinería, con el sueldo mensual de ciento
veinte pesos (\$ 120) cuando fué atacado de una
dolencia de carácter tal que el clima de Buenos
Aires la agravaba, siéndole en cambio favorable
el de Córdoba. Tratando de conciliar la difícil si-
tuación en que colocaba á este maestro el diag-
nóstico médico y las necesidades de la Repartición,
como se había hecho en otros casos de enferme-
dad de maestros, observados también por los Se-
ñores Contadores Fiscales y encontrándose vacan-
te en ese momento un puesto de visitador de
escuelas de aquella provincia, se le otorgó el nom-
bramiento en tal carácter, con el sueldo de tres-
cientos pesos (\$ 300) que es el fijado por el pre-
supuesto. Ahora bien, como estos visitadores gozan
además de una partida para viático, la Contaduría,
en atención á este caso transitorio, le continuó
liquidando la suma equivalente ó sea los ciento
veinte pesos (\$ 120) hasta que habiendo desapa-
recido las causas que motivaron la resolución de
referencia, el Señor Ramos Mejía presentó la re-
nuncia de su puesto.

N.^o 102.—Expediente N.^o 156-C/910.—Este expe-
diente trata de la licencia concedida al Oficial Pri-
mero de Contaduría, Señor Ramón Carou. De los
antecedentes que obran en el mismo resulta que
con fecha 28 de Diciembre de 1909, el citado em-
pleado pidió licencia por un año *sin goce de sueldo*

y por motivo de salud, causa que fué comprobada por el suscrito en su carácter de médico. Teniendo en cuenta que en los seis (6) años de servicio no había gozado jamás de licencia, que además no había incurrido durante ese tiempo en *ninguna falta de asistencia* como consta en los libros respectivos, que era un empleado que había concurrido consecutivamente durante dos años por la mañana sin percibir remuneración alguna y que además siendo encargado de la liquidación de las planillas de maestros de la Capital le constaba al suscrito que llevaba trabajo á su casa consagrándose á él hasta altas horas de la noche, no creyó justo por más que así se solicitaba, acordarle la licencia en su totalidad sin goce de sueldo sino que, en atención á las razones expuestas, lo menos que podía concedérsele fué el año de licencia, del cual tres meses solamente con goce de sueldo. Posteriormente, obedeciendo á idénticas causas y subsistiendo los motivos á que he hecho referencia, se le acordaron dos meses más con goce de sueldo, omitiendo la Secretaría en éste como en otros casos, la formalidad de llevar el asunto á sesión.

N.º 105.—Expediente N.º 7455—P/911—Este expediente trata de la licencia concedida al empleado de Secretaría, Señor Juan José Cardellino, por enfermedad comprobada con certificado oficial de la Inspección Médica Escolar.

De los antecedentes que obran en los expedientes respectivos resulta que el citado empleado con fecha 30 de Marzo de 1911 solicitó licencia por un mes y medio por enfermedad comprobada; la que fué acordada por resolución de Abril 11 del mismo año con goce de sueldo, en aten-

ción á sus buenas condiciones de empleado. Más tarde por resolución de Mayo 5 se le prorrogó por un mes con goce de sueldo, de acuerdo con lo aconsejado por el certificado médico de la Inspección Médica Escolar. Habiendo solicitado una nueva prórroga en fecha 26 de Mayo por no haberse restablecido aún de la enfermedad, la Presidencia teniendo presente la duración de la licencia resolvió pasar á informe de la Inspección Médica Escolar para que expresara su opinión al respecto, produciendo ésta el siguiente informe que obra en el expediente N.º 7455—S: «Esta Inspección ha visitado en su domicilio al Señor Juan José Cardellino comprobando que padece de flebitis de ambas piernas, necesitando aún treinta días más ó menos para atenderse debidamente. —G. Sisto». En virtud de este informe se le prorrogó la licencia por un mes más con goce de sueldo. Ahora bien, este empleado trabajaba con el horario de 8 á 11 a.m. y de 12 á 5 1/2 p.m., percibiendo en tal concepto la remuneración de ciento cincuenta pesos (\$150) correspondiente á su puesto de auxiliar y cien pesos (\$100) por trabajos extraordinarios. La Contaduría á raíz de la licencia le liquidó solamente la suma de ciento cincuenta pesos (\$150) como sueldo, dando una interpretación especial á las resoluciones acordando las licencias, que no fué la de la Superioridad, porque ésta no podía privar de sus emolumentos ó reducir el sueldo á un empleado digno por todo concepto de la consideración del Consejo, en los momentos en que postrado por una gravísima enfermedad necesitaba más que nunca de sus haberes para abonar asistencia médica y de-

más gastos numerosos que acarrean siempre estos accidentes. En consecuencia se ordenó á Contaduría liquidara sus sueldos á razón de doscientos cincuenta pesos (\$ 250) mensuales por ser esta la forma en que lo venía percibiendo desde hacía largo tiempo, habiendo omitido Secretaría dar cuenta en sesión de este asunto.

N.º 106.—Expediente N.º 1.131—I.—Trata este expediente de la licencia concedida al ordenanza de la Inspección de Provincias Don Manuel Güiraldes. Este ordenanza con fecha 7 de Febrero de 1911, presentó una nota que obra en el expediente citado, solicitando se le acordara seis meses de licencia con goce de sueldo para atender una grave enfermedad que había puesto en peligro su vida. Hacía constar al respecto sus once años de servicios continuos prestados en la repartición. El informe de la Inspección General de Provincias elevando la nota de referencia decía textualmente: «Como se trata de un pobre padre de familia, convaleciente de una enfermedad terrible, que hace esfuerzos sobrehumanos para llenar su cometido á fin de que no le falte el pan para sus hijos y al mismo tiempo es, aun que modesto, un antiguo y meritorio servidor del H. Consejo, opino que al acordar la licencia en la forma solicitada, la Superioridad, á la par de una obra humanitaria, realizará una obra de equidad». En vista de estos antecedentes se le concedió en Febrero 13 de 1911 la licencia de acuerdo con lo pedido. Con fecha Septiembre 6—expediente N.º 13.287—I—el mismo ordenanza solicitaba prórroga de la licencia hasta fin de año, adjuntando un certificado de la Inspección Médica Escolar

que corre agregado á dicho expediente, cuyos términos eran los siguientes: «El Dr. en Medicina » que subscribe, certifica que Manuel Güiraldes, em- » pleado del Consejo Nacional de Educación, nece- » sita un permiso prolongado, para reponer su » salud comprometida por una pulmonía que lo ha » dejado en estado de suma postración.— H. » *González del Solar*».—La Inspección General de Provincias apoyó decididamente el pedido recordando las buenas condiciones del recurrente, y en Septiembre 22 de 1911, en atención á los expresados informes se le prorrogó hasta fin de año la licencia solicitada.

VIII

Licencias al magisterio acordadas por el Señor Presidente

Las observaciones que hacen al respecto los Señores Contadores Fiscales, solo aparentemente tienen razón de ser. Digo aparentemente porque ha sido práctica invariable de esta Presidencia dar cuenta de todas las resoluciones que ha adoptado no encontrándose reunido el Consejo, como puede comprobarse en casos concretos que existen en las actas respectivas. En efecto, en el acta de la sesión N.º 6 del 16 de Febrero de 1911, consta, por ejemplo, que en el expediente 498 —L, se resolvió «rectificar la resolución de Enero 21 último, de fojas 3 de este expediente, en el sentido de que los 10.000 ejemplares del libro «La Historia argentina de los Niños» (en cuadros) de los Doctores Carlos Inhoff y Ricardo Levene, serán distribuidos entre las escuelas nacionales de la

Provincia de Entre Ríos, y no entre las particulares de la misma provincia, como por error se indica en la expresada resolución». Varios casos, repito, como éste, existen, pero con el propósito de no extenderme demasiado me limitaré al citado para explicar la razón de algunas resoluciones observadas.

La palabra «rectificar» empleada en la resolución de referencia y en las que indican los Señores Contadores Fiscales, no ha sido usada en el sentido que quiere dársele. La presidencia en tales casos no ha pretendido «rectificar» una resolución del H. Consejo; primero, porque la Ley no lo faculta para ello y segundo porque conoce perfectamente sus atribuciones y ha sido su norma de conducta encuadrar dentro de las mismas todos sus actos. La Secretaría empleaba la palabra «rectificar» simplemente á los efectos de que la resolución fuera *modificada* en el sentido indicado, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, pero sin intenciones de desconocer ni modificar una resolución del mismo. La práctica, deficiente, si se quiere, ha sido la que ha guiado en la redacción de esas resoluciones en los expedientes observados; resoluciones que la presidencia firmaba y devolvía á Secretaría para que se llenaran todos los extremos posteriores, es decir para dar cuenta en sesión, expedir las comunicaciones y hacer las anotaciones correspondientes, etc.; formalidades estas que son del exclusivo resorte de la Secretaría, como es elemental.

Ahora, concretándome á los casos observados sobre licencias acordadas por la presidencia, debo manifestar lo siguiente:

Expediente N.º 6.724/911.—Licencia de la Señora Leonor Cueto de Gandulfo.

Llamo especialmente la atención del H. Consejo sobre este caso y los siguientes porque ellos encierran la demostración más patente de los procederes de la presidencia y de la veracidad de lo que he expuesto anteriormente. Por este motivo los trataré con alguna detención. La licencia de la maestra de la escuela N.º 4 del Consejo Escolar 10º. Señora Leonor Cueto de Gandulfo, desde el 6 de Marzo al 11 de Junio de 1911, pero solo treinta días con goce de sueldo, no fué concedida por el H. Consejo en Junio 17 del mismo año, como se dice en el informe de los Señores Contadores Fiscales. Dicha licencia por tratarse de una maestra parturienta, cuyo parto, según comprobó el suscrito, en su carácter de médico, la había reducido á un estado de salud deplorable, fué concedida por decreto de la presidencia de fecha 29 de Mayo del citado año, acordándole el mes de sueldo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 9 de Junio de 1908, según consta en el expediente N.º 6.724—10º.—En sesión de 17 de Junio se dió cuenta de esa resolución al H. Consejo, el que aprobó la medida tomada. Con fecha 21 de Junio de 1911, la presidencia, previo informe confidencial de la Inspección Médica Escolar y teniendo en cuenta la última parte de la resolución de Septiembre 23 de 1908, sobre incidentes patológicos del embarazo, resolvió prorrogar hasta el 15 de Septiembre, con goce de sueldo, la citada licencia. Por expediente N.º 6.724—10º., resolución de Octubre 16 de 1911, la presidencia, de acuerdo con el reglamento, prorrogó sin goce de

sueldo, hasta el 30 Noviembre la licencia concedida á esta maestra, pero posteriormente, en Noviembre 23 del mismo año, ante la comprobación del mal estado de salud de la recurrente y teniendo en cuenta su antigüedad que databa del 15 de Julio de 1899, y sus buenos servicios, y considerando inhumano, por otra parte, privarla en tales circunstancias de su sueldo que era su único medio de subsistencia, resolvió, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, que la prórroga se acordara con goce de sueldo.

Expediente N.º 5.788—7.º.—Este asunto se refiere á la licencia de la maestra de la escuela N.º 6 del Consejo Escolar 7.º, Señorita Manuela Cisneros. Tampoco fué resuelto por el H. Consejo como se indica en el informe de los Señores Contadores Fiscales. En efecto, como consta en el expediente citado, con fecha 19 de Mayo de 1911, la presidencia de acuerdo con los artículos 73 y 77 del Reglamento General de Escuelas y por tratarse de un caso de enfermedad debidamente comprobado por certificado de la Inspección Médica Escolar, resolvió conceder licencia desde el 1.º del mismo mes de Mayo hasta el 30 de Septiembre siguiente, de cuyo tiempo solo nueve días se le acordó con goce de sueldo, á la maestra de la escuela N.º 6 del Consejo Escolar 7.º, Señorita Manuela Cisneros. En sesión de 6 de Junio se dió cuenta al H. Consejo y éste aprobó en la misma fecha la resolución adoptada por la presidencia. Posteriormente, con fecha 4 de Octubre de 1911 se resolvió, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, que la licencia fuera con goce de sueldo,—todo lo cual obra en el expediente citado.

Expediente N.º 5.968—7.º/911.—Este asunto está en iguales condiciones que los anteriores. En efecto, con fecha Mayo 16 de 1911, la presidencia, en el expediente citado, resolvió conceder licencia desde el 1.º del mismo mes hasta el 30 de Junio siguiente, sin goce de sueldo y con arreglo á lo dispuesto por los Artículos 73 y 77 del Reglamento General de Escuelas, á la maestra de la escuela N.º 10 del Consejo Escolar 7.º, Señorita Zoraida Pindat, por razones de enfermedad según lo acredita el certificado de la Inspección Médica Escolar que corre agregado al expediente. En sesión 8 de Junio de 1911, el H. Consejo resolvió aprobar dicha resolución. Con fecha 28 de Agosto de 1911, el suscrito, teniendo en cuenta un informe de la Inspección Médica Escolar que dice textualmente: «La Señorita Zoraida Pindat que en la fecha se encuentra en Asunción (Paraguay) ha tenido una fiebre tifoidea que la ha dejado en condiciones de suma postración siéndole necesario unos dos meses de absoluto descanso, para atenderse debidamente. Esta maestra deberá presentarse en esta Oficina para ser nuevamente examinada antes de hacerse cargo de su puesto. C. Sisto.» (fojas 5, expediente N.º 8.930. 7.º); teniendo en cuenta este informe, repito, y que la maestra pedía licencia por orden de la Inspección Médica Escolar y su carencia de recursos, se resolvió, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, que la licencia debía computarse con goce de sueldo.

Expediente 6.883—9.º.—Corresponde á la licencia concedida al maestro de la escuela N.º 3 del Consejo Escolar—9.º Señor Eusebio A. Santoré.

El asunto es como sigue: El 27 de Mayo de 1911, la presidencia concedió licencia desde el 19 del mismo hasta el 19 de Agosto siguiente, de acuerdo con los artículos 73 y 77 del Reglamento General de Escuelas, al maestro de la Escuela N.º 3 del Consejo Escolar 9.º Señor Eusebio A. Santoré, por enfermedad debidamente comprobada por la Inspección Médica Escolar, en cuyo certificado que corre agregado al expediente, se precisaba que dicho maestro padecía de «una enfermedad que le inhabilitaba para ejercer el magisterio *sobre todo en los meses de invierno*». De esta resolución se dió cuenta en sesión del 8 de Junio del mismo año al H. Consejo. En Agosto 10 de 1911—fojas 5 del expediente 3.º 6883—9.º—se resolvió con cargo de dar cuenta al H. Consejo, que la licencia debía considerarse con goce de sueldo.

Expedientes 6961.—P—y 16.400.—V (1910).—Estos expedientes se refieren á las licencias concedidas al subpreceptor de la escuela primaria anexa al Regimiento 1.º de Caballería de Línea, Señor Alfredo Van Gelderen.

Las licencias de referencia fueron concedidas por el suscrito con cargo de dar cuenta al H. Consejo, por haber comprobado en su carácter de médico que se trataba de un caso de enfermedad grave que requería para su curación el tiempo de licencia solicitado. El pago que se menciona es consecuencia de la expresada resolución.

Expediente N.º 5799—4.º—(1911).—Licencia de la maestra de la Escuela N.º 19 del Consejo Escolar 4.º Doña Eloísa R. de Gómez del Junco. De los antecedentes que obran en el citado expedien-

te resulta: Con fecha Junio 27 de 1911 la presidencia resolvió conceder licencia desde el 1.º de Mayo hasta el 31 de Julio siguiente, solamente cuatro días con goce de sueldo, conforme á lo establecido en los Artículos 73 y 77 del Reglamento General de Escuelas, á la maestra de tercera categoría de la Escuela N.º 19 del Consejo Escolar 4.º Señora Eloísa R. de Gómez del Junco, por enfermedad comprobada por certificado oficial. En sesión del 1.º de Julio de 1911 se dió cuenta al H. Consejo. Con fecha 25 de Agosto del mismo año, la presidencia, en virtud de subsistir la enfermedad y de acuerdo con lo establecido por los citados artículos del Reglamento, resolvió, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, prorrogar hasta el 1.º de Noviembre la licencia concedida á que se ha hecho referencia. En Noviembre 14 de 1911, teniendo en consideración que se trataba de una maestra que había adquirido su enfermedad en las tareas escolares, que tenía 23 años de servicios y que contaba con su sueldo como único recurso para su subsistencia, el suscrito resolvió, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, que la licencia concedida fuera con goce de sueldo.

El pago á que se hace referencia en el informe de los Señores Contadores Fiscales y que corresponde á los sueldos de la maestra por el tiempo expresado, fué ordenado, como consecuencia de esta resolución.

Expediente N.º 5.765—13.º—Licencia de la maestra de la Escuela N.º 6 del Consejo Escolar 13.º—Señorita Dominga Olivera. En Mayo 16 de 1911, la Presidencia de acuerdo con lo manifes-

tado por el certificado médico oficial y lo establecido por las disposiciones reglamentarias en vigencia, resolvió conceder licencia á la maestra de la Escuela número 6 del Consejo Escolar 13.º— Señorita Dominga Olivera.— En sesión de 8 de Junio del mismo año se dió cuenta al H. Consejo de la medida adoptada. Más tarde por resolución de 13 de Junio de 1911, el suscrito resolvió, con cargo de dar cuenta al H. Consejo, que la licencia fuera con goce de sueldo.

Para terminar, y volviendo al caso citado por vía de ejemplo al principio de éste capítulo—del expediente N.º 498.—L.—en el que se ha rectificado por el suscrito una resolución anterior del H. Consejo, no obstante lo cual la expresada resolución, sin embargo, aparece inserta en el acta de la sesión N.º 6 de 16 de Febrero de 1911 y por consiguiente, aprobada por el H. Consejo, debo agregar que lo ocurrido en este caso—del Expediente 498.—L.—explica acabadamente, lo que he afirmado ya, ó sea que solo por una omisión de Secretaría, es que el suscrito aparece en los casos observados por los Señores Contadores Fiscales y de que me ocupo, rectificando resoluciones anteriores del H. Consejo.

En efecto, si se considera que con arreglo á lo dispuesto por la Ley 1420 en el Artículo 65—Inciso 4.º, «todas las comunicaciones y órdenes del suscrito», de cualquier género que sean, «deberán ser autorizadas por el Secretario del Consejo» á quien además el reglamento interno del Consejo le prescribe en su Artículo 2.º— Inciso 3.º el «autorizar con su firma todos los actos del Consejo» y si se tiene presente además que por el

mismo Artículo Inciso 1.º el Secretario debe «dar cuenta de los asuntos entrados»; fácilmente se comprenderá que si el Secretario anterior hubiera observado—como lo observó en el caso del expediente 498—L.— estas terminantes prescripciones, en todos los casos observados por los Señores Contadores Fiscales, como correspondía, el H. Consejo habría tomado en su debida oportunidad la intervención de ley en aquellos, desde luego que se trataba en todos esos casos de simples proyectos de resolución suscritos por el Presidente, que éste los pasaba á la Secretaría á efecto de que ésta á su vez llevara todos los requisitos antes expresados.

Por lo demás cabe agregar que todas las medidas de referencia están justificadas por la justicia y equidad de las causas que las inspiraron.

IX

Resoluciones adoptadas por la Presidencia con cargo de dar cuenta al H. Consejo. Explicaciones que justifican la omisión de esta formalidad legal en todos los casos ocurridos y que se mencionan en el presente informe.

He hecho referencia en el transcurso de esta exposición á diversas resoluciones adoptadas por la presidencia, que los Señores Contadores Fiscales observan en su informe y créome en el deber de explicarlas detenidamente porque de la simple exposición del procedimiento que se seguía al respecto surgirá la razón que motivó tales omisiones, que por otra parte nunca estuvo en el áni-

mo del suscrito cometerlas ni mucho menos tolerarlas.

En el gran movimiento diario de esta vasta Repartición no es posible, en algunos casos, exigir que ciertos asuntos sigan el trámite ordinario debido á su naturaleza especial que impone á veces una resolución inmediata y que se traduce en una orden verbal con cargo de ratificarla por escrito por Secretaría, á la mayor brevedad posible, ó en una orden escrita, pero directa, en cuyo caso queda igualmente la secretaría encargada de su regularización más oportuna. Son de esta naturaleza, por ejemplo, algunos casos observados por los Señores Contadores Fiscales de maestros enfermos á quienes se les había negado sueldo y que por esta causa se encontraban en la situación extrema de ser desalojados de sus casas por la justicia, debido á la falta de pago de alquileres, etc., y otros como el entierro de una directora de escuela con más de veinte años de servicios y en que el secretario del Consejo Escolar 2.º, vino á manifestar al suscrito que el cadáver de aquella estaba sobre unas sillas por no tener la familia con qué comprarle el féretro y mucho menos por consiguiente para costearle el entierro.

En tales casos el procedimiento era ordenar se tomara inmediatamente la resolución que subsanara el inconveniente manifestado por el funcionario informante ó adoptar las medidas que salvaran al maestro de una triste situación, entendiendo siempre el suscrito que la Secretaría de aquella época en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que más adelante trans-

cribo llevaría el asunto en su oportunidad para dar cuenta en sesión.

Otras de las resoluciones observadas obedecen á la acción directa que tiene la Presidencia en lo que se refiere al progreso de la cultura pública y de la enseñanza primaria en las distintas manifestaciones y esto explica las adquisiciones de obras de autores argentinos, cuyo fin era fomentar este exponente de nuestra intelectualidad; las comisiones dadas á algunos hombres de preparación reconocida para estudiar en el extranjero los sistemas de enseñanza ó hacer conocer allá los progresos de la escuela argentina—y finalmente para no detenerme en cada caso puedo declarar sin esfuerzo que todas las medidas observadas respondieron siempre á la satisfacción de una urgente necesidad administrativa, á propósitos de mejoramiento de la enseñanza ó á realizar actos de humanidad y de justicia que era imposible desconocer.

Como he dicho anteriormente el procedimiento usado en tales casos es el siguiente: la presidencia en posesión de los datos ó en conocimiento de las razones pertinentes, suscribe la resolución correspondiente, la que se pasa á la secretaría á los efectos de que sea regularizada con arreglo á lo dispuesto en el Artículo 65, Inciso 4.º, de la Ley N.º 1420, que dice: «Art. 65. El Presidente » del Consejo Nacional de Educación tiene además las siguientes atribuciones y deberes especiales»:

«Inciso 4.º: Suscribir todas las comunicaciones y órdenes, de cualquier género que sean, con » la autorización del Secretario del Consejo»—y

» á efecto también de que sean llenados todos los
 » demás requisitos que establecen terminantemente
 » el reglamento interno del Consejo Nacional de
 » Educación, cuyo Artículo 2.º, Incisos 2.º y 3.º, se
 » transcribe: «Art. 2.º: Son deberes y atribuciones
 » del secretario:—1.º Asistir á las sesiones del
 » Consejo, levantar las actas respectivas, y dar
 » cuenta de los asuntos entrados».

«3.º—Autorizar con su firma todos los actos
 » del Consejo y dictar por sí las providencias de
 » simple trámite hasta poner los asuntos en es-
 » tado de resolución».

Es lógico suponer, en toda administración, que cada funcionario ó empleado debe cumplir con su deber y es en esta confianza imprescindible en que ha descansado el suscrito cuando al firmar una resolución ha supuesto que los encargados de hacerla cumplir velarían por llenar todos los trámites del caso.

Estos hechos no se han repetido desde hace largo tiempo porque apercibida la Presidencia de las omisiones que han motivado los cargos aludidos, ha adoptado al respecto las medidas convenientes.

Casos hay también en el informe de los Señores Contadores Fiscales en que una resolución adoptada por el Consejo de acuerdo con el dictamen de la Comisión respectiva, no ha sido incluida en acta (expediente 10.695—E/910).—Lo cual viene á poner mejor de manifiesto la exactitud de las razones expuestas.

Por lo demás debo manifestar que es la Secretaría, en virtud de disposiciones reglamentarias en vigencia, la que envía los asuntos á las

comisiones de Hacienda y Didáctica, de manera que esto viene á explicar también por que algunas órdenes de pago le han sido remitidas con resolución al suscrito cuando en realidad debieron ir previamente á la Comisión de Hacienda y al Consejo, explicándose por esto su omisión en acta.

Lo anteriormente expuesto explica asimismo la resolución á que hacen referencia los Señores Contadores Fiscales, suscrita solo por el Secretario en el expediente N.º 2.494/911, que dice: «Vuelva á la Contaduría, con la manifestación de que los artículos mandados proveer en este expediente, deberán ser adquiridos de la casa Jacobo Peuser».—Firmado: *A. J. Martínez*.

Se encuentran igualmente comprendidas en los casos explicados anteriormente, las siguientes observaciones de los Señores Contadores Fiscales, que figuran en este informe bajo los números: 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 21, 23, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81 (bis), 82, 82 (bis), y 95.

X

Antecedentes justificativos de la legalidad de todos y cada uno de los actos de esta Presidencia—observados por los Contadores Fiscales—en razón del grupo en que figuran ubicados:

GRUPO I

a) Las resoluciones de esta Presidencia designadas en este grupo bajo los números 2—45—46—65—67 y 89 emanan de

la ejecución, con sujeción estricta al Art. 15 del Decreto Reglamentario de 15 de Marzo de 1902, de la resolución del H. Consejo que obra en el acta de las sesiones celebradas los días 10 y 16 de Agosto de 1910 y cuyo tenor es el siguiente:

«Encargar al Señor Presidente del H. Consejo para que designe la persona que ha de escribir la vida de Sarmiento dentro del criterio literario que él encuentre conveniente, y, al mismo tiempo para que seleccione las obras destinadas para la publicación, de acuerdo con lo resuelto en la misma fecha por el H. Consejo» (Acta de la sesión celebrada el 10 de Agosto de 1910—Página 87 del tomo XI, año III de las Actas de las Sesiones del Consejo Nacional de Educación, correspondientes á los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 1910).

«Expediente N.º 9.558—C—Tomando en consideración el proyecto presentado por el Vocal Dr. Zubiaur, para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Don Domingo Faustino Sarmiento, el Consejo Nacional de Educación, después de un cambio de ideas, dictó la siguiente resolución:

«Art. 1.º—Destinar en el Museo Escolar que lleva el nombre de Sarmiento el local necesario para contener sus muebles, libros, manuscritos, cuadros, etc.

«Art. 2.º—Designar una comisión nacional que, coadyuvando á la acción del Consejo, promueva un movimiento popular en el país á fin de que en todo sus pueblos, se conmemore dignamen-

» te el primer centenario del natalicio de Sarmiento.

«Art. 3.º—Respetando la última voluntad de Sarmiento, el Consejo Nacional mandará colocar un bloque de granito de Los Andes en el terreno destinado para su mausoleo en el terreno de «La Recoleta».

«Art. 4.º—Disponer que un día del mes de Marzo de 1911 en todas las escuelas públicas dependientes del Consejo Nacional se dé por su director ó uno de sus maestros una conferencia sobre la vida y obra del gran educacionista.

«Art. 5.º—Autorizar al Señor Presidente del H. Consejo para elegir entre las obras completas de Sarmiento, aquella que por sintetizar su labor literaria y educacional, convenga proveer á las bibliotecas de las principales escuelas públicas de la Capital, Provincias y Territorios, haciéndose también una edición popular, que será distribuída entre los maestros y alumnos de cuarto grado en adelante.

«Art. 6.º—Construir un edificio de seis aulas con destino á una escuela primaria elemental, en Villa San Francisco, de San Luis, donde enseñó Sarmiento á los 16 años de edad; previa donación por parte de la Municipalidad ó del vecindario de dicha localidad, de cuatro manzanas de terreno, en cuyo centro se elevará el edificio escolar.

«Art. 7.º—Autorizar al Señor Presidente del H. Consejo para designar las personas que deban componer la Comisión á que se hizo referencia así como la que tendrá á su cargo la tarea de escribir la Vida de Sarmiento.

«Art. 8.º—Los gastos que origine el cumplimiento de esta resolución, se imputarán á «Recursos del Consejo».

b) Las resoluciones de esta Presidencia que figuran en este grupo bajo los números 3 y 4, emanan, en igual forma que las antes citadas, de la ejecución de la resolución del H. Consejo, fecha 12 de Enero de 1911, por la cual se designa á Don Leopoldo Lugones, para que lo represente en congresos, conferencias y demás actos públicos que se celebren en Europa y se le nombraba al mismo tiempo corresponsal de «El Monitor»; y cuyo antecedente y parte dispositiva se transcriben íntegros á continuación, para la mejor justificación del suscrito:

«SESION 2.ª

«*Día 12 de Enero de 1911*

«.....

«Expediente 425—P— El Señor Presidente eleva el siguiente mensaje:

«Honorable Consejo:—El alto grado de desarrollo progresivo á que hemos alcanzado en materia de enseñanza nos da derecho á ocupar en el concierto de las naciones más adelantadas el lugar prominente que legítimamente hemos conquistado por nuestro propio y exclusivo esfuerzo, imponiéndonos correlativamente el deber de mantener incólume ese puesto de honor.

«Necesitamos, pues, participar lo más intensa-

» mente posible del movimiento intelectual contemporáneo, y al mismo tiempo hacer conocer » nuestra obra educacional de todo el mundo civilizado.

«La organización de un servicio especial de » corresponsales en el exterior, de «El Monitor», » órgano oficial del H. Consejo, presidido por » una persona competente y caracterizada que, » á la vez podría tener la representación de » Vuestra Honorabilidad en los congresos, conferencias y demás actos públicos en que se trate especialmente de la discusión de cuestiones » importantes para la enseñanza, sería á juicio » del suscrito la forma más indicada para resolver satisfactoriamente esta cuestión.

«El expresado servicio podría organizarse » más ó menos como sigue:

«Un corresponsal de «El Monitor de la Educación Común» y representante del Honorable Consejo, quien á la vez se encargaría de la formación de un cuerpo de corresponsales » extranjeros constituidos por las personalidades » más descolantes de las ciencias y letras, con el fin de que trataran en sus correspondencias » temas interesantes para nosotros, con arreglo á las instrucciones que les daría esta presidencia.

«Se asignaría al encargado de este servicio » como compensación, trescientos pesos oro mensuales y á más diez pesos oro mensuales para el » cargo de la correspondencia, y por cada correspondencia podría fijarse como precio máximo » el de cuatrocientos francos».

«Someto, pues, á la consideración de Vuestra

» honorabilidad el proyecto que dejo esbozado,
» abrigando la seguridad de que él ha de mere-
» cer vuestra aprobación dado los altos propósi-
» tos que lo informan y los grandes beneficios
» que reportaría su realización.

«Saludo á Vuestra Honorabilidad muy aten-
» tamente».

Firmado:—JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA.

Y el Honorable Consejo,

RESUELVE:

«1.º Comisionar á Don Leopoldo Lugones, para
» que lo represente en los congresos, conferen-
» cias y demás actos públicos que se celebren en
» las Naciones Europeas y en que se trate espe-
» cialmente de la discusión de cuestiones impor-
» tantes para la enseñanza; y nombrarle al mis-
» mo tiempo corresponsal de «El Monitor de la
» Educación Común», debiendo el expresado Se-
» ñor Lugones proceder en el desempeño de su
» cometido con arreglo á las instrucciones que
» recibirá del Señor Presidente del H. Consejo
» con cargo de enviar por lo menos una corres-
» pondencia mensual».

«2.º La expresada comisión durará dos años,
» que se prorrogará á voluntad del H. Consejo
» si fuese necesario, gozando el Señor Lugones,
» como única compensación de su trabajo y gas-
» tos que éste le demande, la asignación mensual
» de trescientos pesos oro (\$ oro 300), y debien-
» do presentar á su regreso al país un informe
» detallado del desempeño de su cometido».

«3.º Esta asignación empezará á correr des-
» de el día en que se ponga en viaje».

c) Las resoluciones del suscrito designadas en este grupo bajo el número 5 emanan de la resolución correspondiente tomada por el H. Consejo en sesión de 6 de Agosto de 1910, por la que se comisionó al Dr. Juan G. Beltrán, con motivo de su viaje á Europa para que dé en el extranjero una conferencia poniendo de relieve la instrucción primaria de la República Argentina; y si bien es cierto que el gasto autorizado para esta comisión ascendía solo á mil pesos (\$ 1.000) y que en cambio esta Presidencia ordenó, además, el pago de las otras sumas á que se refieren los Señores Contadores Fiscales, lo hizo con cargo de dar cuenta al H. Consejo, formalidad que en este caso como en muchos otros casos análogos y á que me refiero en el curso de esta exposición, no se cumplió exclusivamente por una omisión de la Secretaría anterior.

d) Los pagos ordenados por esta Presidencia y á que se refieren los Señores Contadores en este caso, que figuran bajo el número 6 de este grupo, los ha ordenado el suscrito en uso de sus propias atribuciones reglamentarias; como así igualmente los sueldos de vacaciones (caso N.º 83) concedidos al subpreceptor de escuelas militares Don José Flores Perramón, y á los que tenía derecho adquirido no obstante haber hecho renuncia de su puesto en 3 de Diciembre de 1910.

Análoga cosa ocurre con la observación

agrupada bajo el N.º 12, desde luego que el H. Consejo, efectivamente, resolvió en 3 de Septiembre de 1910, costear los servicios fúnebres de la extinta maestra de la escuela N.º 3 del Consejo Escolar 8.º D.ª María Velazco.

- e) Las observaciones número 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de este grupo carecen de fundamento, desde luego que todas las adquisiciones de la Historia Argentina para los niños, de los Dres. Imhoff y Levene y su distribución fueron oportunamente autorizadas por el H. Consejo, como se comprueba con las siguientes resoluciones que se transcriben á continuación, tomadas de las actas respectivas:

El Honorable Consejo, en sesión de 23 de Julio de 1910,

RESUELVE:

«Expediente N.º 8.813—L—1.º Comprar á los Señores J. Lajoane y Cía. la Historia Argentina en cuadros, edición del Centenario, por los Doctores C. Imhoff y R. Levene, en la cantidad necesaria para obsequiar con un ejemplar á cada uno de los alumnos de 5.º y 6.º grado de las escuelas, como un recuerdo de la fecha histórica de la Nación, así como para proveer á las necesidades de los niños pobres de las escuelas de las provincias, territorios y capital.

«2º. Autorizar al Señor Presidente para que gestione de los editores la rebaja posible sobre el precio pedido».

El Honorable Consejo, en sesión de 16 de Febrero de 1911,

RESUELVE:

«Expediente N.º 498—L—Rectificar la resolución de Enero 21 último, de fojas 3 de este expediente, en el sentido de que los 10.000 ejemplares del libro «La Historia Argentina» de los Niños (en cuadros) de los Dres. Carlos Imhoff y Ricardo Levene, serán distribuídos entre las escuelas nacionales de la Provincia de Entre Ríos, y no entre las particulares de la misma provincia, como por error se indica en la expresada resolución».

En el mismo caso se encuentra la observación que figura bajo el número 47, puesto que, efectivamente, el H. Consejo autorizó el gasto á que ella se refiere y sólo por otra nueva omisión de Secretaría la resolución respectiva del H. Consejo no figura en actas.

- f) Las adquisiciones de pianos y pago de su importe correspondiente que observan los Señores Contadores Fiscales y que figuran en este grupo bajo los números 69, 71, 72, 73, 74 y 75, han sido ordenados por esta Presidencia en uso de sus propias atribuciones legales reglamentarias, con cargo de dar cuenta al H. Consejo oportunamente.

XI

Otros antecedentes ilustrativos

No he de terminar esta larga y prolija exposición, sin antes dejar la debida constancia de algunas iniciativas del suscrito, que, como tantas

otras, y cábeme la satisfacción de declararlo una vez más, han merecido invariablemente el más decidido apoyo de mis honorables colegas, en el propósito común y constante que siempre nos ha inspirado, del mejoramiento de esta vasta administración escolar; iniciativas que considero muy del caso traer á colación, por cuanto ellas ponen de manifiesto en forma concluyente, á juicio del suscrito, que el H. Consejo se ha anticipado con mucho á los Señores Contadores Fiscales en cuanto la mayoría de las deficiencias de procedimientos y de administración han sido salvadas por disposiciones en vigencia y practicadas ya, ó por disposiciones oportunamente dictadas á raíz de sentida la deficiencia con el propósito de salvarla en lo sucesivo.

Y así, para referirme solo á las principales, podría citar la organización de la oficina de Control, gracias á la cual se comprueba acabadamente la existencia, estado de conservación, distribución, y consumo de todos los muebles, material de enseñanza, útiles, etc., de las escuelas y oficinas; y la creación de la Inspección General de Contabilidad, cuya función es controlar á la Contaduría y directamente al Control, á la Tesorería y la Oficina de Suministros.

Y, finalmente, concluiré refiriéndome á la resolución adoptada por esta Presidencia con fecha 30 de Diciembre de 1911, expediente N.º 17.435 letra P, que en copia legalizada acompaño, estableciendo el *«Procedimiento para formular el proyecto anual de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el sostenimiento de la instrucción primaria en la República»* á fin de mejor con-

sultar las necesidades de ésta; procedimiento que se ha puesto ya en práctica, sirviendo de base para la confección del Presupuesto proyectado y aprobado por V. H. para el año 1913.

Confiando que las explicaciones dadas por el suscrito satisfarán á V. H. y dejando así evacuada la vista que se sirviera conferirme por resolución de 29 de Octubre ppdo., me es grato saludar á V. H. muy atentamente.

J. M. RAMOS MEJÍA.

IV

Dictamen del Comisionado de Hacienda

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1912.

Honorable Consejo:

Cumpliendo con vuestra resolución el Comisionado de Hacienda ha estudiado con la detención debida el informe de los Contadores Fiscales Señores Augusto Castellanos y León R. Coussio, sobre la intervención que han practicado en esta repartición en lo referente á la recaudación é inversión de los fondos correspondientes al ejercicio de 1911.

Es satisfactorio consignar que verificado este trabajo, que ha demandado cuatro meses de labor constante, no obstante la consagración empeñosa que han empleado los Fiscales desde las primeras horas del día, en la revisión minuciosa practicada en los libros de la Contaduría del Consejo, según sus mismas expresiones, *no han encontrado ningún antecedente que autorice la presunción de haberse cometido algunos de los delitos á que se refiere la Ley N.º 49 del 14 de Septiembre de 1863* salvo el caso de un empleado que fué exonerado por el Consejo y mandado, al mismo tiempo instaurar el juicio criminal correspondiente.

Han encontrado, sí, deficiencias de procedimientos que han motivado el extenso informe, citando caso por caso en los que han encontrado á su entender observaciones que formular.

El estudio de los múltiples puntos administrativos que el informe precisa habríase reducido, por parte del que suscribe, á suministrar los antecedentes ilustrativos de cada observación para el completo conocimiento de todos los elementos indispensables para el juicio definitivo que la Contaduría General debe formar en el examen de los casos determinados en el referido informe, si este no se hubiera entregado á la publicidad.

En estas circunstancias aquel documento referente á actos administrativos, común á las intervenciones que se producen anualmente por mandato de la ley en todas las ramas de la administración nacional, tiene hoy, puede decirse, el carácter de cargos sometidos en primer término al juicio público, no siempre justiciero y con la preparación suficiente para apreciar debidamente los hechos, especialmente cuando las observaciones de esta índole no van acompañadas con los antecedentes legales en que se fundan las resoluciones de una repartición que tiene facultades propias para dirigir y administrar con autonomía los elevados intereses que la ley especial le ha confiado.

Así, pues se hace necesario definir esas facultades, no con el espíritu de sustraerse el Consejo Nacional de Educación al contralor administrativo de la Contaduría General, en cuanto se relaciona con la recaudación é inversión de los recursos que forman el tesoro común de las escuelas, por el contrario para ponderar la eficacia de esa acción cuando se ejercita dentro de las prescripciones legales por ser sin duda el fundamento de toda buena administración pública, quedando

desde ya bien establecido este concepto con los términos mismos del informe de los fiscales, cuando afirman categóricamente: «haber sido atendidos con marcada deferencia por el Presidente del Consejo ordenando que se les exhibiera toda documentación, libros y demás antecedentes que juzgaran conveniente examinar ó consultar, encontrando en el personal del Consejo la mejor disposición para poder llevar á término su cometido.»

También corresponde examinar el criterio que ha guiado á los Contadores Fiscales, para poder apreciar si su estudio se ha concretado estrictamente á los deberes que les prescribe la ley de la materia ó se han extralimitado en sus funciones al abundar en observaciones que no encuadran dentro de los preceptos del Art. 62 de la ley de contabilidad, sugiriendo dudas y abriendo juicios, sobre resoluciones facultativas del H. Consejo, relacionadas á sus funciones técnicas sobre direcciones educacionales ó sobre hechos que la ley especial de Educación Común somete exclusivamente al criterio del Consejo, con las responsabilidades inherentes á cada uno de sus miembros, dentro de las facultades propias de la autonomía que le asigna su ley orgánica.

La Dirección y administración de la instrucción primaria se rige por esa ley especial, por la cual el Gobierno General ha delegado en el Consejo Nacional de Educación una gran parte de sus atribuciones, lo que hace que sean legítimos sus acuerdos relacionados con los asuntos de su verdadera y exclusiva competencia dentro de sus funciones autónomas.

La mayor parte de las cuestiones administrativas son complejas, y lo son más aun todas las que se refieren al gobierno y dirección de la Educación Común, porque en este caso la autoridad procede por vía de reglamentos dictados por la misma tan variables como las necesidades que los provocan, según sean las exigencias de la época y las circunstancias que median: de donde resulta que en muchos casos la inflexibilidad de los principios generales de administración cede tal vez, ante el tacto, la prudencia ó el criterio de equidad de los que administran, en cuya difícil combinación estriba el don del acierto en las resoluciones sobre hechos ó derechos controvertibles de aplicación dudosa.

El gobierno escolar y la tutela administrativa de sus intereses carecen de límites ciertos y fijos, por la autonomía que confiere al Consejo Nacional de Educación su ley orgánica, en lo que se refiere á la dirección de las escuelas, á la provisión de todas las necesidades de las mismas, al nombramiento, remoción y cesantía del personal docente y administrativo; crea escuelas con la misma facultad que las clausura; atiende y resuelve, según sean los fundamentos, las solicitudes de licencias temporarias por enfermedad, accidentes ó inutilización del personal docente y en general, dentro de una administración tan compleja, resuelve deliberadamente sobre todos los actos que la ley no prohíbe, entre los que pueden comprenderse el acuerdo de viáticos y remuneraciones extraordinarias por trabajos extraordinarios.

También está comprendida en las atribuciones y deberes del Consejo, promover y auxiliar la

formación de asociaciones cooperativas de la educación y de allí surgen los subsidios acordados á instituciones particulares que ejercitan una acción educadora en el pueblo; la elección de textos y libros útiles, que por tales no solo deben comprenderse los destinados á los alumnos sino también los que ofrecen material suficiente para la instrucción y orientación moral é intelectual de los Directores y maestros que trasmiten á los niños los conocimientos adquiridos en la modesta biblioteca de la escuela.

Todos estos actos que están amparados de un modo terminante por las prescripciones de la ley orgánica del Consejo Nacional, les han inspirado dudas muy bien fundadas á los interventores sobre si debían ajustar sus apreciaciones á esa ley, así lo manifiestan con franqueza, no obstante, se deciden en su informe y observaciones á apreciar los actos que han examinado con el criterio que inspiran á seguir las facultades que confieren las leyes de orden general, cuyo espíritu difiere en mucho del que inspira y rige para las leyes especiales.

Menor duda debieron concebir á tener presente que aun la ley de Presupuesto confirma la autonomía administrativa del Consejo, dada la naturaleza de su cometido, cuando en el inciso correspondiente, dice: *Instrucción primaria*: «Cuyos gastos costeados con los recursos asignados por la Ley N.º 1420 de 8 de Julio de 1884, que serán entregados por los recaudadores bajo su responsabilidad, en los términos de la expresada ley, figuran en el presupuesto al solo objeto de fijar el sueldo de sus empleados y los gastos de su mantenimiento.»

No se determina el número de escuelas, por consiguiente no precisa cuántos directores y maestros deben mantenerse, pues todos estos gastos son facultativos, según las necesidades educacionales dependiendo particularmente de los fondos con que cuente el tesoro común de las escuelas que si bien se calculan prudencialmente los recursos, no siempre, por causas de pública notoriedad, ingresan en la proporción y con la regularidad que establece la Ley N.º 1.420, pues no hay sanción alguna para hacer efectiva la responsabilidad que prescriben los preceptos legales á los recaudadores que faltan á sus deberes.

Esa misma facultad amplia está bien expresada en el Item correspondiente del Presupuesto para la Instrucción Primaria, en el cual se preceptúa que: Item 25—1. «La adquisición de terrenos, » construcción de edificios escolares y obras de » salubridad, reparaciones, ampliaciones y alquileres de edificios, provisión de muebles y útiles » escolares, libros para niños pobres, gastos judiciales, alumbrado, aguas corrientes, servicio de » cloacas, viático á inspectores y médicos, suplencias y demás gastos que exijan las necesidades » de la enseñanza, se harán por el Consejo con » los recursos que arbitre la ley. . . »

Como se vé no se determina suma para cada uno de esos gastos, queda al criterio deliberativo del Consejo determinarlos cuándo y en la cantidad que juzgue conveniente, dentro de los límites discrecionales para satisfacer con la mayor amplitud las necesidades morales y materiales de las escuelas, antecedentes que han debido tenerse en cuenta en el informe, del mismo modo que la

imposición que le hace la Ley (Art. 27, Inciso 6.º) de ejecutar puntualmente las leyes que respecto de la educación sancionare el Congreso.

En el cumplimiento de este deber están comprendidas todas las resoluciones del Consejo que se relacionan á las escuelas nacionales en las Provincias y Territorios, pues la ley de Presupuesto solo expresa en el Item correspondiente: «*Para el cumplimiento de la Ley 4.874, sueldos y viáticos del personal*» tantos pesos;—del mismo modo asigna partidas en globo para los gastos que demandan las escuelas en los Territorios y Colonias Nacionales.

Es indudable que para hacer efectivas estas disposiciones, el Consejo está facultado para resolver sobre los demás gastos inherentes á la instalación y funcionamiento de las escuelas aunque no sean sueldos y viáticos del personal, pensar de otro modo, ajustándose á los términos escritos, no funcionarían las escuelas, por no haber partida especial para alquiler de casa, compra de libros, etc.

Los Contadores Fiscales desconocen, al parecer, por los términos del informe producido, que la ciencia administrativa enseña pocos preceptos fijos y verdades absolutas para dirigir y orientar según ellas la acción de gobierno que vela por la difusión de la educación común, atendiendo á múltiples géneros de necesidades todas distintas, que surgen casi de improviso dada la movilidad constante de los elementos sociales que forman nuestro pueblo, lo que hace que hoy no se administre con el mismo criterio que ayer, puesto que en esta acción de bien público debe exigirse la

aplicación de la verdad relativa de conveniencia general y no la verdad científica que inquiere el filósofo.

Dentro de estos principios fundamentales y de los preceptos legales que rigen las funciones del Consejo están comprendidas las facultades con que delibera á fin de llenar su cometido realizando la obra nacional que anhelan los poderes públicos.

Pasemos á analizar la actuación de los Contadores Fiscales en el cumplimiento de su cometido. La intervención de la Contaduría, ajustada en todo á los preceptos legales, fué decretada precisamente en circunstancias de haberse producido un debate, originado por apasionamientos personales, que se hizo público por la prensa diaria, y por esa oportunidad, según lo afirman los Contadores Fiscales, «existía la creencia generalizada de que la intervención á practicar era á consecuencia de ese debate», y si bien no es dado dudar que los propósitos de los Contadores fueran desempeñar su cometido con la más completa imparcialidad, el informe revela en varios puntos, que oportunamente estudiaremos, si no parcialidad, una tendencia á presentar observaciones un tanto sugestivas correlacionadas con la creencia generalizada á que aluden, tanto más reveladoras de ese espíritu cuanto que aquellas no encuadran dentro de los límites bien expresos de las funciones que la ley de Contabilidad asigna á los Contadores Fiscales, en el Art. 62. y con los términos de la resolución del Presidente de la Contaduría de Abril 23,—por la cual les confiaba la intervención.

De la sugestión, fenómeno psicológico común no se sustraen los más correctos empleados y funcionarios encargados de la investigación de hechos determinados que preocupan la atención pública, como fué el que se debatía con apasionamiento en circunstancia que la Contaduría General resolvió intervenir la Contaduría del Consejo.

Esta coincidencia misma debió generalizar el prejuicio de que en esta repartición se habían cometido delitos graves previstos y penados por las disposiciones de la Ley N.º 49 de 1863, y la influencia de ese medio ambiente tenía que hacerse sentir en el espíritu de los Señores Contadores Fiscales, que al fin son hombres y como todos impresionables á las condiciones de la atmósfera en que se vive. Se les confiaba un cometido que por su naturaleza debieron sin duda considerarlo muy delicado por las circunstancias excepcionales ya mencionadas, y los espíritus más rectos en casos semejantes no dejan de creer naturalmente en la existencia de culpables, particularmente cuando por una idiosincracia conocida los funcionarios públicos no están amparados por el respeto y consideraciones que merecen por las grandes responsabilidades inherentes á las delicadas funciones de gobierno que ejercitan.

Como un fundamento más para considerar á los Contadores Fiscales sugestionados por hechos y apreciaciones extrañas á sus determinadas funciones legales, debemos citar lo que afirman al referirse al préstamo que el Consejo hizo á la «Asociación Pro Maestros de Escuela», institución formada por maestros y empleados dependientes

del Consejo, con su beneplácito, con el fin más honesto y elevado de sustraerse aquéllos de las terribles consecuencias de la usura, con los recursos de la ayuda mutua, ese acto lo aprecian así:

«No sabemos hasta qué punto puede ser prudente el préstamo hecho, dada la situación difícil por la que pasa—desde hace tiempo— el Consejo Nacional por carencia de los recursos suficientes para atender «con toda puntualidad el pago de los sueldos de los maestros».

La afirmación que «desde hace tiempo» no se abonan puntualmente los haberes de los maestros es el reflejo de una sugestión producida por un hecho pasajero que ha tenido lugar en el mes de Julio del corriente año en el que por primera vez se ha retardado en 12 días el pago;—no obstante la observación hecha en forma reflexiva da á comprender como un hecho cierto que este retardo se ha producido en muchos meses, pudiéndose entender que dura desde 1911 ya que es al estudio de las cuentas de ese año que debía concretarse el informe, con los antecedentes que las justifican.

De la revisión minuciosa de los libros, cuentas, documentos y actas correspondientes al año 1911, para todo lo que el Consejo ha cooperado con las facilidades amplias ofrecidas por sus empleados, los Contadores no han encontrado *ningún antecedente que autorice la presunción de haberse cometido actos delictuosos*. Han encontrado, sí, lo que ponen de manifiesto en el informe, según sus apreciaciones, deficiencias, acaso algunas irregularidades, pudiendo comprenderse todas las observaciones en los siguientes puntos,

sobre los que se darán por su orden las explicaciones y los antecedentes pedidos:

1.^a En parte ha sido modificado el sistema de contabilidad implantado por el Consejo, así como las denominaciones de algunas cuentas han sufrido alteraciones.

2.^a Deficiencias en la forma de abrir y llevar ciertas cuentas.

3.^a Deficiencias de procedimiento en el trámite de los asuntos.

4.^a Resoluciones sobre licencias que revelan haber sido inspiradas más por bondad que por la justicia y la legalidad.

5.^a Gastos quizás excesivos en la publicación de avisos, asignaciones de viáticos y sobresueldos, acordados en muchos casos sin razones que los justifiquen.

6.^a Gastos que conceptúan innecesarios y retribuciones excesivas.

7.^a Adquisiciones de artículos sin sujetarse á las prescripciones de la Ley.

8.^a Falta de previsión y estudio de parte de la oficina técnica sobre planos y presupuestos relativos á la construcción de los edificios escolares.

9.^a Resoluciones emanadas directamente de la Presidencia.

Para poder apreciar debidamente todas las observaciones á que se refiere el informe, comprendidas entre los ocho primeros rubros que dejamos anotados, relacionados con las resoluciones adoptadas por el Consejo, es indispensable transcribir las disposiciones del Art. 62 de la Ley de Contabilidad, pues ella marca de un modo preciso, que los Contadores Fiscales examinarán todas

las partidas de las cuentas y las comprobarán con los documentos que las justifiquen, presentando á la Contaduría el resultado de su examen el cual recaerá sobre los puntos siguientes:

1.º Si la cuenta está conforme con los modelos é instrucciones del ramo á que pertenecen.

2.º Si los documentos que justifican las partidas de la cuenta son auténticos, legítimos y suficientes y con sujeción á las leyes, decretos y reglamentos de la materia.

3.º Si contiene la cuenta alguna omisión en la partida de cargo, y si ha cobrado ó recibido todo lo debido cobrar ó recibir.

4.º Si las partidas de data están conformes con los respectivos libramientos ú órdenes de pago, cuando se trata de caudales extraídos del Tesoro Público, ó con los documentos debidos, cuando la cuenta es de comisión.

5.º Si las liquidaciones y demás operaciones aritméticas de la cuenta están hechas con exactitud.

Con excepción de algunas observaciones ajustadas á los términos del inciso 2.º no hay ninguna que se refiera á los mandatos de los otros cuatro.

Los Contadores Fiscales han debido cumplir su misión ajustándose á esas prescripciones y á las instrucciones que contiene la resolución del Presidente de la Contaduría, que les ordena: «Verificar con qué recursos ha contado el Consejo durante el año 1911, modo y condiciones en que por resolución de aquel debieron aplicarse, como el resultado definitivo al tenor de las constancias que arrojen los respectivos libros, debiendo

al mismo tiempo tener muy en cuenta lo que al respecto establece la ley de Educación Común.

No se necesita un estudio detenido para comprender que las observaciones que se refieren á los puntos 1.º, 2.º y 3.º, son de una escrupulosidad nimia, por cuanto si el Consejo ha implantado un sistema de Contabilidad y una forma de abrir y cerrar las cuentas, con la misma facultad puede modificarla, no alterando los principios legales, tanto más cuando no existe un sistema oficial de Contabilidad y los diferentes Contadores encargados de revisar los libros y cuentas en épocas distintas, en cuanto á facilitarse la tarea, no siempre tienen el mismo criterio, siendo en muchos casos cómodo para unos lo que es engorroso para otros.

La contaduría del Consejo ha atendido en todo momento cualesquiera sean las indicaciones de los fiscales en las diversas intervenciones en cuanto á llevar los libros y demás observaciones consiguientes, sin que el Consejo de Educación tome intervención en ello, pues todos esos antecedentes comprobatorios de sus actos entiende deben estar ajustados á los mandatos de la Contaduría General, con el fin de allanar toda dificultad en la revisión y rendición de las cuentas.

Tan se procede así que los mismos Contadores Fiscales, al referirse á estas observaciones dicen: «No obstante lo expuesto, hemos creído no deber extendernos sobre el particular, debido á que la mayor parte de las deficiencias que hemos notado en la Contabilidad han sido subsanadas en el corriente año, pues al practicarse el cierre de los libros de 1911, hemos observado que en

» el asiento respectivo se expone con todo detalle, las *razones fundadas* que han inducido á establecer dichas modificaciones.»

La consecuencia es lógica: las deficiencias anotadas y las modificaciones observadas en la Contabilidad del Consejo se habían realizado por razones que los fiscales encuentran fundadas.

También observan que en la apertura de los libros para 1912 no se ha procedido con arreglo al Art. 13 de las «Disposiciones Generales», que refiriéndose al inventario parcial, en cuanto á Propiedades; la Comisión, de la cual forma parte un Vocal del Consejo, no ha practicado el inventario.

Esta disposición está citada trunca; la disposición del Art. 13 del Reglamento, que preceptúa la obligación de inventariar á la Comisión enunciada, se hace extensiva también, según la parte no transcrita, «á las existencias en el Depósito y muebles y útiles de las Oficinas, á los muebles y útiles de las escuelas, Oficinas de Distritos, Biblioteca y Museo Escolar».

Se ve claramente que con la extensión que hoy tienen las escuelas en toda la República, en los Territorios y Capital Federal, el Vocal que concurra á practicar estos inventarios no tendría tiempo material para el desempeño de otras funciones inherentes á su cargo, de mayor importancia sin duda que la de inventariador.

El Consejo Nacional posteriormente, cuando las circunstancias y necesidades escolares fueron diferentes modificó esa reglamentación, como lo comprueban los siguientes antecedentes que, en este caso como en muchos otros análogos los Con-

tadores, por falta de tiempo quizás, no lo han consultado, de otro modo las apreciaciones que hacen sobre muchos acuerdos del Consejo serían diferentes ó no las habrían hecho.

«Resolución del H. Consejo, tomada en sesión de fecha 21 de Noviembre de 1907».

«1.ª Modificar en el sentido indicado el Art. 13º de la Resolución General sobre Contabilidad, de 2 de Marzo de 1901, quedando éste en la siguiente forma:

«Art. 13º. A efectos de levantar todos los años el *Inventario General valorizado de los bienes muebles é inmuebles de propiedad del Consejo Nacional de Educación en toda la república*», quedan encargados de formar los inventarios parciales y por consiguiente facultados para adoptar todas las disposiciones conducentes al mejor desempeño de su cometido, en cuanto á:

«*Propiedades*: la Inspección de Edificios, por sus propios empleados en la Capital Federal y por medio de los Inspectores Nacionales de Sección en las Provincias y Territorios y Colonias Nacionales á quienes deberá oportunamente dar las instrucciones necesarias por el órgano del Inspector General respectivo.

«*Muebles y útiles de las escuelas y oficinas*: el Depósito por medio del Contralor en la misma forma antes expresada.

«*Existencias del depósito*: por la Contaduría y el Depósito.

«*Los demás valores*: por la Contaduría y la Tesorería.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1912.

«Atento á la excepcional situación actual de
» la Dirección General de Arquitectura recargada
» como se encuentra con trabajos premiosos é
» impostergables, que no le permiten en absoluto
» ocuparse por el momento del levantamiento del
» inventario valorizado de los inmuebles propie-
» dad del H. Consejo,

SE RESUELVE:

«1.º Suspender la realización del expresado
» trabajo hasta tanto la Dirección General de
» Arquitectura se encuentre en condiciones de
» efectuarlo en debida forma.

«2.º Ordenar á la Dirección General de Ar-
» quitectura que á los efectos del mejor cumpli-
» miento de lo dispuesto en el artículo anterior,
» y á la mayor brevedad, proceda á abrir los li-
» bros de matrículas de los bienes inmuebles
» propiedad del H. Consejo en los que deberá
» consignar todos los datos necesarios á fin de
» disponer en cualquier momento de referencias
» exactas y precisas respecto de cualquier punto
» que se relacione con aquellos; de tal manera
» que la Inspección General de Contabilidad pue-
» da el 1.º de Enero de 1913 efectuar en forma
» los asientos en sus libros».

LICENCIAS, VIÁTICO Y SOBRESUELDOS

Las observaciones comprendidas en los N.ºs
4, 5 y 6 referentes á licencias que las juzgan
inspiradas por bondad, gastos sobre los que pien-
san ser quizás excesivos, viáticos y remuneracio-
nes extraordinarias, acordadas en muchos casos,

á juicio de los Contadores, sin razones justifica-
tivas, y gastos que conceptúan innecesarios, las
resoluciones del Consejo á que aquellas se refie-
ren, han sido dadas dentro de sus atribuciones
propias asesorado por funcionarios que han es-
tudiado las circunstancias y antecedentes que las
han determinado, antecedentes que los Contado-
res con solo la revisión de los libros y expe-
dientes no están habilitados para juzgarlos por
falta de todos los fundamentos expuestos en las
deliberaciones, pues en muchos casos las licen-
cias acordadas á los maestros y las resoluciones
sobre su disponibilidad temporaria se fundamen-
tan en conceptos privados de los que no deben
quedar constancia en los expedientes, por razo-
nes bien comprensibles de orden, de prestigio y
de moral educacional.

El criterio de bondad que atribuyen á la con-
cesión de algunas licencias, como el pensar que
hay gastos «quizás excesivos», y la opinión que
anticipan, que los viáticos y remuneraciones ex-
traordinarias, en muchos casos han sido acorda-
dos sin razones justificativas, como la existencia de
gastos que conceptúan innecesarios, sin conocer
los fundamentos de los gastos, ni el trabajo ex-
traordinario que se remunera ni las necesidades
que se tienen en cuenta, en una palabra sin es-
tudar los antecedentes complejos de toda una
administración que se vinculan y en conjunto de-
terminan las resoluciones del Consejo, es preju-
gar ligeramente con un criterio extraño las fun-
ciones que ejercita aquel en virtud de las atri-
buciones y deberes que le impone la Ley Orgá-
nica. Con ese mismo criterio observan que en los

casos que se concede licencia con goce de sueldo á miembros del magisterio, se les liquida íntegro aquel, así como también á los suplentes, «cuando» en ningún caso creemos, dicen los Contadores. » Fiscales, que debe abonarse en conjunto á ambos una cantidad mayor que la que tiene asignado el cargo».

No conocemos disposición alguna que concuerde con la creencia en que se funda esta observación, por el contrario la práctica administrativa y los antecedentes legales justifican que al maestro que se nombra como sustituto de un licenciado con sueldo, se le abone los haberes que corresponden por ley á sus funciones, y entre los gastos autorizados en la partida 1 del Item 25 del Presupuesto para la Instrucción Primaria, están incluidos los que demandan—*las suplencias*.

En cuanto á las licencias más ó menos prolongadas con goce de sueldo íntegro ó con parte de él, es sin duda una medida de amparo, equitativa y humana, que tiende á proteger al personal docente en el caso desgraciado é inevitable de enfermedad ó inutilidad para el ejercicio de la profesión antes del tiempo fijado para la jubilación extraordinaria.

Este tiempo, por la ley vigente es de 17 años y hay casos á diario de maestros enfermos que no tienen ese tiempo de servicios, á quienes los facultativos les imponen tres, seis ó más meses de reposo para continuar con sus tareas ó bien el abandono completo de ellas. Es doloroso que después de 5, 10 ó 15 años de servicios continuados un maestro se encuentre sin recursos de ningún género, pues

no hay disposición expresa alguna, á no ser el sentimiento de humanidad, que autorice acordarle el sueldo ó parte de él justamente cuando más necesidad tiene de esos haberes para atender las primordiales exigencias de la vida, pues no cuenta siquiera con un asilo sanatorio gratuito como una esperanza de recuperar su salud para ejercitar de nuevo sus actividades, si se exceptúa el Sanatorio de Santa María—Córdoba, el que no obstante el destino que le señala la ley que autorizó su adquisición, no ha prestado aún ningún beneficio á los maestros.

Ante estas situaciones extremas, que se presentan dentro de un personal numeroso por carecer de medios para satisfacer sus necesidades vitales, cuando están inutilizados temporariamente para el desempeño regular de sus funciones por enfermedad contraída en el ejercicio de la profesión, el Consejo no puede, dentro de sus elevados deberes de velar por la educación común y por el personal que enseña en las escuelas del estado, parte activa de aquella, proceder con una inflexibilidad condenable, despreocupándose de los maestros enfermos, despojándolos de su estado, propiedad bien adquirida en servicios de la cultura nacional ó condenarlos á perecer en la miseria, no puede, repetimos, porque para ello se opone la razón, el derecho y los intereses generales de la educación pública que priman sobre consideraciones dudosas de orden administrativo.

De conformidad con este criterio después de estudiar los múltiples y variados antecedentes que informan las circunstancias diferentes que afectan á los intereses escolares y al personal docente, el

Consejo ha resuelto los casos comprendidos en los expedientes observados, dejando constancia en los libros de actas, que se refieren en general á licencias con goce de sueldo á las disponibilidades, á las suplencias y sobresueldos.

La disponibilidad es, en muchos casos, motivada por la clausura temporaria ó definitiva de una escuela, ordenándose la ubicación del personal tan pronto sea posible. Es lógico que perciban el sueldo mientras estén á disposición de la superioridad, pues la ley misma les da el derecho á que no se les disminuya la dotación de que gozan mientras conserven su buena conducta y demás aptitudes para el cargo; solamente no deben percibir haberes los suspendidos por causas disciplinarias.

Lo que en general se llama sobresueldo, por una corruptela bien explicable, no es en verdad sino una remuneración extraordinaria por trabajos extraordinarios y si estos son mensuales aquella debe serlo también.

Esta remuneración extraordinaria se acuerda en toda la administración nacional á los empleados que trabajen fuera del horario ordinario, importando á la vez una economía y una necesidad indispensables.

Es una economía por cuanto si las exigencias del aumento de trabajo demanda un mayor número de empleados y si los nombramientos se hicieran en personas distintas de las que prestan sus servicios en el horario reglamentario, la asignación mensual sería el sueldo determinado en el presupuesto, mientras que éstos para hacer el servicio en horas extraordinarias se conside-

ran bien remunerados con un aumento de un cincuenta por ciento del sueldo, cuando no por menos.

Es una necesidad adoptar esta medida en la mayor parte de las oficinas, si se tiene en consideración la naturaleza de las funciones que desempeñan y la idoneidad que se requiere. No es posible concebir un trabajo ordenado y regular en la Contaduría con dos jefes distintos y doble turno de tenedores de libros; dos tesoreros para llevar las entradas y salidas de Caja en las horas reglamentarias de las oficinas y en las horas extraordinarias de trabajo diario, pudiendo decirse lo mismo del Jefe de Depósito y de los empleados que reciben y remiten en todas las horas hábiles del día los artículos escolares, así como de los empleados de otras dependencias á quienes se exige una labor extraordinaria diariamente, personal al que en justicia y conforme á prácticas establecidas se le asigna una remuneración extraordinaria.

El trabajo con que se han recargado las Oficinas de esta Repartición, especialmente con la aplicación de la Ley N.º 4.874 y la administración de las Escuelas Normales, ha demandado aumentar en proporción el número de empleados y en verdad la mayor parte del trabajo extraordinario constante previene de esas circunstancias.

Las explicaciones que preceden informan las observaciones hechas por los Contadores Fiscales á las resoluciones siguientes tomadas por el Consejo cuya constancia existe en actas:

Por disponibilidad

En sesión de Febrero 16 de 1911 y en Junio 8 del mismo año, Expte. 16.275—D/910;

Exp. N.º 1.392—D/910; Exp. N.º 9.237—C. E. 3.º/908; Exp. N.º 9.365—C. E. 7.º/907; Exp. N.º 2.731—C. E. 1.º/908; Exp. N.º 8.024—C. E. 6.º/907; Exp. N.º 7.994—C. E. 10.º/909; Exp. N.º 1.392—D/910; Exp. N.º 3.103 C. E. 4.º/909; Exp. N.º 4.248—J/905; Exp. 11.318—C. E. 1.º/; Exp. N.º 1.859—6.º; Exp. N.º 9.841; Exp. N.º 14.793 C. E. 11.º; Exp. N.º 13.856/2.º; Exp. N.º 9.822—P; Exp. N.º 2.973/6.º; Exp. N.º 3.793; Exp. N.º 8.835/2.º; Exp. N.º 2.569; Exp. N.º 8.072/13.º.

Licencias:—Exp. N.º 7.012—Z/911; Exp. N.º 9.538—S/910; Exp. N.º 11.890—J/910; Exp. N.º 1.081—M/911; Exp. N.º 5.312; Exp. N.º 7.562—4.º/911; Exp. N.º 1.918—2.º/911; Exp. N.º 3.278—9.º/911; Exp. N.º 16.687—8.º; Exp. N.º 2.769—14.º/911; Exp. 3.763—9.º/911; Exp. N.º 5.885—3.º/911; Exp. N.º 5.309—9.º/911; Exp. N.º 6.978—3.º/911; Exp. N.º 2.251—12.º/911; Exp. N.º 6.990—P/910. Entre estos expedientes están incluidas las licencias acordadas con goce de sueldo al Inspector Señor B. Lagos y al ex Secretario Señor A. J. Martínez, por llevar comisiones de estudios en el extranjero, como consta en los expedientes de referencia.

Es fuera de duda que, particularmente para las resoluciones que se refiere á la disponibilidad y licencias acordadas á miembros del magisterio, median antecedentes y circunstancias tan variadas, que su apreciación en la mayor parte de los casos, depende de los informes de diversas Ofi-

cinas que por su importancia y la naturaleza de sus funciones están exentas de un contralor superior, para que se pudiera afirmar con toda certeza que la solución dada en cada caso esté ajustada á estricta justicia administrativa, como son los evacuados por el Cuerpo Médico, Inspección Técnica y los Consejos Escolares de Distrito, colaboradores sujetos también á equivocarse en la apreciación de los hechos.

SUBSIDIOS—GASTOS DE ENTIERRO Y LUTOS

Expte. N.º 9812/911.—El subsidio de \$ 5.000 para ayudar al edificio escolar de «San Carlos» en San Lorenzo (Santa Fe), así como las resoluciones de Junio 20 de 1911, de Febrero 10/1910, de Julio 1.º de 1911, por las cuales se dan como subvención especial \$ 5.000 á las escuelas é institutos filantrópicos argentinos y \$ 500 al Colegio San Cayetano han sido acordados en concepto de estímulo y fomento á esos establecimientos particulares de enseñanza de conformidad al deber que impone al Consejo el Art. 57 Inciso 18 de la Ley N.º 1420, porque cooperan eficazmente como otras beneméritas asociaciones, entre las que descuella la de la Conservación de la Fe subvencionada con \$ 10.000, á difundir la educación pública gratuita, dirigiendo escuelas con la asistencia regular de miles de niños analfabetos.

Las escuelas é institutos filantrópicos argentinos educan..... 3.828 niños
Las escuelas de la Conservación de la Fe..... 3.422 »
El colegio San Cayetano 110 »
ó sea un total de 7.360 »

Si se estudia la faz económica de estas resoluciones, observadas, á primera vista se comprende las grandes ventajas que tienen.

La instrucción primaria es obligatoria para todo niño en edad escolar, bajo penas aplicadas á los padres ó tutores que no los manden á las escuelas. Para proporcionar los medios de educar á esos pobres sería menester fundar mayor número de escuelas fiscales con un costo medio de más ó menos \$ 90 anuales por niño, comprendiendo todos los gastos, ó sean \$ 662.400 al año que es más oneroso que gastar en forma de subsidio \$ 15.500 para obtener los fines legales sobre 7.360 escolares.

Exptes. N.^{os} 5.900 y 7.170-P.—Resuelve el Consejo contribuir con \$ 1.500 para socorrer por medio de los directores de escuelas á familias perjudicadas por inundaciones, y con \$ 1.000 á la suscripción levantada en favor de los motorman y guardas de los tranvías en nombre de los niños pobres.

Estos subsidios tienden, aunque aparentemente no se comprenda, á prestigiar la institución escolar, en momento de zozobras sociales, por fatalidades ó huelgas, llevando al espíritu del pueblo el convencimiento de que la escuela obligatoria, resistida aún en cierto modo por el proletario, tiene como fin también educar el corazón y el sentimiento democrático, atrayendo á sus bancas á los que la resisten, ejercitando actos públicos de significado elevado que sirven de grandes enseñanzas concordantes con las finalidades de la educación común.

La resolución del Consejo de Julio 5/1911, observada, se refiere á \$ 3.000 acordados para

luto á la familia del Dr. D. Rafael Ruiz de los Llanos, Vocal del Consejo, fallecido, y al pago del entierro. Un acto de esta naturaleza se explica por sus propios fines, tratándose de un honorable miembro de este Consejo, que había prestado largos é importantes servicios á la educación pública; además existen antecedentes de gastos no observados hechos por el Consejo con motivo del fallecimiento de su Presidente Dr. J. M. Gutiérrez en 1903.

Expte. N.^o 2.577/1911.—Se acuerda \$ 1.000 á la viuda del Visitador de Escuelas D. Delfín J. Ruiz, fallecido en el desempeño de sus funciones y á consecuencia de enfermedad adquirida en un viaje de inspección. La viuda con hijitos pequeños, quedó en la mayor orfandad.

COMPRA DE LIBROS, DE MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

Una de las más graves observaciones que á este respecto hacen los Contadores consiste en no haber encontrado constancia de haberse solicitado de la Penitenciaría Nacional presupuestos para impresiones, encuadernaciones, construcción de muebles, etc., á fin de cotejar sus precios con los de las casas de comercio, en las que se hacen las adquisiciones, no obstante lo dispuesto por decreto de Marzo 6 de 1882, expedido por el Departamento de Justicia é Instrucción Pública, por el que se establece que las Reparticiones de la Administración solo podrán encomendarse á particulares, en la Capital, las obras ó publicaciones que no sea posible ejecutar convenientemente en los talleres de la Penitenciaría.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que el decreto citado se refiere á las necesidades de administración sentidas hace treinta años.—El que conozca los actuales talleres de impresiones, de carpintería, fundición, etc., que posee la Penitenciaría no obstante la enorme ampliación que han tenido con relación á la importancia que debieron tener en 1882, comprenderá fácilmente la imposibilidad material que existe para satisfacer las necesidades de referencia.

El informe de los Contadores Fiscales hacen extensiva la obligación de encargar á la Penitenciaría la compra de material escolar y útiles en general, lo que comprende muebles y los diferentes artículos que se utilizan en las escuelas.—No hay necesidades de dar explicaciones sobre estos hechos, pues el buen sentido los explica; los talleres oficiales no están montados sino para trabajos limitados, para los cuales los ha utilizado el Consejo en diversas oportunidades y los utiliza actualmente, no estando habilitada tampoco aquella repartición para dar precios comparativos sobre artículos de fabricación extranjera, con materiales que no existen en el país cuyo costo es desconocido.—Es el caso previsto por el Ministerio, «la imposibilidad de ejecutar convenientemente las obras en los talleres de la Penitenciaría».

Los Contadores llaman también la atención, que con frecuencia se acepten los presupuestos de la casa Jacobo Peuser por útiles de escritorio é impresiones, no obstante de ser sus precios elevados, no tratándose de trabajos en los que pudiera tenerse en cuenta la competencia especial en la

perfección ó naturaleza delicada de la obra.—Esta afirmación, no sustentada con la cita concreta de un solo expediente, parece insinuar una preferencia no motivada; pero si la preferencia existe está plenamente justificada dentro de los principios más severos de administración.

Las comparaciones de los artículos ó materiales á comprar como las propuestas por obras á contratar se relacionan en todos los casos, á la calidad, al precio, al tiempo de entrega y á la mayor ó menor urgencia de satisfacer la necesidad; en la consideración de estas cuatro circunstancias se fundan las resoluciones del H. Consejo y los Contadores Fiscales no están preparados para juzgar las conveniencias que han determinado aquellas, por la razón obvia de que con la revisión de cuentas, pagadas hace un año, no pueden conocer los precisos antecedentes de las necesidades satisfechas como cuáles de las cuatro circunstancias citadas hayan determinado las resoluciones pertinentes. No hay disposición alguna en la ley de Contabilidad que imponga resolver las compras considerando solamente el precio más bajo—lo que se tiene en cuenta es la que ofrece mayores ventajas para los fines de su adquisición.

Como hecho cierto puede afirmarse que las casas competidoras son un control eficaz de las compras que ejecuta el Consejo, y no se ha dado el caso de ningún reclamo público ó privado sobre preferencias injustificadas.

Las observaciones sobre compras parciales de libros y útiles para satisfacer pedidos de las Provincias que están comprendidas en los Ex-

pedientes N.ºs 12.515—I/909; 1.790—I/911; 5.901—I/910; 15.713—O/911; 14.019—R; 11.493—C/911 y adjuntos; N.º 3.372—I/910 y N.º 9.211—D., corresponden á resoluciones del Consejo, compras, que se han hecho de conformidad á las licitaciones públicas aprobadas.—Respecto á los saldos de las facturas de artículos comprados, no incluidos en aquellas licitaciones, cuyo valor excede de \$ 1.000, motivo único de las observaciones, se explica, por que refiriéndose á libros de propiedad del autor ó editor y á muebles de marca determinada que indican los solicitantes no habiendo en plaza ofertas en competencia, no les alcanza la prescripción de la licitación—Inciso 5.º del Art. 33 de la Ley N.º 428.—Los interesados en estos pedidos, que son las autoridades escolares de las provincias, no han formulado reclamos, pudiendo tener,—algunas provincias lo tienen,—un encargado que intervenga en las compras.

El mismo precepto en ciertas compras de más de mil pesos ha sido omitido en algunos casos, para evitar el recargo de precio en un 10 y á veces de un 20 % por concepto de avisos.—El límite de mil pesos para las compras privadas, establecido hace 30 años, aplicado estrictamente en la actualidad es una traba administrativa que se siente en todas las reparticiones públicas, tan es así que en el año ppdo., por sanción de la H. C. de Diputados se elevó aquel límite á una suma diez veces mayor.

En este capítulo quedan comprendidas las explicaciones á las observaciones hechas á resoluciones del Consejo, sobre aceptación de pro-

puestas para la construcción de edificios pequeños sin sujetarse á las prescripciones de la ley, consistiendo aquellas en no haberse licitado sino una sola vez, lo que es explicable por que en las poblaciones donde debían construirse los edificios no hay medios de publicación y lo que es más faltan empresarios de obras, siendo más costoso é inútil á la vez repetir la licitación declarada desierta la primera vez, de donde resulta justificada la adjudicación de la obra por precios ya licitados á contratistas que ofrecen suficiente garantía.—Todos estos hechos son determinados por circunstancias especiales que la administración debe apreciar en bien de los intereses generales que le están encomendados.

El punto 8.º que comprende las observaciones referentes á la falta de previsión y estudio de parte de la Oficina técnica sobre planos y presupuestos relativos á la construcción de los edificios escolares, es el capítulo más importante del informe de los Contadores Fiscales, así lo consideran ellos mismos, lo que hace pensar que en los casos que citan es donde creen haber encontrado las deficiencias de tramitación que más afectan á la administración por consiguiente de mayor responsabilidad para el Consejo. Sin embargo, nada hay que importe una transgresión á las leyes, aquellos actos están ajustados á las conclusiones á que arriban los informes técnicos de los Asesores legales y bajo ningún concepto, aun en los casos probables de defectos en planos y errores en los presupuestos, falta de estudio del te-

rreno, bondad del agua, etc., puede primar sobre aquellos dictámenes la opinión de los Contadores Fiscales que abren juicio como peritos sobre asuntos que requieren conocimientos profesionales.

Así no es extraño que observen con el mismo criterio, por ejemplo, en los expedientes N.ºs 9.077—S/910 al N.º 9.083—S/910, la falta de previsión escolar al proyectarse escuelas de una y dos aulas, sin consultar según ellos la importancia de las poblaciones escolares, entrando en consideraciones sobre antecedentes legales que ignoran, pues pretenden que los edificios debieron tener las comodidades para aceptar á todos los analfabetos de la localidad en que se construyeron, problema que aun no ha sido abordado por los legisladores y su solución es posible que tendrá que esperar el tiempo necesario á la renovación de muchas generaciones. En este caso como en otros análogos se trata de las escuelas nacionales—mil quinientas—correspondientes á la Ley N.º 4.874, para cuya instalación, sueldos de maestros, inspección, muebles y útiles, gastos generales y edificación el presupuesto de 1911 asignaba \$ 5.000.000. Aun quedan 500.000 niños analfabetos que no reciben educación, no sólo por la deficiencia de los edificios, como juzgan los Contadores, sino por falta de recursos para ampliar los existentes y multiplicar los de nueva creación á la vez para sostener el numeroso personal de que han menester, con los demás gastos consiguientes.

Como elemento de juicio ante la Contaduría Nacional sobre los expedientes correspondientes á éstas observaciones opinamos que debe agre-

garse la parte pertinente del estudio producido, con relación al Capítulo «Construcciones de Edificios Escolares», por el Abogado Jefe de la Oficina Judicial y el Asesor Letrado, que se transcribe textual:

«Es un hecho demasiado notorio y harto frecuente que, tratándose de la construcción de obras, su costo, en definitiva resulta superior á la cantidad presupuestada en un principio. A este fenómeno que, por la constancia con que se repite asume las características de una ley y que hay que atribuir á la falibilidad de las mejores y más diligentes previsiones, no ha escapado ni ha podido escapar al Consejo, máxime si se tiene en cuenta que el cúmulo de labor que necesariamente supone la ejecución de un plan tan vasto y complicado como el de su edificación, lo exponía muy particularmente á caer en tales diferencias. Pero de la inversión, por parte del Consejo, de una cierta cantidad de dinero por encima de los presupuestos originarios, para cubrir inevitables y explicables diferencias por aumento de obras, se sigue acaso alguna irregularidad que justamente pueda serle imputable? Si el Consejo ha autorizado todas aquellas adicionales que enumeran los Señores Contadores, como asimismo los pagos necesarios para sufragarlas, bajo la base de las obras real y positivamente realizadas y de los precios aprobados en licitación. Qué principio ha comprometido ni qué ley ha violado? No sería más justo ver en todo ello la consecuencia natural de aquel fenómeno tan conocido y previsto por el Art. 42 de la misma ley de Obras Públicas cuando determina los de-

rechos y obligaciones del contratista en el caso de que se introdujesen, después de contratadas las obras, modificaciones en el proyecto, *que pudieran producir un aumento* de costas ó trabajos en las mismas?»

«Se explicaría, sí, que el aumento de gastos por conceptos de adicionales de que hacen argumento los Señores Contadores, pudiera constituir un cargo en contra del Consejo, pero ello sería, bien entendido, á condición de que dichos gastos no hubiesen sido compensados en su justa proporción con el beneficio positivo que le reporta al Consejo la obra realizada. Pero cuando ha ocurrido precisamente todo lo contrario. Es decir, cuando aquel aumento de las obras, auspiciado por la Oficina técnica como un árbitro indispensable para la mejor adaptación del edificio ó si se quiere para cubrir involuntarias y explicables omisiones del proyecto, ha sido autorizado por el Consejo y el pago de los trabajos se ha efectuado con estricta sujeción al Art. 41 de la ley de Obras Públicas ó lo que es lo mismo aplicando los precios unitarios del contrato. Qué mal ha resultado para los intereses públicos?»

«Así pues todas las consideraciones generales y los casos concretos enunciados en el capítulo en cuestión y en lo que se refiere al aumento de obras y por ende de gastos, sólo prueban el esfuerzo realizado por los Contadores informantes, para demostrar con casos prácticos que, con respecto al Consejo, se ha cumplido una vez más con aquella ley que determina la existencia de las obras adicionales y que el aumento de los gastos es una consecuencia obligada del aumento de las

necesidades escolares, que las hacen indispensables»

«No habría habido necesidad de especializarse con la edificación de escuelas para llegar á esta última conclusión, pues que con cifras más gordas podría acreditarse este aumento de gastos, impuesto por aquellas necesidades, comparando el presupuesto del año 1884—por ejemplo—con el del último ejercicio.»

«Al sentar las bases con arreglo á las cuales debía procederse á licitar públicamente algunos de los edificios últimamente levantados y poniendo en práctica un temperamento propiciado por la Dirección General de Arquitectura, se incluyó en los respectivos presupuestos oficiales, destinada á *imprevistos y posibles aumentos en el precio de los materiales y jornales* una partida especial cuyo valor fué calculado en un tanto por ciento sobre el importe total de las obras computadas en los mencionados presupuestos oficiales.»

«Definida por su objeto esta partida que ha sido observada por los Señores Contadores, sin penetrar seguramente su verdadero alcance, resulta ser ni más ni menos que un seguro estipulado para cubrir aquellos posibles aumentos que constituyen evidentes riesgos á cargo de los contratistas y que por consiguiente tienen forzosamente que influir en la determinación del cuántum de sus propuestas.—Si pues los imprevistos de que se trata no hubiesen sido incluídos en los presupuestos oficiales, esta omisión no hubiera sido óbice para que los empresarios constructores los descontaren al formular sus propuestas, como un factor decisivo que en concurrencia con

otros viene á regular sus exigencias en un negocio de tal naturaleza.»

«Lo cierto es que el Consejo so pena de partir de una base errónea que hubiera viciado sus propios cálculos sobre el valor aproximado de la obra, no podía menos que computar aquellos imprevistos que, después de las consideraciones hechas respecto de su esencia, no es posible confundir, como los confunden los Señores Contadores, con las obras imprevistas; pues mientras que aquellos constituyen la prima del seguro á favor de los adjudicatarios de la obra, estas se refieren á un aumento necesario de los trabajos primitivamente presupuestados determinado por las contingencias de que ya se ha hablado.»

«Siendo este el verdadero origen y razón de ser de la partida *«por imprevistos»* y tal su naturaleza fundamentalmente distinta de la de las obras imprevistas, su consagración en los presupuestos oficiales pudo hacerse únicamente de dos maneras. Una habría consistido en aumentar proporcional y sistemáticamente, con el valor calculado á los imprevistos, cada renglón del presupuesto, y la otra en hacerlos figurar en globo y por separado como una de las tantas partidas del presupuesto. Convencido pues de que los dos sistemas llevaban el mismo resultado, el Consejo, creyó oportuno optar por el segundo.»

«Tratándose de obras adjudicadas en remate público, el hecho de que figure ó no calculada en los presupuestos oficiales la partida *«por imprevistos»*, no influye por otra parte en lo más mínimo en lo que al monto de las propuestas se refiere; puesto que en definitiva es la competencia

entre los licitadores la que viene á determinar el precio de adjudicación de la obra.»

«Es por demás sabido que el contratista que concurre á una licitación de aquella especie independientemente de los precios parciales y del total consignado en aquellos presupuestos, formula sus ofertas teniendo únicamente en cuenta, además de la prima del seguro de que se ha hecho mérito, la clase y magnitud de la obra, el valor de los materiales á emplear y el costo de la mano de obra, transporte, etc.— Sobre estos valores en que calcula sus ganancias que naturalmente procura reducir en lo posible para evitar que la obra sea adjudicada á un competidor.»

«Se ve pues, que no interesa el resultado final del remate la inclusión ó exclusión en los presupuestos, de los imprevistos como tampoco interesa el valor que se les asigna oficialmente á las demás partidas y que por lo tanto la determinación de estos valores podrían llegar á ser totalmente suprimidos si no fuera que el Consejo necesita conocer el costo aproximado de sus edificios, antes de llamar á licitación.»

«Con arreglo al programa que se había impuesto y una vez que las propuestas presentadas en la licitación habían sido formuladas bajo la base del presupuesto oficial, esto es, incluyéndose como parte integrante del precio del edificio los imprevistos á que se alude, el Consejo, de acuerdo por otra parte con lo expresamente establecido en el pliego de condiciones oportunamente publicado, procedió á hacer las adjudicaciones por un precio único,—por un tanto—para usar de los términos empleados en la ley de Obras Públicas—

quedando por consiguiente definitivamente incorporado al precio y formando con él un todo indivisible, la partida que analizamos».

«Si tales eran los antecedentes del contrato no hay que extrañar entonces que, llegada la oportunidad de saldar definitivamente los créditos provenientes de aquellas construcciones así adjudicadas, el Consejo abonara á los empresarios, como en los casos á que se refieren los expedientes N^{os}. 9.079, 1910 y 5.002,—C.—1908, citados en el informe de los Señores Contadores, los imprevistos comprendidos en el precio como la parte en el todo—sin exigir la comprobación de la efectividad de obras adicionales que nada tenían que ver con los imprevistos».

«De manera que si el Consejo, en los expedientes que se mencionan se apartó de la tesis contraria erróneamente sustentada por la Contaduría, lo hizo siguiendo los consejos de la Dirección de Arquitectura y de su Asesor Letrado, y para ahorrarse las costas inevitables, como consecuencia fatal de una actitud insostenible desde el punto de vista de la ley, como hubiese sido la aconsejada por Contaduría».

Se insinúa en el informe de los Señores Contadores, que el Consejo ha debido en todos los casos solicitar la aprobación del Poder Ejecutivo para la construcción de sus edificios, interpretando equivocadamente el Inc. 24 del Art. 57 de la ley de Educación Común, que en realidad sólo exige el requisito apuntado tratándose de la compra de terrenos, como claramente se infiere del mismo objeto que se ha propuesto la ley que no es otro que el de establecer una garantía más y

un contralor que asegure en lo posible la acertada inversión de las cuantiosas sumas que demandan aquellas adquisiciones».

«Ahora tratándose de la construcción de escuelas y aun cuando ella también exige gastos de consideración, el requisito de la aprobación del Ejecutivo no tendría razón de ser si se tiene en cuenta que la garantía que se persigue, esto es: que no se invierta con tal objeto mayor suma que la que equitativamente corresponda á la obra que se trata de realizar, está suficientemente asegurada con el resultado de la licitación pública que en todos los casos es de rigor de acuerdo con lo establecido por la ley de Contabilidad y Obras Públicas».

«De modo tal que si el precio de la obra determinado por la más baja oferta, se considera por la misma ley como el más justo y equitativo.»

«¿Qué objeto habría en recabar una aprobación que, só pena de desvirtuar el sistema de las licitaciones, establecido como un criterio legal, en ningún caso podría negárselo al Consejo?»

«Así pues, debe rechazarse por errónea la interpretación que en aquel sentido hacen los Señores Contadores del Inc. 24 del Art. 57 de la Ley de 1894, á no ser que se pretenda que la ley se ha propuesto establecer un requisito perfectamente inútil, lo cual es inadmisable».

«Tan es cierto que no se exige semejante aprobación previa en lo que respecta á la construcción de locales para escuelas que, la Contaduría, encargada por la ley de verificar si los gastos públicos se han hecho llenándose las formalidades prescritas por la misma, jamás le ha obser-

vado al Consejo la falta de ese pretendido requisito cuando tantas veces se le ha presentado la oportunidad de hacerlo, con motivo del examen de las cuentas y de sus comprobantes que está en el deber de practicar periódicamente».

«Incurren en un error semejante los Señores Contadores, en cuanto afirman que el Consejo, una vez confeccionados los planos y presupuestos de las obras, por su Dirección de Arquitectura, «especialmente cuando ésta no procede con la regularidad y competencia que es de su deber» (sic), está en la obligación de someter dichos planos y presupuestos, á los fines de su revisión, al Ministerio de Obras Públicas».

«Hemos visto en otra parte que la ley de Educación Común le confiere una amplia autonomía al Consejo, en la gestión de los intereses escolares, creando así dentro del Gobierno general una institución independiente por sus atribuciones, con un patrimonio propio y que el Inc. 24 del Art. 57 de su ley orgánica expresamente le reconoce la facultad de autorizar la construcción de sus edificios escolares con la sola limitación establecida en dicho Inc. 24, esto es: á condición de ajustarse á las prescripciones de la ley de Contabilidad».

«Y bien, esta libertad de gobernarse á sí mismo con entera independencia, valiéndose de medios y órganos propios, vendría á quedar disminuída si el Consejo tuviera que someter los planos y presupuestos de sus edificios, á la revisión del Ministerio de Obras Públicas».

«Además, disponiendo el Consejo de una oficina de Arquitectura, dirigida por un técnico, cuya existencia por otra parte está consagrada en

la ley de presupuesto general en cuanto determina la categoría y sueldo de su personal, y desde el momento en que sus funciones consisten precisamente en confeccionar aquellos planos y presupuestos y vigilar su fiel ejecución, sería ilógico someter sus actos al contralor de otra entidad técnica de la misma especie, subordinación esta que haría de todo punto estéril é innecesaria la existencia de dicha oficina de Arquitectura. Por otra parte, siguiendo al criterio de los Señores Contadores, se daría el absurdo de que el Consejo, en cada caso y previa comprobación de la mayor ó menor competencia de su Dirección de Arquitectura, debería, según los casos, someter ó no los planos ó presupuestos confeccionados por la misma, al Ministerio de Obras Públicas.—Es mucho decir».

«Refiriéndose á las primas estipuladas en algunos contratos á favor de los constructores para el caso de que éstos se anticiparan al plazo en la terminación de los edificios, y si bien los Señores Contadores reconocen «el loable propósito que el Consejo tuvo en vista al establecerlas», impugnan sin embargo el sistema, que en su opinión resulta perjudicial, desde que, según estos Señores, «los empresarios ven en las primas sólo un incentivo para obtener una fácil y no despreciable utilidad sacrificando la solidez de los edificios por la precipitación con que necesariamente tienen que hacerlo, con el fin de obtener aquéllas». (las primas)».

«En realidad, le bastaría al Consejo para coonestar su actitud en esta cuestión de las primas, con observar simplemente, que la adopción

por su parte del sistema que las consagra, es el resultado del ejercicio de la facultad que la ley le confiere, como entidad autónoma, para administrar sus propios intereses. En segundo lugar que al establecerse las primas no se ha contrariado disposición legal alguna y por último, que éstas han obedecido á un loable propósito, según los mismos Contadores. De manera tal, que en último análisis la observación formulada á aquel respecto no pasa de ser la manifestación de una apreciación personal de dichos Señores, sobre la eficacia de un sistema que, si no resulta de su agrado, no por ello deja de ser perfectamente legal.

«Aun cuando en rigor el Consejo, en esta como en otras cuestiones que plantea el informe elevado á la Contaduría General, cumpliría cabalmente su misión con solo concretarse á demostrar la legalidad de que se hallan revestidos todos sus actos y como quiera que esta legalidad por lo que respecta á las primas establecidas en algunos de sus contratos, queda suficientemente justificada con lo expuesto; sin embargo no está demás hacer notar que solo desconociendo el verdadero interés de los mismos empresarios puede afirmarse que la convención relativa á las primas dé lugar á las consecuencias señaladas.»

«Con arreglo á los contratos dos son las condiciones á que se halla subordinado el derecho á la prima:»

«1.º Que la obra sea definitivamente terminada con sujeción al plano, pliego de especificaciones, etc. y á satisfacción del Consejo.»

«2.º Que la entrega de la obra en aquellas condiciones tenga lugar cierto tiempo antes del plazo fijado en el contrato.»

«Saben entonces los contratistas—sus contratos claramente lo dicen—que si incurren en aquella precipitación y si con tal motivo la obra resulta defectuosa, lo que el Consejo puede fácilmente comprobar por medio del personal técnico de la Dirección de Arquitectura, no tan solo pierden definitivamente el derecho á la prima, si que también, y lo que para ellos es más grave, la suma siempre considerable que en todos los casos el Consejo les retiene en garantía del fiel cumplimiento del contrato. Así pues este correctivo hace que los contratistas se cuiden muy especialmente de incurrir en tales abusos que les acarrearían perjuicios de mayor importancia máxime cuando la prima siempre se ha fijado, precisamente para impedir que una expectativa demasiado halagüeña por parte de los empresarios pudiera resultar contraproducente, en sumas relativamente de poco monto.»

«Si en la construcción de algunos edificios se ha observado ciertos defectos, ello no debe ser necesariamente atribuído á las primas prometidas, sino simplemente á la mala fe de algunos empresarios imposible de evitar y que de todos modos se hubiera puesto de manifiesto aun cuando no se hubiese establecido prima alguna.»

«Lo cierto es que el Consejo, en situaciones como aquellas, aplicando con todo rigor las previsoras disposiciones de sus contratos no solo se ha negado, como era consiguiente á abonar la prima sino que además ha intimado al contratista la ejecución inmediata de las obras necesarias para subsanar aquellos defectos conservando en su poder la garantía que le responde amplia-

mente de las faltas cometidas en la ejecución de la obra, como ha sucedido entre otros casos en el recordado por los Contadores informantes (Expediente, N.º 108.—C—1909) relativo á la construcción del edificio de la calle Moldes entre Pampa y Sucre.»

«Examinése ahora á la luz de las explicaciones que acaban de ser expuestas, los distintos expedientes citados en apoyo de sus erróneas conclusiones, por los Contadores informantes, y que se relacionan con las obras adicionales autorizadas y abonadas por el Consejo como asimismo con los pagos efectuados por concepto de imprevistos, con la estipulación de las primas, etc., etc., y fácilmente se verá que en todos los actos acusados por aquellas actuaciones no hay nada que denuncie un procedimiento contrario á las leyes ni la sombra de una incorrección.—Todo lo contrario.—Se observa que siempre se ha procedido con espíritu fiscalizador á veces exagerado y que el Consejo antes de pronunciarse definitivamente sobre cualquier cuestión regida por los contratos y la Ley de Obras Públicas, que pudiera afectar los intereses que está llamado á defender, ha oído y apreciado en su justo valor las opiniones de sus técnicos, cada cual dentro de su especialidad, agotando por otra parte todos los trámites necesarios para ilustrar sus resoluciones, haciendo efectivas en su caso y con la mayor estrictez, contra los empresarios sindicados de haber faltado á sus compromisos, las sanciones arbitradas en los respectivos contratos.»

«Para terminar este informe en el que hemos creído necesario consignar, además de las consideraciones generales de derecho que hace al caso,

las observaciones particulares que nos ha sugerido el informe elevado á la Contaduría General en la parte que trata de la construcción de edificios cuya materia, con motivo de la intervención que nos ha cabido en la formación de los contratos y en la sustanciación de las incidencias á que ellos han dado origen, nos es especialmente conocida y á fin de completar nuestro análisis crítico sobre tal materia; vamos á examinar ahora brevemente los casos recordados por los Señores Contadores, aludiendo á los expedientes: 5.002—C—1908—1.557.—letra P. y 5.686. letra C.—»

PRIMER CASO

«Terminada la construcción del edificio escolar de la calle Caracas esquina á Rivadavia, contratada con el empresario Don Pablo Boffa, por la suma de \$ 223.254,88 $\frac{m}{n}$, y en presencia de las planillas finales de las obras, *visadas* por el Señor Arquitecto Director de las mismas D. Carlos Altgelt, de las que resultaba un aumento de \$ 4.214,14 $\frac{m}{n}$ sobre el valor del contrato y una disminución de \$ 6.332,37 $\frac{m}{n}$; la Contaduría de la Repartición, formuló ciertos reparos á propósito de aquellas planillas que, á su juicio, no venían en la forma prescripta por el art. 56 de la Ley de Obras Públicas (que se limita tan solo á establecer que los pagos de la obras contratadas por un tanto ó por medida no se harán sino en vista del certificado del Ingeniero Inspector.)»

«Tomando muy en cuenta la observaciones de la Contaduría y toda vez que se trataba de la interpretación del alcance de una disposición le-

gal, el Consejo, pasó los antecedentes á informe del Asesor Letrado, quien se expidió en Diciembre 14 de 1911 y Febrero 17 de 1912 respectivamente, en los siguientes términos: « la presentación de la planilla de cálculos métricos que exige Contaduría como requisito necesario para liquidar el certificado final del edificio escolar recientemente construido por el empresario Don Boffa en la calle Rivadavia y Caracas; tendría por único objeto según lo manifiesta dicha Oficina, demostrar que efectivamente se han realizado todas las obras incluídas en el presupuesto que forma parte integrante del contrato. — Esta demostración que en todo caso no sería completa sin la verificación previa de las medidas sobre la obra misma, está suficientemente suplida, á mi juicio, con el informe del Señor Arquitecto Asesor quien hace presente á fs. 157 que el edificio de que se trata ha sido terminado (en las condiciones del contrato debe entenderse) máxime si se piensa que el mismo Señor Arquitecto ha debido forzosamente tener á la vista aquellos cálculos métricos, precios unitarios que trae el contrato como un antecedente indispensable para poder calcular como lo hace en las planillas de fs. 143 á 156 inclusive, el aumento y disminución de las obras con motivo del cambio de la línea municipal, de la ochava, etc.»

«Por otra parte los precios unitarios que figuran en la propuesta presentada á la licitación y aceptada por el Consejo, solo rijan á aquellas partidas que se relacionan con el aumento y disminución de las obras sin que ellos puedan ser aplicados á las demás partidas que integran el certificado final, por la sencilla razón de que

la obra ha sido contratada por una suma total ó precio único y no por medidas. — De tal modo que salvo la deducción que corresponde sobre el precio total estipulado con el Señor Boffa, en virtud de los aumentos y disminuciones á que he aludido, la cantidad que el Consejo adeuda en la actualidad al nombrado empresario, es, ni más ni menos, que la diferencia entre el precio de adjudicación de la obra reducido en definitiva á la cantidad de \$ 221.133.65 $\frac{m}{n}$ á virtud de las circunstancias más arriba expresadas y el monto total de los anteriores certificados abonados al contratista.»

«Además es necesario tener presente que según el Art. 7.º de las bases de licitación, los precios unitarios deberá darlos el contratista al solo objeto de poder formular los certificados parciales ó lo que es lo mismo el importe de la obra parcial realizada al fin de cada período establecido para los pagos también parciales. — La determinación del importe del último certificado queda hecha de por sí desde que dicho importe no puede ser sino aquel saldo ó diferencia.»

«En consecuencia, opino que en este expediente se hallan reunidos todos los antecedentes para proceder á la liquidación final y en forma de la obra en cuestión y que el único punto que tiene que verificar Contaduría, es, si las partidas relativas al aumento y disminución de la obra, han sido calculadas por el Señor Arquitecto Asesor, tomando por base los precios unitarios del contrato.» «Fundada en la disposición del Art. 56 de la ley de Obras Públicas y en la resolución de Marzo 31 del año ppdo., la Contaduría, insiste

mente de las faltas cometidas en la ejecución de la obra, como ha sucedido entre otros casos en el recordado por los Contadores informantes (Expediente, N.º 108.—C—1909) relativo á la construcción del edificio de la calle Moldes entre Pampa y Sucre.»

«Examínese ahora á la luz de las explicaciones que acaban de ser expuestas, los distintos expedientes citados en apoyo de sus erróneas conclusiones, por los Contadores informantes, y que se relacionan con las obras adicionales autorizadas y abonadas por el Consejo como asimismo con los pagos efectuados por concepto de imprevistos, con la estipulación de las primas, etc., etc., y fácilmente se verá que en todos los actos acusados por aquellas actuaciones no hay nada que denuncie un procedimiento contrario á las leyes ni la sombra de una incorrección.—Todo lo contrario.—Se observa que siempre se ha procedido con espíritu fiscalizador á veces exagerado y que el Consejo antes de pronunciarse definitivamente sobre cualquier cuestión regida por los contratos y la Ley de Obras Públicas, que pudiera afectar los intereses que está llamado á defender, ha oído y apreciado en su justo valor las opiniones de sus técnicos, cada cual dentro de su especialidad, agotando por otra parte todos los trámites necesarios para ilustrar sus resoluciones, haciendo efectivas en su caso y con la mayor estrictez, contra los empresarios sindicados de haber faltado á sus compromisos, las sanciones arbitradas en los respectivos contratos.»

«Para terminar este informe en el que hemos creído necesario consignar, además de las consideraciones generales de derecho que hace al caso,

las observaciones particulares que nos ha sugerido el informe elevado á la Contaduría General en la parte que trata de la construcción de edificios cuya materia, con motivo de la intervención que nos ha cabido en la formación de los contratos y en la sustanciación de las incidencias á que ellos han dado origen, nos es especialmente conocida y á fin de completar nuestro análisis crítico sobre tal materia; vamos á examinar ahora brevemente los casos recordados por los Señores Contadores, aludiendo á los expedientes: 5.002—C—1908—1.557.—letra P. y 5.686. letra C.—»

PRIMER CASO

«Terminada la construcción del edificio escolar de la calle Caracas esquina á Rivadavia, contratada con el empresario Don Pablo Boffa, por la suma de \$ 223,254.88 $\frac{m}{n}$, y en presencia de las planillas finales de las obras, *visadas* por el Señor Arquitecto Director de las mismas D. Carlos Altgelt, de las que resultaba un aumento de \$ 4.214,14 $\frac{m}{n}$ sobre el valor del contrato y una disminución de \$ 6.332,37 $\frac{m}{n}$; la Contaduría de la Repartición, formuló ciertos reparos á propósito de aquellas planillas que, á su juicio, no venían en la forma prescripta por el art. 56 de la Ley de Obras Públicas (que se limita tan solo á establecer que los pagos de la obras contratadas por un tanto ó por medida no se harán sino en vista del certificado del Ingeniero Inspector.)»

«Tomando muy en cuenta la observaciones de la Contaduría y toda vez que se trataba de la interpretación del alcance de una disposición le-

gal, el Consejo, pasó los antecedentes á informe del Asesor Letrado, quien se expidió en Diciembre 14 de 1911 y Febrero 17 de 1912 respectivamente, en los siguientes términos: «la presentación de la planilla de cómputos métricos que exige Contaduría como requisito necesario para liquidar el certificado final del edificio escolar recientemente construído por el empresario Don Boffa en la calle Rivadavia y Caracas; tendría por único objeto según lo manifiesta dicha Oficina, demostrar que efectivamente se han realizado todas las obras incluidas en el presupuesto que forma parte integrante del contrato.—Esta demostración que en todo caso no sería completa sin la verificación previa de las medidas sobre la obra misma, está suficientemente suplida, á mi juicio, con el informe del Señor Arquitecto Asesor quien hace presente á fs. 157 que el edificio de que se trata ha sido terminado (en las condiciones del contrato debe entenderse) máxime si se piensa que el mismo Señor Arquitecto ha debido forzosamente tener á la vista aquellos cómputos métricos, precios unitarios que trae el contrato como un antecedente indispensable para poder calcular como lo hace en las planillas de fs. 143 á 156 inclusives, el aumento y disminución de las obras con motivo del cambio de la línea municipal, de la ochava, etc.»

«Por otra parte los precios unitarios que figuran en la propuesta presentada á la licitación y aceptada por el Consejo, solo rijen á aquellas partidas que se relacionan con el aumento y disminución de las obras sin que ellos puedan ser aplicados á las demás partidas que integran el certificado final, por la sencilla razón de que

la obra ha sido contratada por una suma total ó precio único y no por medidas.—De tal modo que salvo la deducción que corresponde sobre el precio total estipulado con el Señor Boffa, en virtud de los aumentos y disminuciones á que he aludido, la cantidad que el Consejo adeuda en la actualidad al nombrado empresario, es, ni más ni menos, que la diferencia entre el precio de adjudicación de la obra reducido en definitiva á la cantidad de \$ 221.133.65 $\frac{m}{n}$ á virtud de las circunstancias más arriba expresadas y el monto total de los anteriores certificados abonados al contratista.»

«Además es necesario tener presente que según el Art. 7.º de las bases de licitación, los precios unitarios deberá darlos el contratista al solo objeto de poder formular los certificados parciales ó lo que es lo mismo el importe de la obra parcial realizada al fin de cada período establecido para los pagos también parciales.—La determinación del importe del último certificado queda hecha de por sí desde que dicho importe no puede ser sino aquel saldo ó diferencia.»

«En consecuencia, opino que en este expediente se hallan reunidos todos los antecedentes para proceder á la liquidación final y en forma de la obra en cuestión y que el único punto que tiene que verificar Contaduría, es, si las partidas relativas al aumento y disminución de la obra, han sido calculadas por el Señor Arquitecto Asesor, tomando por base los precios unitarios del contrato.» «Fundada en la disposición del Art. 56 de la ley de Obras Públicas y en la resolución de Marzo 31 del año ppdo., la Contaduría, insiste

en que la presentación de la planilla de unidades métricas y precios unitarios es un requisito imprescindible para la liquidación y pago del saldo del precio del edificio construido por el empresario Señor Boffa, en la esquina de Rivadavia y Caracas.—De este modo, la Contaduría, trata de salvar su opinión en este asunto y en presencia de la resolución superior de Diciembre 28 del referido año que le ordena practicar la liquidación final de la construcción de aquel edificio.»

«He examinado con detención las razones expuestas en fojas 163 vta., por la expresada Oficina y no encuentro mérito suficiente para modificar mi anterior dictamen de Diciembre 14; opinando ahora como entonces que no es esencial la presentación de tales planillas de detalles basándose además de las consideraciones expuestas en el mencionado dictamen que reproduzco íntegramente en la presente oportunidad, en las siguientes razones: En que si es cierto que el artículo de la ley de Obras Públicas citado por Contaduría, al prescribir la presentación del certificado como condición necesaria y previa al pago de las obras, busca una constancia escrita de los trabajos á pagar, esto no importa la obligación impuesta al contratista de acompañar en todos los casos una relación detallada de las obras bajo la base de cálculos unitarios.—En otras palabras «certificado», en el sentido que lo emplea el Art. 56 y planillas de cálculos unitarios, no son siempre términos sinónimos.»

«Ciertamente que esta sinonimia existe tratándose de obras contratadas á tanto la medida, por la razón bien simple de que en tal caso se

hace materialmente imposible, sin la expresión de cantidad de obra realizada, la determinación justa de su importe puesto que es la medida precisamente la base única para calcular dicho importe.—Otro tanto puede decirse de las obras contratadas por un precio único, pero solamente en lo que respecta á la liquidación y pago de las cuotas parciales de precio, menos la última cuando se ha establecido, como ocurre en el contrato celebrado con el empresario Boffa, no que el pago de tales cuotas deba hacerse efectivo en plazos de días ó meses determinados de ante mano y en una proporción fija relacionada inmediatamente con el costo total de la obra, sino en vista de la importancia ó mejor dicho de la cantidad de la obra parcial realizada en la época en que se solicita el pago: pues que en este caso como en el anterior el criterio de las medidas y de los precios unitarios es igualmente indispensable.»

«Pero en lo que se refiere á la liquidación final ó pago del saldo del precio de un edificio contratado por un total sin tener en cuenta la medida, las cosas ya cambian.»

«En efecto, si se conviene como es forzoso convenir que el saldo adeudado no puede consistir sino la diferencia entre el valor adjudicado y total de las cuotas parciales abonadas hasta ahora, es claro que este saldo resulta actualmente determinado sin necesidad de mayores cálculos é independientemente del resultado que arroje las planillas unitarias que por otra parte no pueden modificar el cuántum de la suma á pagar calculado en aquella forma.—Luego entonces

el certificado prescripto en el artículo 56, se reduce en nuestro caso á una constancia escrita expedida por la autoridad encargada de la dirección y vigilancia de la obra, de la terminación satisfactoria del edificio. — Por eso creo en definitiva que el informe perfectamente explícito del Señor Arquitecto Asesor Señor Altegelt, y las planillas de fs... que acompañan á dicho informe, constituyen en conjunto el certificado á que se refiere el recordado artículo de la ley de Obras Públicas.»

«Además la Contaduría hace argumentos de que las planillas á que se alude no llevan firma de su autor. Como se comprende es este un inconveniente puramente formal que puede fácilmente subsanarse por el Señor Director de Arquitectura firmando dichas planillas.»

«Fué entonces en vista de ambos dictámenes que hemos creído necesario transcribir íntegramente para la mejor ilustración del caso, en lugar de la versión incompleta que de uno de ellos trae el informe de los Señores Contadores; y por sus fundamentos, teniendo por otra parte en cuenta que si bien se discutía la forma que debía revestir el certificado prescripto por el Art. 56, de todos modos dicho certificado existía y estaba constituido precisamente por las planillas aquellas *visadas* por el Arquitecto Director de la obra; decimos que el Consejo después de oír á su Comisión de Hacienda y de acuerdo con la opinión sustentada por ésta, por el Asesor y por el Arquitecto Director, se vió en el caso de tener que desestimar los reparos formulados por la Contaduría.»

SEGUNDO CASO

«Estudiando los antecedentes relativos á la proyectada construcción del edificio de la Escuela de Niños Débiles, en la Ciudad del Tandil. Se observa que el Consejo, antes de contratar la obra con el empresario Don Luis Loreti, tenía en su poder un documento en forma suscrito por los propietarios del terreno donado con aquel objeto el Señor Pedro F. Vicuña y su esposa, en virtud del cual los donantes quedaban legalmente obligados á otorgar la correspondiente escritura traslativa de dominio y que mediante el mismo documento y en la hipótesis de que aquellos Señores se resistieran á cumplir su promesa de escriturar, el Consejo, podía obligarles judicialmente á ello ó á indemnizarle ampliamente todos los perjuicios que le irrogase el incumplimiento del compromiso contraído en el caso de que la escrituración resultase, como luego resultó, legalmente imposible por culpa de los promitentes.»

«Es así que en rigor no puede decirse que el Consejo haya renunciado á las seguridades que el caso aconsejaba, al ordenar la construcción del mencionado edificio, sino únicamente que no se extremaron aquellas seguridades debido á que el Consejo, en posesión de aquel documento se hallaba en realidad á cubierto de todo perjuicio y por que no era de presumir que tratándose de una donación espontáneamente ofrecida, los donantes dejasen de cumplirla, creándose á ellos mismos una situación sumamente violenta.»

«De todas maneras y una vez que la respon-

sabilidad legal en que han incurrido aquellos Señores, con motivo de su omisión, aparece claramente definida por la ley que pone al alcance del Consejo los medios para hacerla efectiva, la suma abonada al contratista Loreti como consecuencia de la suspensión de la obra, será reembolsada por el Consejo cuando se defina el pleito que actualmente se sigue contra el Señor Vicuña y su esposa por los daños y perjuicios emergentes de la falta de escrituración, cuyo resultado favorable á los intereses de la repartición no ofrece la menor duda.»

TERCER CASO

«No se explican, los Señores Contadores, cómo la Dirección General de Arquitectura pudo otorgar á favor del empresario constructor del edificio de la calle Independencia N.º 4248, los dos certificados de obra á que los mismos aluden, el uno por valor de \$ 8.186,25 m/n, y por \$ 9.058,73 el otro, cuyo pago fué oportunamente ordenado por el Consejo».

«Esta deuda que encubre un cargo gratuitamente dirigido al Consejo, tiene su origen en un error padecido por aquellos Señores, que consiste en haber creído que los certificados en cuestión, se referían á obras «que no se ajustaban á lo establecido en el contrato.» Lo cual, como fácilmente podrá demostrarse, es de todo punto inexacto.»

«En efecto. El certificado por \$ 9.058,73 m/n, según claramente se desprende de los antecedentes relatados por los Contadores, corresponde á

las obras adicionales autorizadas en el Consejo en Enero 26 y en Marzo 9 de 1911 y que, como se dice, fué necesario efectuar debido por una parte, «al aumento de profundidad en las fundaciones requerido por la mala calidad del terreno y como consecuencia de la mayor cantidad de excavación y mampostería de cimientos y bases de hormigón para columnas, y á reparaciones que se efectuaron en las casas vecinas para dejarlas en el mismo estado en que se encontraban antes de la ejecución de las obras»; y por otra parte, para dotar á la escuela de un pozo semi-surgente; colocar tabiques de hierro en los W. W. C. C. y substituir por revoques moldurados los revoques lisos de las paredes de los patios.»

«Todas estas obras que *no están comprendidas en la planilla de Noviembre 4 de 1911*, de que luego se hará mérito, en vista de que *habían sido ejecutadas á entera satisfacción del Consejo*, le fueron oportunamente abonadas al empresario.»

«El otro certificado por \$ 8.186,26 m/n, se refiere, según muy bien se observa en el informe de los Contadores, á las obras *recibidas* por el Consejo, vale decir exentas de toda observación y que en esta virtud *no figuraban incluídas* en la planilla elevada por la Dirección de Arquitectura en Noviembre 4 de 1911 que comprende *sin excepción alguna, todas y cada una de las obras omitidas ó mal ejecutadas* por el contratista.»

«Ahora si se piensa que no existen más obras defectuosas que aquellas contenidas en la planilla de la referencia, el error de los Señores Contadores, resulta patente.»

«Y á propósito de los defectos cometidos en la construcción del edificio de la calle Independencia. Es digno de observar — y esta observación prueba una vez más que el Consejo ha procedido en todos los casos á hacer efectivas las responsabilidades contraídas por los empresarios, asegurándose por los medios que los contratos ponen á su alcance contra cualquier perjuicio derivado de su incumplimiento;—que, importando las obras observadas en el mencionado edificio la suma de \$ 18.475,80 m/n., según ya se ha visto, el Consejo le retuvo y le retiene al contratista, la cantidad de \$ 30.000 m/n.»

«Con arreglo al artículo 67 de la ley de Obras Públicas, y en el peor de los casos para el constructor, es decir, en el caso de que el contrato fuese rescindido por su culpa, el Consejo, tendría que abonarle de todas maneras los trabajos hechos satisfactoriamente, reteniéndole la garantía para resarcirse de todo perjuicio que le irrogase la formación de un nuevo contrato ó la ejecución de las obras, directamente.»

«Pues bien como la ejecución de las obras observadas, directamente ordenadas por el Consejo, importaría, de acuerdo con la estimación hecha por la Dirección de Arquitectura la suma de \$ 18.475,80 m/n., parece evidente que los \$ 30.000 retenidos vendrían á cubrir con exceso la responsabilidad contraída por el empresario, en los términos del citado artículo de la ley de Obras Públicas.»

Las observaciones sobre resoluciones tomadas por la Presidencia, el Dr. Don José María

Ramos Mejía dará por separado las explicaciones consiguientes, siendo de notar que los casos que se relacionan con el nombramiento de personal directivo y docente de las escuelas, y estado de disponibilidad de sus miembros fueron aprobados por el Consejo en 21 de Marzo ppdo. quedando dichos actos revestidos de la legalidad de que hasta entonces carecían.

«Tal aprobación no le está vedada al Consejo, como se afirma en los considerandos del Superior Decreto de Mayo 20 por ley ni por decreto, y ella importa afirmar y sostener sus atribuciones privativas en la Dirección y Administración de la enseñanza que le está confiada.»

Ya que los Contadores Fiscales, no obstante la prolijidad con que han realizado su trabajo, han omitido el estudio de estas resoluciones legales tan importantes por la rectitud que encierran, cuyo conocimiento habríales evitado observaciones sin fundamentos atendibles á disposiciones ya legalizadas por el Consejo, es indispensable que al elevarse este informe se agreguen en copia legalizada, como antecedentes ilustrativos para la Contaduría Nacional, los documentos siguientes:

1.º La resolución del Consejo de fecha 21 de Marzo del corriente año.

2.º Informe del Consejo presentado al Señor Ministro de Instrucción Pública con fecha 12 de Abril ppdo.

3.º Decreto del Poder Ejecutivo, sobre la nota presentada por el Vocal Dr. Cullen, de fecha Mayo 20 de 1912, entablando acción de nulidad á la resolución del Consejo.

A la vista de estos documentos la Contaduría Nacional tendrá elementos suficientes para apreciar en su justo valor el informe de los Contadores Fiscales, puesto que este, por mucho de los expedientes y actos á que se refiere, así como por la fecha en que se ordenó y practicó la intervención á la Contaduría del Consejo, está íntimamente vinculado con la acción ejercitada por el ex Vocal Dr. Cullen ante el Poder Ejecutivo y desestimada por el mismo, pues, aunque es aceptable una coincidencia impremeditada, el fondo de ésta y lo sustancial de aquél por los hechos y las circunstancias están unidos de tal modo que al darse publicidad al informe de referencia, el juicio general considera á las observaciones del informe como consecuencia de aquella gestión, siendo por lo tanto antecedentes que aportarán valiosos elementos de juicio á la Contaduría Nacional.

Ahora nos concretaremos á explicar y suministrar los antecedentes que se relacionan á observaciones hechas á otras resoluciones del Consejo no comprendidas en las clasificaciones anteriores.

INVERSIÓN DE FONDOS

Exp. N.º 9.858—13.º—La resolución adoptada por el Consejo está comprendida perfectamente dentro de las atribuciones que le acuerda la Ley N.º 1420.

Exp. N.º 8.834—11.—Se refiere á la aprobación de cuentas pasadas por el Consejo Escolar 6.º por \$ 1.910.00 $\frac{m}{n}$. correspondientes á tres cuen-

tas por diferentes trabajos de demolición de muros y nivelación en la plaza destinada para ejercicios físicos, y \$ 5.298.50 $\frac{m}{n}$, en gastos conmemorativos de un acto escolar de importancia y prestigio educacional.—Estos actos oficiales por la fecha en que se realizaban (Mayo. de 1910), demandaban gastos quizás excesivos para los festejos populares y en cuanto á los de referencia, para el Consejo Nacional que los aprobó, se trataba de hechos consumados que habían tenido lugar bajo la dirección de un Consejo de Distrito, presidido por el Ministro de Hacienda en aquella época, con cuyo visto bueno están presentadas las cuentas correspondientes.

Exp. N.º 3.794—P/908.—La observación parece referirse al hecho de que el autor de la obra «Instrucción primaria en la República Argentina» obra encomendada especialmente por el Consejo para exponer, ante propios y extraños en el Centenario de 1910, el verdadero estado de la educación común, se le abonaron \$ 5.000 por un trabajo ajeno á sus funciones de Inspector, en concepto de remuneración extraordinaria.—No conocemos la disposición legal contraria á esta resolución que está sustentada por antecedentes en todas las ramas de la Administración.

Exp. N.º 31/911.—Al Procurador de la Oficina Judicial, Don José Félix de Zavalía, inhabilitado por falta de salud, habiendo dejado trabajos de procuración sin terminarse cuya regulación no podía hacerse hasta la terminación de los trámites judiciales de los asuntos en que intervenía, se le acordaron \$ 2.000 $\frac{m}{n}$ como compensación de lo que habría tenido que percibir.

Es de notar que los procuradores no gozan sueldo alguno y que el Señor Zavallía murió al poco tiempo.

Exp. N.º 10.504—C.—Se refiere á \$ 1.000 $\frac{m}{n}$ acordados para ayudar á costear el «Busto de Sarmiento» que debía erigirse en San Francisco del Monte de Oro (San Luis) en la fecha del Centenario.—Es posible que á los Contadores haya llamado la atención, más que la suma y el objeto á que se destinaba, el nombre del lugar tan remoto, aun para los que conocen su ubicación, por ello conviene hacer notar, que en esa pequeña población el Gran Sarmiento se inició como maestro, dirigiendo la escuelita de primeras letras, que determinó para bien y honra del país, la vocación del pensador y estadista, que nunca dejó de enseñar en las letras y en el gobierno orientando con la luz de su genio por el camino preciso las instituciones políticas y educacionales, marcando con admirable acierto los amplios senderos que debía conducir á la nación á las grandes conquistas de progreso intelectual y material que se ostentan con satisfacción.—Fué el primer Presidente del Consejo Nacional de Educación y este no debía negar un pequeño óbolo de mil pesos para perpetuar en un modesto símbolo de respeto escolar, como acción educativa, su memoria en el lugar mismo donde diera las primeras lecciones á niños analfabetos, punto designado por el destino para que se erija el monumento histórico del génesis de la escuela y del maestro argentino que tanta influencia han ejercitado en la evolución de la cultura y civilización de nuestro pueblo.

MONTEPÍO CIVIL

La apreciación de irregular que aplican los Contadores Fiscales al procedimiento que observa el Consejo Nacional, respecto de los fondos que deposita á la orden de la Caja de Jubilaciones y Pensiones por concepto de la Ley N.º 4349, en cuanto se refiere al atraso con que se efectúan los depósitos puede aceptarse, pero esta demora está justificada administrativamente por el hecho cierto, conocido por el Gobierno General, la falta de recursos, por causas extrañas al Consejo, no obstante su persistente acción para la recaudación.

Puede argüirse que abonada una planilla de sueldo debe depositarse el 5 % de su valor; esto que parece tan lógico, no lo es si se considera la situación financiera del Consejo; la planilla total de los maestros, supongamos que importa \$ 100.000 y no hay sino \$ 95.000 disponibles, se pagan los haberes de los maestros y se quedan debiendo á la Caja los \$ 5.000, por una situación excepcional y las necesidades vitales que representan aquellos.

Estos hechos se han repetido pero en el corriente año se está regularizando la situación dentro de lo que es posible, y se llegará á cubrir toda la deuda tan pronto ingrese á Tesorería parte ó el total de las grandes sumas que adeuda la Municipalidad al tesoro escolar.

En cuanto á las observaciones sobre las multas impuestas al personal administrativo y miembros del magisterio, el Consejo Nacional procede

con un criterio contrario al que ha determinado el informe, es cuestión de interpretación de la letra y del espíritu de la ley, y para que esa interpretación pueda aplicarse como una regla fija de conducta administrativa, aun no está dada por la autoridad competente, que no lo es sin duda la Contaduría, ni el Consejo ni la Caja Nacional.

Para mayor ilustración, se transcribe la parte pertinente del estudio hecho sobre este punto por los Asesores letrados del Consejo:

«En la parte del informe de los Señores Contadores que reza con la deuda del Consejo á favor de la Caja Nacional de Jubilaciones, se dice «que no se ha ingresado los sueldos de los empleos vacantes del personal administrativo y del magisterio ni las multas por inasistencias.»

La razón por la cual no se ha ingresado á la Caja los fondos que tal procedencia tienen, muy fácilmente se alcanza, por lo que respecta á los pretendidos sueldos vacantes, si se tiene en cuenta que: para que exista vacante en la acepción rigurosa del término no basta con la acefalía del empleo producida por el retiro voluntario ó impuesto de la persona que lo desempeña, es además indispensable que aquel figure comprendido como una unidad dentro del número de puestos expresamente determinados por la ley de presupuesto general de la Nación. En otros términos: la vacante á los efectos indicados en el inciso sexto, artículo cuarto de la Ley N.º 4349, sólo puede existir relativamente á aquellos empleos fijados de antemano en dicha ley de presupuesto. Sabido es que esta última circunstancia no concurre

tratándose de los puestos de la Instrucción Primaria y demás empleos de esta Repartición, que son creados por el Consejo teniendo en cuenta las necesidades del momento que varían según las épocas. De manera entoncés, que en rigor sólo puede considerarse, dentro del criterio legal administrativo que sólo existe el empleo mientras se le desempeña cesando con el retiro del empleado.

«Siguiendo otro orden de ideas cabe observar que los sueldos de todo el personal del Consejo técnico y administrativo, excepción hecha del personal de las Escuelas Normales, son costeados con recursos propios de esta Repartición, que de acuerdo con las leyes especiales que los han creado, se hallan indistintamente afectados en bloc (para emplear una expresión gráfica) á diversas necesidades de la enseñanza tales como adquisición de materiales para las escuelas, construcción de edificios escolares, etc., etc. De manera pues, que en realidad los haberes no cobrados cuya entrega se le exige al Consejo sin ningún fundamento, deben considerarse como si nunca hubiesen egresado ni dejado de formar parte de aquella fuente propia de recursos.»

«Si aceptásemos un principio contrario, resultaría en definitiva, que el Consejo estaría obligado á contribuir con sus fondos propios á la formación del tesoro de la Caja Nacional, lo que es inadmisibile.»

«Por lo que respecta á las multas por inasistencias, puede afirmarse que ellas no existen y que solo por un error fundamental del concepto puede considerarse como tal «la pérdida de una

parte de la dotación mensual del empleado ó funcionario motivada por las faltas de asistencia injustificadas á las clases», á que se refiere el artículo 77 de la ley de Educación Común.»

«Se trata en este caso, como bien se hecha de ver, no de una pena pecuniaria impuesta por faltas cometidas en el desempeño de las funciones, sino simplemente de una deducción practicada en los sueldos por concepto de servicio que no habiendo sido prestado, el Consejo no está obligado á retribuir.»

«Es tan justa esta observación que la ley de Educación Común, solo considera como multa, según resulta del inciso octavo del artículo 44, el producto de las penas que imponga la autoridad escolar en los casos de los artículos 17, 18, 20 y 21 de la misma ley «que en ningún caso podrán exceder de *cien* pesos moneda nacional ni ser menores de *cinco* pesos de igual moneda por cada falta» y que se refiere á situaciones completamente distintas á la que define el Art. 77.»

«De modo pues, que en lo que se refiere á la pérdida de una parte de la dotación mensual de los empleados, etc., etc.; caben los mismos argumentos que nos llevaron, en el caso anterior á la conclusión de que si los sueldos que se dice vacantes (las multas en este caso) debieran ingresar á la Caja Nacional, el Consejo resultaría obligado á contribuir con sus fondos propios á la formación del tesoro de aquella Institución.»

IMPUESTO Á LAS SUCESIONES Y DONACIONES

Sobre la recaudación de los fondos que constituyen el Tesoro Común de las Escuelas, este es

el único punto que abordan en su informe los Contadores Fiscales para indicar solamente ciertas constancias de detalles que debieran ponerse en los libros correspondientes, pudiendo servir para el contralor de los honorarios que el Consejo paga á sus Procuradores, por su intervención en los juicios en que es parte aquel.

Hacen constar también que esos honorarios han importado alrededor de \$ 50.000 m/n, en 1911, pero han olvidado decir que el monto de lo percibido, suma \$ 1.883.901, estando aquella cantidad ajustada á un porcentaje menor de las disposiciones arancelarias, pues no alcanza al 3 % de lo recaudado.

Están tomadas por el Consejo, con anterioridad al informe, todas las medidas de contralor más eficaz y minucioso, como se puede ver en la parte pertinente del informe de los Asesores Letrados, que se transcribe:

«Afirmamos, Señor Presidente, que pocos de los impuestos nacionales tendrán un control tan estricto como este á las herencias y donaciones. Su aplicación, en su oportunidad, en su monto y en la realización del pago respectivo, se halla vigilada por los particulares, herederos ó donatarios, por los Procuradores del H. Consejo, por los Escribanos de Registros, por los Secretarios de Juzgados, por los Agentes Fiscales, por los Jueces y por los Camaristas en lo Civil, por el Director del Registro de la Propiedad y por el Jefe del Archivo de los Tribunales. Para que pudiera pasar desapercibida ó tolerada la más mínima infracción á este impuesto, se requeriría la concurrencia del descuido ó del espíritu delictuoso

de casi todos los funcionarios enumerados. Esto nunca ha sucedido y las pocas violaciones á la Ley 4855 descubiertas desde que comenzó á regir en 1906, fueron denunciadas en el actô de ser conocidas por los representantes del Tesoro de las Escuelas. Actualmente están á resolución de los Tribunales varios juicios entablados por el H. Consejo contra algunos Escribanos que omitieron el pago del impuesto á las donaciones escrituradas en sus protocolos.»

«En lo que respecta al control administrativo de este impuesto practicado por las Oficinas del H. Consejo, es también estricto.—Todos los sellos recibidos cada año por el Tesorero de la repartición de la casa de moneda con intervención de la Contaduría General, están anotados con su valor y su número respectivo en un libro de la Contaduría del H. Consejo.—Vendido un sello por el Tesorero es anotada su venta en Contaduría la que á su vez anota también cuando ese sello figura en las cuentas ó informes mensuales de la Oficina Judicial, de tal modo que un mismo sello, individualizado por un número y por su valor, no puede jamás repetirse ni en dos asuntos ni menos en dos cuentas ó informes de los Procuradores.»

«Es extraño que la Contaduría del H. Consejo no haya explicado á los Contadores Fiscales este mecanismo que ella conoce perfectamente y es extraño también que los mismos Contadores no hayan tratado de informarse, antes de abrir juicio, del modo y forma como se llevan los libros de anotación de este impuesto en la Oficina Judicial de la repartición.—Si lo hubieran hecho,

habrían visto la prolijidad de los asientos, el detalle de las cuentas y el control minucioso que se pone en práctica para el cobro y la percepción del impuesto y de los otros valores, multas y herencias vacantes, que van al Tesorero Escolar por medio de tramitaciones judiciales y hubieran tenido ocasión de conocer, también, que la Oficina Judicial con el propósito de corregir deficiencias de la Ley 4855 redactó las enmiendas pertinentes que han dado motivo á la nueva ley sancionada por el H. Congreso con el número 8890, y promulgada por el Señor Presidente de la Nación el día 10 de Agosto del corriente año.»

CONCLUSIÓN

H. Consejo:

La extensión que ha sido necesario dar á este estudio, por el análisis detallado de todas las observaciones hechas en el informe de los Contadores Fiscales, debe atribuirse á la circunstancia especial del trámite que se le ha dado entregándolo á la publicidad y particularmente por determinadas apreciaciones y juicios que contiene, sobre resoluciones del Consejo, que á no tomarse en consideración, subsistirían como intervención no justificada en la marcha autónoma de aquel en contradicción con las prescripciones de la Ley de Educación Común.

En los casos comunes de observaciones á las cuentas rendidas sobre percepción ó inversión de los fondos que constituyen el tesoro de las escuelas, el Consejo Nacional ha procedido siempre dentro de los preceptos legales, concretándose á

remitir los antecedentes justificativos y á dar las explicaciones pertinentes, lo mismo que hubiérase hecho en la actualidad á no suceder que muchas de las observaciones de los Contadores Fiscales deben considerarse fuera de los límites de sus funciones, sin tener en cuenta los derechos administrativos fundamentales que acuerda al Consejo su ley orgánica.

La ley de Educación prescribe la instrucción primaria obligatoria y crea los recursos especiales que deben aplicarse á ese fin, encargando la dirección facultativa, el gobierno general de las escuelas y la administración de todos los fondos que de cualquier origen fuesen consagrados al sostén y fomento de la Educación Común, al Consejo Nacional como una entidad autónoma de gobierno creada para hacer efectivo con su criterio propio el fecundo y elevado precepto legal, adaptando su acción á las diversas circunstancias favorables al éxito de su cometido, haciendo por esto mismo en muchos casos las veces de un lazo entre el hecho y el derecho, entre lo relativo y lo absoluto.

La aplicación de la ley no es, pues, para el Consejo, como lo que para el juez, mantener la integridad de un texto literal, ó exigir material obediencia á un precepto, sino emplear las energías, la inteligencia y el buen tacto en desarrollar y dar vida al pensamiento del legislador, de cuyo espíritu debe hallarse penetrado como partícipe de su obra, de conformidad á los recursos, á los elementos disponibles, al ambiente de la época y á la naturaleza de los múltiples factores que intervienen, cuya consideración demanda una flexi-

bilidad de juicio para pesar los variados pormenores que califican los diferentes asuntos que tiene que resolver dentro del principio fundamental del derecho administrativo ó sea la equidad, todo lo que requiere, para apreciar el valor verdadero de los diferentes datos ilustrativos, un conjunto de reglas tan distintas cuya aplicación demanda un criterio elevado de gobierno variable también como los hechos y sus exigencias.

Compenetrado del espíritu moderno de la ciencia jurídica el buen juez, diremos así, va y a apartándose en sus decisiones de la severidad inflexible del texto escrito de la ley, y con un concepto superior de su alta misión toma en consideración las causas determinantes de circunstancias que por la evolución del progreso han venido á establecer modificaciones en derechos que se respetaban como invulnerables, ó á crear nuevos derechos no sospechados por los codificadores, que aun no estando escritos y sancionados legalmente tienen su valor para la aplicación de la justicia.

El rigorismo escrito de la Ley N.º 1420 que impone la instrucción primaria obligatoria, supone, para el cumplimiento de esta obligación (Art. 5.º) la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de todos los niños en edad escolar, pero ese supuesto aun no ha llegado á ser cierto por falta de los recursos indispensables, y como el Consejo no tiene facultad para arbitrar y disponer de fondos fuera de los que señala la ley, para hacer cumplir aquel precepto por el mayor número posible, estimula y fomenta mediante subsidios modestos el mantenimiento de los establecimientos escolares particulares que llenan los fines

de la educación, dentro de las prescripciones de los reglamentos en vigencia.

El fin de la Educación Común, en el verdadero concepto de gobierno, es el bien público á cuya sombra se elaboran los intereses generales y primordiales de la Nación, reclamando por lo mismo una multitud de necesidades propias de la vida colectiva que estrictamente no hallan cabida en la esfera del derecho, razón por la cual su dirección demanda el conjunto de acción facultativa que la ley acuerda al Consejo, para que mediante medidas previsoras llegue á realizar la finalidad de aquella, dando al niño la orientación precisa moral é intelectual para que entre á la vida con los dones de su perfeccionamiento á cumplir como hombre y como ciudadano sus deberes sociales y políticos, lo que importa en síntesis formar el carácter nacional como uno de los fundamentos más sólidos de la prosperidad y grandeza de los pueblos.

El Consejo, empeñado en la realización de este ideal ejecuta un trabajo de ponderación y equilibrio dentro de la dilatada extensión y la índole compleja de la autoridad que tiene, pero esta autoridad sería vana é ilusoria y su acción no sería posible desarrollar si sus resoluciones sobre dirección y administración de la instrucción primaria debieran sujetarse á las apreciaciones expresadas por los Contadores Fiscales en sus observaciones, pues, sería entorpecer su acción y disminuir sus atribuciones con perjuicio de los intereses de la Educación Común.

En la complicada dirección de la Educación Común nada hay que pueda ser indiferente para

la administración, razón por la cual el Consejo dentro de las atribuciones y las facultades que le acuerda la ley, manda, prohíbe, decide, resuelve, precave, protege, ejerciendo en suma, la autoridad directa y positiva de gobierno que le concede su autonomía, con la sola restricción de ajustarse á los límites que señalan el término de la obra educacional.

A sus fines el Consejo aplica las leyes, estudia y resuelve las cuestiones de edificación, cuida de todo lo concerniente á sanidad é higiene escolar, adoptando en cada caso las providencias que las necesidades reclaman; recauda las rentas escolares y las invierte, bajo las responsabilidades legales, en la creación y mantenimiento de las escuelas y demás gastos que exigen las necesidades de la Educación Común, necesidades que por imperio de la ley deben ser apreciadas y llenadas según el criterio del Consejo; vela por la moral pública, y corrige las faltas y las infracciones que cometen los institutos particulares de enseñanza sujetos á su inspección administrativa; vigila, observa y controla los procedimientos de la administración escolar en todas las provincias, ejercitando estas atribuciones y cuanto estima conveniente dentro de sus funciones, sin dar cuenta directa y detallada al Gobierno General.

En la aplicación discreta de estas facultades tan extensas estriba el progreso educacional, porque si estuvieran restringidas á determinados límites de orden numérico que perturban la acción facultativa de difundir la educación de conformidad con los recursos propios, los que pueden acrecentar con donaciones ó con el aumento pro-

gresivo de la riqueza del país, podría suceder que llegara una situación por demás contradictoria: tener recursos para crear mayor número de escuelas que son indispensables para hacer cumplir la obligación de la instrucción primaria y á la vez no poder hacer uso de ellos en virtud de restricciones que se opongan al elevado precepto de la ley de Educación Común, ó bien quedar estacionaria la escuela por consideraciones á determinadas partidas de gastos fijos, que no permiten en oportunidad la innovación de programas, la renovación del material escolar, la adaptación de progresos reconocidos en las naciones civilizadas y de los que concede la propia experiencia.

La autoridad del Consejo por amplia que sea sería nula si no reuniese al mero imperio á su potestad de mando, cierta jurisdicción para hacer efectiva aquella, y la ley de Educación Común (Art. 61) para caracterizar de un modo más preciso la extensión de la acción directiva y facultativa del Consejo, le acuerda aquel poder en los términos que expresa la disposición citada y el artículo 39 del Superior Decreto Reglamentario que dice:

«En el desempeño de sus funciones, el Consejo y sus encargados podrán pedir el auxilio de la autoridad para llenarlas, y ésta tendrá la obligación de prestarlo en todo tiempo que le fuere competentemente requerido, ya se trate del cumplimiento de disposiciones escolares vigentes, ó de percibir multas impuestas, ó de la adquisición de datos que el Consejo hubiese solicitado para el desempeño de sus funciones.»

Ha sido menester enumerar entre otros, estos antecedentes legales, porque ellos explican y justifican la administración del Consejo dentro del libre ejercicio de estas dobles facultades, deliberación y ejecución, cuya aplicación demanda procedimientos que no es dado pretender sean los más acertados y por lo mismo sujetos á distintas observaciones sinceras, ya que la apreciación de los hechos administrativos y de las circunstancias que determinan aquellos, está sometida al juicio personal de los funcionarios.

También caben errores técnicos, cuya responsabilidad queda extensamente diluida en los Asesores que intervienen en la ejecución de una obra tan grande y compleja, por no ser posible considerar el amparo y la defensa de todos los intereses educacionales subordinados al principio de unidad administrativa; pero puede afirmarse que en ningún caso la falta de procedimientos y los errores en que se hubiera incurrido, sobre los que han llamado la atención y hecho observaciones en el informe los Contadores Fiscales, autorizan siquiera la presunción de haberse cometido actos delictuosos, lo que equivale afirmar por los mismos funcionarios el elevado concepto de honradez y moral con que el Consejo dirige y administra los múltiples y complejos intereses de la Educación Común, así como la prudencia y ecuanimidad con que ejercita las amplias facultades que le acuerda su ley orgánica.

Este estudio, extenso, sin duda, de los principios fundamentales que justifican las decisiones del Consejo en cuanto se refiere á la Dirección facultativa y administrativa de la Educación Co-

mún, está hecho sin reticencias, que no tienen cabida cuando de derechos ó intereses tan sagrados se trata y los funcionarios públicos están prestigiados por la honradez y sinceridad que revelan sus procedimientos, aun en los casos que estrictamente no se hubieren ajustado á sus atribuciones.—Aportan todos los elementos y las explicaciones pertinentes á la generalidad de las observaciones formuladas por los Contadores Fiscales cuya consideración deberá determinar el juicio sano y definitivo de la Contaduría Nacional cuando haya terminado el examen de las cuentas del Consejo, dentro de los límites de sus funciones y las facultades que la Ley N.º 1420 acuerda á éste, para su marcha autónoma.

En cuanto al juicio sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas por el Consejo, dentro de sus atribuciones y deberes, está regido por la jurisprudencia que tiene el derecho administrativo fundada en preceptos bien observados y definidos, de cuyo examen se derivan reglas de interpretación que el Poder Ejecutivo por sí solo ó previa consulta á los asesores natos consagra en decisiones elevadas, ajustadas en todo á la rectitud de criterio que demandan los intereses públicos; como tal debe considerarse la adoptada por el Superior Decreto de Mayo 30 del corriente año, cuando denunciados por un Vocal del Consejo como nulos y arbitrarios los mismos actos ó análogos á los observados hoy por los Contadores Fiscales, consideró que no había llegado el caso de que el Poder Ejecutivo, encargado de velar por la observancia de las Leyes de la Nación, intervenga en la marcha autónoma del Con-

sejo Nacional de Educación para anular decisiones tomadas dentro de sus atribuciones privativas en la dirección y administración de la enseñanza.

Queda así terminado el estudio que se me confiara, sobre el análisis y explicaciones correspondientes á las observaciones que han expuesto en su informe los Contadores Fiscales, relativas á resoluciones del H. Consejo y también la exposición de los principios fundamentales del derecho que hacen resaltar la legalidad de que están revestidos aquellos actos, todo lo que sometido al elevado criterio de los altos funcionarios que por la Ley están encargados de fallar en definitiva constituye un aporte importante de fundamentos que justificarán plenamente, dada la autonomía del Consejo, los procedimientos administrativos que han originado la intervención de la Contaduría Nacional.

Tal es la opinión del Vocal que suscribe.

DELFIN JIJENA.

Comisionado de Hacienda.

Hay un sello que dice:

«Aprobado en sesión 21 Noviembre de 1912»

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Resolución del Consejo

Exp. 3, 172—C.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1912.

Desestimar por infundados los cargos formulados por el Vocal Dr. Don Joaquín M. Cullen, aprobándose la conducta observada por el Señor

Presidente Dr. Don José María Ramos Mejía en todos los casos comprendidos en aquellos así como la del Secretario General Don Segundo M. Linares; mandándose publicar todos los antecedentes de este asunto.

Cumplido, anótese y Archívese.

RAMOS MEJÍA.

Segundo M. Linares.

Informe del Consejo Nacional de Educación presentado al Señor
Ministro de Instrucción Pública

Buenos Aires, Abril 12 de 1912.

Excelentísimo Señor Ministro de Justicia é Instrucción Pública, Doctor Don Juan M. Garro.

En cumplimiento del decreto de V. E. de fecha 1.º del corriente, por el cual se sirve pasar en vista la nota presentada ante ese Ministerio por el Señor Vocal, Doctor Don Joaquín M. Cullen, este Consejo debe manifestar á V. E. lo siguiente:

Con fecha 16 de Marzo ppdo., el citado Señor Vocal, en nota cuya copia corre agregada á fojas 1 y 2 de este expediente, se presentó ante el Consejo Nacional de Educación, proponiendo un proyecto de resolución por el cual se desaprobaba el procedimiento del Presidente y del Secretario del mismo, «sobre nombramiento del personal docente, declaraciones del mismo en disponibilidad y otorgamiento de becas.»

El H. Consejo, oídas las razones expuestas por el Señor Vocal y que obran en la nota de

referencia, resolvió pasar la misma á informe del Señor Presidente del Consejo, quien en el mensaje de fecha 21 de Marzo ppdo., que también corre agregado en copia á fojas 3, justificó su proceder aduciendo extensamente las razones á que habían obedecido sus actos, demostrando plenamente que no había tales nombramientos ni declaraciones en disponibilidad y que no se había otorgado absolutamente ninguna beca.

Reunido nuevamente el Consejo Nacional en sesión del 21 de Marzo último, resolvió considerar el asunto motivado por el Señor Vocal Cullen, y previa exposición fundada de cada uno de sus miembros, adoptó á moción del Señor Vocal de Vedia, la siguiente resolución:

«Desestimar por infundados los cargos formulados por el Vocal, Doctor Don Joaquín M. Cullen, aprobándose la conducta observada por el Señor Presidente, Doctor José María Ramos Mejía, en todos los casos comprendidos en aquellos, así como la del Señor Secretario, Don Segundo M. Linares; mandando publicar todos los antecedentes del asunto.»

Tal es en síntesis el origen de la incidencia promovida por el Señor Vocal Doctor Cullen, de cuya solución legal el mismo ha apelado ante V. E., ampliándola en nuevos cargos y apreciaciones.

La cuestión sometida por el Señor Vocal Cullen á la resolución del H. Consejo, por el proyecto que presentara en sesión de 16 de Marzo ppdo., que en copia legalizada obra á fojas 1, se encuentra expresamente prevista y resuelta por la ley de Educación Común N.º 1420, de 8 de Julio de 1884, en su artículo 65, inciso 3º, en el que

fijando las atribuciones y deberes del Presidente del Consejo Nacional de Educación, dice textualmente: «Dirige inmediatamente por sí solo las oficinas de su dependencia, provee á sus necesidades y atiende en casos urgentes, no estando reunido el Consejo, todo lo relativo al gobierno y administración general de escuelas, con cargo de darle cuenta.

EN CASO DE DISCONFORMIDAD EL CONSEJO NO PODRÁ DESAPROBAR LOS ACTOS DE SU PRESIDENTE, SINO CON EL VOTO DE DOS TERCIOS DE LOS CONSEJEROS.

El H. Consejo, al adoptar en sesión del 21 de Marzo próximo pasado, su resolución aprobando la conducta de su Presidente, previa consideración del informe de éste, en que justifica plenamente cada uno y todos sus actos denunciados como irregulares por el Vocal recurrente, y después de oír además el voto fundado de cada uno de sus miembros, no ha hecho sino aplicar estrictamente la disposición legal antes transcrita, en ejercicio de sus facultades propias que le confiere la ley, para aprobar ó desaprobado los actos de su Presidente.

Su resolución de 21 de Marzo ppdo., es, pues perfectamente legal y válida por consiguiente, y el Señor Vocal Doctor Cullen está obligado á acatarla—so pena de incurrir en las responsabilidades emergentes de su levantamiento en contra de ella con arreglo á lo establecido por la ley y á los principios y reglas universalmente reconocidas, que rigen los cuerpos colegiados—y en corrobora-

ción, el H. Consejo se ha de permitir citar á V. E. en caso recientemente producido en el seno de la junta escrutadora del distrito electoral de la Capital, compuesta de jueces y camaristas, que funciona actualmente en cumplimiento de la Ley N.º 8871, incidencia que es de pública notoriedad por cuanto «La Prensa» del día 9 de corriente, ha dado cuenta de él publicando íntegra el acta respectiva labrada con tal motivo.

Reunida la junta escrutadora, adoptó determinado procedimiento para practicar el escrutinio, y no siendo éste de la conformidad de uno de los Vocales, el Camarista Doctor Jorge de la Torre, éste «expresó que si bien no estaba de acuerdo con el procedimiento adoptado por la junta para proceder al escrutinio, por reputarlo violatorio de la disposición del artículo 62 de la Ley 8871 se sometía, sin embargo, él, por entender que como miembro de un tribunal colegiado, estaba obligado á someterse á sus resoluciones, salvando su voto en contra.»

Análogo procedimiento estaba obligado á seguir el Vocal Doctor Cullen con respecto á las resoluciones de este Consejo, tanto más cuanto la ley prevé expresamente el caso. (Art. 65, inciso 3.º).

El H. Consejo, Excelentísimo Señor, se permite llamar muy especialmente la atención de V. E. acerca de esta cuestión de transcendental importancia para la corporación, desde luego que su solo planteamiento importa nada menos que poner en tela de juicio sus atribuciones legales más preciosas, como que son las que constituyen su autonomía, que hasta ahora ha sido invaria-

blemente reconocida y respetada, como lo comprueban los casos que se pasan á citar:

En 10 de Octubre de 1905—el H. Consejo, ejerciendo sus atribuciones propias que le da la Ley—exoneró al profesor Don Rafael T. Banchs, del puesto de director de la escuela «Presidente Roca.» El exonerado recurrió ante el Ministro de Instrucción Pública y el Poder Ejecutivo dictó sobre el particular el decreto de 1.º de Junio de 1906, que obra en el número 3776, año XIV del «Boletín Oficial», rechazando la apelación por haber sido tomada la resolución apelada, por el Consejo, dentro de sus propias facultades legales.

En otro caso, el Consejo General de Educación de la provincia de Tucumán, se presentó ante esta corporación solicitando la exoneración de derechos de examen para los alumnos de la escuela «Sarmiento», que deseaban ingresar á la escuela normal de maestros de esa ciudad; derecho de examen fijado con fecha 20 de Marzo de 1911, sobre «clasificaciones, calificaciones y promociones» de los alumnos de las escuelas normales; y en la duda de si entraba ó no en sus atribuciones la resolución del asunto, se elevó la petición á la resolución superior del Poder Ejecutivo Nacional, dictando éste la siguiente resolución:

Expediente 6312., C.

Buenos Aires, 1.º de 1911.

Vista la nota en que el Consejo General de Educación de la provincia solicita la exoneración de derechos de examen para las alumnas de la escuela Sarmiento que deseen ingresar á la escuela

la normal de maestras de aquella ciudad, en virtud de que el artículo 27 de la reglamentación dictada por el Consejo Nacional de Educación, sobre clasificaciones y promociones de alumnos incorporados establece que «en ningún caso se tomarán las pruebas sin el pago previo de los derechos correspondientes», y considerando que el decreto de 21 de Diciembre de 1910, por el cual pasaron á depender del Consejo Nacional de Educación las escuelas normales, prescribe en su artículo 2.º que «dicha corporación tendrá sobre estos institutos las mismas atribuciones técnicas y administrativas que sobre las escuelas primarias le confieren las leyes y decretos vigentes.»

Vuelva este expediente al Consejo Nacional de Educación, para que adopte la resolución que estime corresponde.

GARRO.

Pero es que hay más, Excelentísimo Señor. El propio Vocal recurrente, doctor Cullen, ha reconocido categóricamente la inapelabilidad de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educación, dentro de sus atribuciones legales.

En efecto, el Señor Alfredo Saavedra, vecino de la ciudad de Jujuy, con motivo de la separación de una hija suya en la escuela normal de maestras de esa ciudad, se presentó al H. Consejo por el expediente N.º 6378 D, (1911), pidiendo apelación ante V. E., de la resolución de esta corporación por la cual se separó de la escuela á su hija; el H. Consejo en sesión celebrada el día 1.º

de Febrero ppdo., con el voto unánime de todos sus miembros, entre los cuales se encontraba presente el Señor Vocal doctor Cullen, según puede comprobarse en el acta respectiva, resolvió:

Exp. 6.378, D, (1911)—1.º No correspondiendo la apelación solicitada, no ha lugar.

2.º»

3.º Archívese.

No procediendo, pues, como no procede el recurso de apelación deducido por el Señor Vocal doctor Cullen, mucho menos procede á juicio de este Consejo, y como no escapará al ilustrado criterio de V. E. la «ampliación» que el mismo Vocal pretende hacer ante el P. E.

El procedimiento seguido también en este caso por el recurrente, se aparta absolutamente de las más elementales prácticas administrativas, legales y hasta judiciales, consagradas y observadas universalmente, y con arreglo á las cuales el recurrente ha debido someter previamente su «ampliación» á este Consejo de que forma parte.

Creo innecesario, Excelentísimo Señor, abundar en mayores detalles, porque de lo expuesto queda demostrada completamente la legalidad de la resolución del Consejo, la improcedencia del reclamo interpuesto ante V. E. por el Vocal doctor Cullen y el desacato del mismo á las disposiciones terminantes de la ley.

Pasa ahora este Consejo á ocuparse de las afirmaciones que ha hecho el recurrente en la nota presentada á V. E., y siguiendo el orden en que han sido formuladas.

Dice el Señor Vocal que la acción del Consejo como cuerpo director de la enseñanza y ad-

ministrador de los intereses escolares se encuentra coartada, porque muchas atribuciones suyas han sido absorbidas y ejercitadas por la presidencia, y que en análoga situación se encuentran los Consejos escolares.

La simple lectura del cargo, en que se afirma demasiado sin concretar absolutamente nada, explica la imposibilidad en que se encuentra el Consejo de tomarlo en consideración. Sin embargo, es muy fácil comprobar la acción inmediata y directiva del Consejo Nacional de Educación en todas las órdenes de la enseñanza y de la administración de las rentas escolares, bastando para ello recorrer los tomos publicados y profusamente difundidos de las notas en las cuales obran sus resoluciones.

Por ellas se verá que la acción del Consejo, no sólo no ha sido coartada sino que ha sido fecunda en iniciativas y soluciones de todo orden.

Lo mismo sucede respecto á los Consejos escolares cuyos miembros, cuando han querido consagrarse con empeño á la educación popular de niños y adultos, han encontrado en el Consejo Nacional el más eficaz y decidido apoyo, ampliándose su esfera de acción y la libertad de ejercerla á medida que su plausible empeño ponía de manifiesto nuevas necesidades, propicias iniciativas tendientes á la educación cívica de la infancia, ó bien á su perfeccionamiento moral, intelectual y físico, como lo determina la ley de Educación Común.

Podría citar Consejos escolares modelos por su corrección de procederes, como lo son en su mayor parte, á los cuales jamás el Consejo Nacio-

nal de Educación ha negado el más decidido apoyo para su mejor desenvolvimiento en la misión elevada y de confianza que les confiere la ley. Podría también citarse otros cuyas iniciativas de trascendencia se han llevado á la práctica con toda felicidad y libertad dentro de sus respectivas jurisdicciones. Y más aun, debe agregarse que el Consejo Nacional ha perseguido por los medios á su alcance, que todos los Consejos escolares le prestasen la cooperación que la ley asigna y tengo la satisfacción de consignarlo que en general su colaboración ha sido eficiente.

Las únicas restricciones que existen, son las que determinan las leyes y reglamentos, dentro de cuyas disposiciones debe encaminarse la acción de los Consejos escolares, y puede asegurarse que las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional para tal fin, han sido y son siempre legales é inspiradas en propósitos elevados y jamás en móviles pequeños de absorción de atribuciones, que ni el Consejo Nacional ni su Presidente necesitan para desenvolverse libremente dentro del amplio espíritu que informa la Ley de 1884.

Agrega el Señor Vocal que «la distribución de los dineros que las leyes destinan á la enseñanza, adolece de muy graves irregularidades» y que el presidente «hace gastos inútiles, superfluos y hasta de favoritismo.»

Esta aseveración es absolutamente inexacta, y aquí el Consejo Nacional de Educación se permite llamar muy especialmente la atención del Señor Ministro, sobre la completa vaguedad de que adolecen todas las afirmaciones que el recurrente hace en su nota.

Un espíritu sincero y seguro de la honradez de sus intenciones, hubiera traído á esta desagradable incidencia toda la claridad y precisión necesarias para deslindar y determinar perfectamente las responsabilidades respectivas.

No obstante este inconveniente insalvable que impide al Consejo ser todo lo preciso y concreto que quisiera, tratará de ajustar esta exposición á la del Señor Vocal.

Pero antes de proseguir, el Consejo cree de su deber manifestar que por la «ley de contabilidad y organización de la Contaduría General de la Nación, es á esta repartición, como tribunal de cuentas, á la cual está encomendada la exclusiva vigilancia de fondos pertenecientes á la Nación».

En efecto, el artículo 52 de la ley citada, dice: «La Contaduría General, además de los deberes y atribuciones anteriormente expresados, tiene á su cargo administrativamente, el examen, liquidación y juicio de las cuentas de la administración, recaudación y distribución ó inversión de los caudales, rentas, especies ú otras pertenencias, de cualquier clase que sean de la Nación».

Y el artículo 53 de la misma, dispone: «A los efectos del artículo anterior, requerirá de quien corresponda la presentación de las cuentas en la forma y época que la ley y reglamentos prescriben, y podrá pedir todos los datos, informes ó documentos que juzgue necesarios.» Los artículos siguientes de la citada ley, establecen con toda precisión el procedimiento á seguir de modo de asegurar la fiel inversión de los

fondos de la Nación, dándole, al efecto, amplias facultades á la Contaduría General.

Y bien, Excelentísimo Señor, esta misión que la ley confía á la Contaduría General es cumplida estrictamente por ella, concurriendo periódicamente á la contaduría del Consejo un contador fiscal que examina esmeradamente el estado de sus cuentas.

Las notas pasadas por la misma, á que se refiere el Señor Vocal, son una prueba más del control que ejerce sobre los fondos de esta repartición, y le es altamente satisfactorio al Consejo manifestar que ellas no encierran un sólo cargo, limitándose á consignar simples omisiones de la Contaduría del Consejo, meras observaciones de detalle en la remisión de comprobantes, ó bien haciendo objeciones de formas en las rendiciones parciales de cuentas de Consejos escolares, Inspectores, maestros ó empleados que han desempeñado diversas comisiones en servicio del Consejo.

Y es lógico que estos hechos sucedan cuando se trata de rendiciones de cuentas cuyos comprobantes, en general por pequeñas cantidades, suman miles y miles de recibos, otorgados no siempre por el personal competente y al tanto de las exigencias de la contabilidad.

Hará este Consejo un breve extracto para que V. E. pueda apreciar mejor las razones expuestas.

Las rendiciones de cuentas presentadas á la Contaduría General de la Nación y sobre las cuales hay observaciones de la naturaleza de las apuntadas anteriormente, son las correspondientes á los últimos años incluso la de 1910.

De la cuenta que falta rendir al 31 de Diciembre de 1911, correspondiente á ese año y saldo que pasó en el anterior se tiene preparado por la Contaduría del Consejo el primer semestre del año y saldo expresado, no obstante el plazo que tiene acordado por el acuerdo de ministros de 22 de Abril de 1902 para elevar sus rendiciones de cuentas un año después del fijado para las demás reparticiones.

En cuanto á las observaciones hechas por la Contaduría General de la Nación, á la rendición de cuentas por concepto de «Fondos propios», y Ley 4874, se refieren á defectos de forma, bien explicables por ser la primera vez que se rendía cuentas de «Fondos propios» en cumplimiento del superior decreto de 30 de Enero de 1907 y de acuerdo con formas á la sazón implantadas. Estas observaciones han sido explicadas satisfactoriamente, estando el expediente listo para ser remitido á la citada repartición.

En la del año 1910 todavía la Contaduría General de la Nación no ha formulado sus reparos, y como es práctica, un representante de ella está estudiando las cuentas, y tiene á la vista todos los antecedentes que necesita para el mejor desempeño de su cometido.

Pero para que se aprecie el concepto de que la repartición goza al respecto, se transcribe aquí un párrafo de la parte pertinente del informe de la Contaduría General de la Nación recaído en la cuenta registrada bajo el número 5.265 del año 1910, rendida por el Consejo Nacional de Educación. En efecto, al referirse á la inversión de las sumas destinadas al fomento de la instrucción

primaria que alcanzan á varios millones, dice: «He tenido ocasión de comprobar que el Consejo Nacional de Educación tiene perfectamente reglamentada la distribución de estos fondos.»

Debe también dejarse constancia de que algunas de las observaciones formuladas por la Contaduría General son por rendiciones de cuentas de sumas invertidas con anterioridad á la fecha en que el actual Presidente se hizo cargo de la presidencia; y cumple declarar que ellas como las posteriores, carecen de importancia, pues toda la inversión de los dineros del Consejo ha sido plenamente justificada y dentro de los términos de la ley.

Y para que V. E. pueda apreciar la organización actual de la Contaduría del Consejo, debo manifestarle que ella fué hecha por una comisión nombrada por el Consejo Nacional, de la que formaba parte el Contador Fiscal de la Contaduría General de la Nación, Don Carlos O'Donnell.

Y corresponde asimismo dejar establecido que esta ha sido una de las precauciones primordiales del Consejo actual, como lo demuestra la creación de la oficina de control, gracias á la cual se comprueba la existencia, estado de conservación, distribución y consumo de todos los muebles, útiles, etc., de las oficinas y de las escuelas, cuyo valor asciende á millones de pesos, hasta el extremo de que el artículo más insignificante tiene su cuenta.

Y puede agregarse que con idénticos propósitos se creó la Inspección General de Contabilidad, cuya función es controlar á su vez á la Contaduría y á la expresada oficina de control.

De manera, Señor Ministro, que la administración de los fondos del Consejo está perfectamente garantida y controlada tanto por sus oficinas como por la Contaduría General de la Nación.

Sólo la ofuscación del Señor Vocal, en el propósito de formular cargos, puede haberle dictado apreciaciones de tal naturaleza sin haberse tomado tiempo de comprobar su profundo error y la absoluta inexactitud de las mismas.

En cuanto á los gastos de favoritismo, es de lamentar también que, á existir, no los hubiera mencionado, uno por uno, porque esta vaguedad de desconcepto es permitida en un artículo anónimo ó de cualquier otra especie semejante, pero no en un documento oficial, que debe ser preciso y terminante, y debe estar desprendido de toda pasión personal, respirando honradez y rectitud.

Mucho ha insistido el Señor Vocal sobre este punto, rodeándole de una importancia que no tiene bajo ningún concepto.

No se repetirán aquí las razones dadas por el Presidente en su mensaje al Consejo sobre el estado de disponibilidad en que se encuentran algunos maestros, pero sí debe precisarse su alcance porque del exacto conocimiento de los hechos se verá la falta de consistencia del cargo.

En primer término, «no hay ningún empleado administrativo en disponibilidad.» Los únicos que se encuentran en tales condiciones, reconocidos por el P. E. en varios decretos de jubilaciones, son maestros. Y para que V. E. pueda apreciar el insignificante número de los mismos, se agrega que asciende á sólo «treinta y cuatro» so-

bre un total de «diez mil doscientos cuarenta y seis directores y maestros» que dependen del Consejo Nacional.

Respecto á los empleados supernumerarios á que hace referencia el Señor Vocal, no hay, en realidad, dentro de la repartición ninguno que se encuentre en tales condiciones; porque de acuerdo con la facultad que se desprende de la ley de presupuesto general, según la cual los gastos figuran al solo objeto de fijar el sueldo de los empleados de esta repartición, el Consejo puede, dentro de la categoría y sueldo sancionados por el Honorable Congreso, nombrar los empleados que creyera conveniente para satisfacer las necesidades del mejor servicio. En efecto, la ley de presupuesto general en su inciso 12—refiriéndose á la instrucción primaria—dice textualmente:

«Cuyos gastos costeados con los recursos asignados por la Ley número 1420 de 8 de Julio de 1884, que serán entregados por los recaudadores bajo su responsabilidad, en los términos de la expresada ley,» figuran en el presupuesto al solo objeto de fijar el sueldo de sus empleados» y los gastos de su mantenimiento.

El número de empleados que actualmente existe es más ó menos el mismo que había cuando se inició la actual presidencia y que el Consejo ha juzgado más que necesario, imprescindible, mantener para atender á las exigencias del servicio.

La actual planilla de sueldos del personal administrativo es casi idéntica á la de hace cuatro años, no obstante haberse creado múltiples funciones, verdaderas instituciones como las Escuelas

de Niños Débiles, el museo escolar, oficinas como las de contralor, inspección general de contabilidad, ilustraciones y decorado escolar, y haberse incorporado las escuelas normales cuya atención ha exigido la creación de un servicio especial en cada oficina del Consejo. Estas razones y otras que se omiten en obsequio á la brevedad, son las que justifican el mantenimiento de los actuales empleados y de los dobles turnos, no sobresueldos, que ha sido necesario implantar de 8 a. m. y de 12 á 5.20 p. m., para aprovechar económicamente los servicios de empleados buenos y prácticos, pues de otro modo se habría duplicado el personal administrativo con mucho mayor gasto y sin resultado positivo. No debe olvidarse que no obstante ser el número de empleados aproximadamente el mismo de hace cuatro años, la labor del Consejo ha aumentado de una manera asombrosa, pudiendo dar ligera idea de ella el hecho de que en Enero de 1908 las escuelas primarias que funcionaban bajo su dependencia era solo «mil doscientas cincuenta y seis (1.256)» y en Enero del corriente año son «dos mil setecientas cincuenta y tres (2.753);» es decir, que en estos cuatro últimos años se han fundado «mil cuatrocientas noventa y siete (1.497)» escuelas cuya atención, como se comprenderá, ha aumentado enormemente la labor administrativa.

Por otra parte el Consejo Nacional ha incluído detalladamente en los presupuestos sucesivos, todos los años, este personal, aunque sin resultados. En el presupuesto del corriente año serán incluídos nuevamente y el Consejo Nacional espera desde ya que el Poder Ejecutivo y el Hono-

El Honorable Congreso le prestarán su conformidad, facilitando así definitivamente su situación.

El sostenimiento de «*El Monitor de la Educación Común*» á que alude el Señor Vocal, está ordenado por el artículo 57, inciso 19, de la Ley número 1420, que fija entre los deberes del Consejo Nacional, «dirigir una publicación mensual de educación.» La impresión de «*El Monitor*» se adjudica por el Consejo, en licitación pública, estrictamente ajustada á la ley de contabilidad y se costea con recursos del Consejo y con fondos provenientes de la misma revista, por avisos, etc., en lo que se refiere á la colaboración pedagógica y científica de notabilidades argentinas y europeas.

De manera, pues, que la publicación de «*El Monitor*», en estas condiciones poco ó nada cuesta á las rentas del estado, beneficiando en cambio á todo el magisterio nacional al que se le reparte gratuitamente.

En cuanto á las observaciones que hace el Señor Vocal al presupuesto del Consejo, no es éste á quien corresponde aclararlas. El presupuesto es remitido al Honorable Congreso por intermedio del Poder Ejecutivo de la Nación, con arreglo á las disposiciones de la ley de Educación Común; el Consejo Nacional de Educación no hace otra cosa que ajustarse á la ley sancionada.

Pero sí debe manifestar este Consejo que una de las disposiciones más sabias del presupuesto es la que le facilita la creación de las escuelas y el nombramiento sin limitación de maestros, obrando naturalmente, siempre, dentro de sus propios recursos. El día que tales disposi-

ciones se restrinjan en la forma que propone el Señor Vocal, puede considerarse muerto al progreso de la instrucción primaria en la Nación.

No obstante lo manifestado el Consejo considera especialmente necesario dar las explicaciones relacionadas con las partidas de pesos 2.160.000 y de pesos 1.836.224,38 que sirvieron al Señor Vocal para hacer más impresionante los infundados cargos.

Así respecto á la primera de esas sumas basta transcribir la leyenda con que el presupuesto de 1911 la ha sancionado. Dice «Fomento de la instrucción primaria en las provincias», «con arreglo á la Ley de 4 de Octubre de 1910.»

De conformidad con tal mandato imperativo el Consejo la ha distribuído á las catorce provincias acogidas á la ley de subvenciones. Su distribución no ha podido ser caprichosa entonces, puesto que existe para ello más que una resolución del Consejo, una ley donde se halla reglamentada la inversión de esos subsidios.

La violación de la ley de presupuesto que cita el Señor Vocal en la partida de \$ 1.836.224,28 ⁷/₁₀₀, se debe á la creación de mil escuelas nacionales en las provincias, acto con que el Consejo Nacional de Educación adhería á la solemnización del Centenario y que constituye un hecho único en nuestra historia del que quizás ningún país del mundo puede vanagloriarse. Por otra parte al crear el Consejo las mil escuelas procedió firmemente convencido de que llenaba á la vez una apremiante necesidad nacional, como lo han comprobado ampliamente los hechos posteriores, pues gracias á esta acción consciente y de-

cidida, hoy concurren ciento y tantos mil niños más á las escuelas primarias. El poder ejecutivo aprobó la obra realizada y envió el correspondiente mensaje al Honorable Congreso, siendo á su vez aprobada la conducta del Consejo por casi unanimidad de votos según consta en los diarios de sesiones y con el aplauso de todo el país. De manera que no es oportuno, á juicio del Consejo, reproducir las razones que motivaron un asunto ampliamente discutido y sancionado.

Como el Señor Vocal manifiesta en el curso de su exposición que no ha tenido acceso á las oficinas del Consejo, éste debe á su vez manifestar que tal afirmación es inexacta, según testimonio del propio Presidente. Lo que ha sucedido es que el Señor Vocal ha pretendido intervenir directamente en las oficinas desconociendo la autoridad que la ley acuerda al Presidente del Consejo (artículo 65, inciso 3.º de la Ley número 1420), como ha intentado prescindir de éste dirigiéndose siempre al secretario y hasta exigiendo que obrara en contraposición á órdenes impartidas por la Presidencia. El artículo 65, inciso 3.º de la Ley número 1420, es terminante cuando establece que el presidente del Consejo Nacional de Educación «dirige inmediatamente por sí solo las oficinas de su dependencia». Y es en defensa de esta exigencia de la ley y con el propósito de evitar la anarquía en oficinas de la repartición que fatalmente hubiera sobrevenido, que el Señor Vocal ha encontrado dificultades cuando no ha venido por el órgano que la ley señala».

No procede, pues, á juicio de este Consejo y

salvo el más ilustrado criterio de V. E., ni la pretendida nulidad, ni la apelación, de la resolución del 21 de Marzo próximo pasado, que intenta deducir el recurrente, ni mucho menos la «ampliación» con que se presenta ante V. E., no obstante lo cual este Consejo la ha estudiado y dilucidado circunstanciada y cumpliendo en la presente nota, satisfaciendo así notorios propósitos del Poder Ejecutivo.

No terminaré sin manifestar á V. E., los inconvenientes que suscita esta actitud perturbadora del Señor Vocal, pues distrae completamente la atención del Consejo en esta época de iniciación escolar, en que debe estar más que nunca exclusivamente consagrada á la escuela.

Saludo á V. E. con mi mayor consideración.

J. M. RAMOS MEJÍA.

Segundo M. Linares.

Decreto del Poder Ejecutivo sobre la nota presentada por el Vocal Dr. Cullen

Buenos Aires, Mayo 28 de 1912.

Al Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, Doctor José María Ramos Mejía.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente llevando á su conocimiento, en copia debidamente legalizada, el Decreto dictado en esta fecha con motivo de la nota presentada á este Ministerio por el Vocal de esa Corporación, Señor Doctor Joaquín M. Cullen, en que solicita la in-

intervención del P. E. en actos producidos por el Consejo.

Saludo al Señor Presidente con distinguida consideración.

Carlos Grousac.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1912.

«Vista la nota del Vocal del Consejo Nacional de Educación, Dr. Joaquín M. Cullen, en la que pide que el P. E., previo informe del Señor Procurador General de la Nación acerca de la procedencia de su gestión, declare nula la resolución de dicho Consejo de 21 de Marzo próximo pasado, se avoque el conocimiento de todas las ilegalidades que denuncia, ordene su esclarecimiento con intervención de la Contaduría General respecto de los cargos sobre inversiones indebidas de fondos, y dicte resolución condenatoria de ellos, y

Considerando:

«Que los actos del Presidente del Consejo y de éste mismo que se denuncian como arbitrarios y cuya nulidad se solicita, no importan, á juicio del P. E., un alzamiento de ellos contra las leyes y decretos que establecen y delimitan sus atribuciones, aunque puedan no ajustarse estrictamente á las que á uno y otro les incumben. Que, por lo tanto, no es llegado el caso de que el P. E., encargado de velar por la observancia de dichas leyes y decretos como de las de todas de la Nación, intervenga en la marcha autónoma del Consejo para anular sus decisiones. Que, sosteniéndose por el Vocal recurrente que los actos que motivan su queja,

» nombramiento de personal directivo y docente de las escuelas, estado de disponibilidad de sus miembros y concesión de becas, son del resorte del Consejo, y el Presidente los ha ejercido usurpando sus facultades, la aprobación de ellos por el primero en la sesión de la fecha expresada los ha revestido de la legalidad de que hasta entonces pudieron carecer. Que tal aprobación no le está vedada al Consejo, por ley ni por decreto, y que ella importa afirmar y sostener sus atribuciones privativas en la dirección y administración de la enseñanza que le está confiada, porque de haber sido otro su propósito en vez de aprobar la conducta del Presidente, como lo hizo, hubiera declarado que éste procedió dentro de sus facultades y aquélla no necesitaba su aprobación. Que las irregularidades en la inversión de fondos en que puedan haber incurrido tanto el Presidente como el Consejo mismo, tienen en la Contaduría General el juez á quien por la ley corresponde esclarecerlas y decidir á su respecto, y que, en consecuencia, el P. E. debe dejarle libre acción y esperar su pronunciamiento. Que haciendo uso de las facultades que la ley le acuerda, la expresada repartición examina en estos momentos las cuentas del Consejo Nacional de Educación y habrá de dictar en oportunidad las decisiones que considere pertinentes. Por lo expuesto, el P. E. resuelve: que no ha llegado, el caso de intervenir en el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación para traerlo al cumplimiento de sus deberes y reprimir transgresiones á las leyes y decretos que norman sus

» actos. Hágase saber y resérvese hasta que la
» Contaduría haya terminado el examen de las
» cuentas del Consejo, para adoptar las providen-
» cias á que hubiera lugar.»

SAENZ PEÑA.
JUAN M. GARRO.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1912,

*Excmo. Señor Ministro de Justicia é Instrucción
Pública de la Nación, Doctor Juan M. Garro.*

Tengo el honor de dirigirme á V. E. acusando recibo del oficio fecha 28 del corriente mes al que se acompañó en copia debidamente legalizada el decreto dictado en igual fecha con motivo de la nota por la cual pidiera intervención del Poder Ejecutivo en actos producidos por este Consejo, el Vocal del mismo, Señor Doctor Joaquín M. Cullen.

Aprovecho la oportunidad para reiterar á V. E. las seguridades de mi consideración distinguida.

J. M. RAMOS MEJÍA.
Segundo M. Linares.

V

Resolución del Honorable Consejo de 21 de Noviembre

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1912.

Vistos y considerados los informes presentados por el Señor Presidente Dr. Don José María Ramos Mejía y por la Comisión de Hacienda con motivo de la nota N.º 926 de la Contaduría General de la Nación, fecha 30 de Septiembre ppdo.,
El H. Consejo,

RESUELVE:

Remitir dichos informes á la Contaduría General de la Nación, como explicaciones y datos ilustrativos á las observaciones hechas por los Señores Contadores Fiscales en su informe respectivo; quedando autorizada la presidencia para darlos á la publicidad en folleto, oportunamente.

Cumplido, resérvese.

J. M. RAMOS MEJÍA.
Segundo M. Linares.

VI

Resolución sobre presupuesto interno del Consejo

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1911.

A fin de que tanto en el proyecto de *Presupuesto General de Gastos que demande la Educación Común y cálculo de los recursos propios con que cuenta para hacer frente á aquellos* que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 57, Inciso 7º de la Ley N.º 1420, deberá el Consejo Nacional de Educación «formular en Enero de cada año y elevar al H. Congreso por intermedio del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública» — como así también en el «PRESUPUESTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN», sean consultadas en la mejor forma posible y en armonía con los recursos de que se disponga, las necesidades de la *Instrucción Primaria* en la República, para ser sometidas oportunamente al H. Consejo,

El Presidente del Consejo Nacional de Educación,

DECRETA:

Artículo 1.º Una Comisión, que se denominará de «*Presupuesto*», y constituida por los Señores: Secretario General, Secretario de Escuelas Normales, Inspector General de Contabilidad, Contador, Tesorero, Jefe de la Oficina de Suministros, Inspector Técnico General de la Capital, ídem, ídem de Provincias, ídem, ídem de Territorios

Nacionales, Abogado Asesor Jefe, y Director General de Arquitectura, anualmente, y con la debida anticipación, á fin de que el H. Consejo pueda, en tiempo, dar cumplimiento á la prescripción legal antes citada, procederá á estudiar y á determinar las necesidades de la Instrucción Primaria y á calcular los gastos que la satisfacción de la misma demande y los recursos con que pueda contarse para hacer frente á aquellos; todo con sujeción á las leyes y reglamentos vigentes; formulando el proyecto del caso que elevará oportunamente á la Presidencia.

Art. 2.º En el desempeño de su cometido dicha Comisión deberá, además, sujetarse á las siguientes prescripciones:

a). El Presupuesto, determinará la clase é importe de los gastos que podrá hacerse durante el año de su ejercicio; y las clases y cantidades de rentas efectivas con que según se calcula, se podrá contar para pagar íntegra y puntualmente esos gastos; no debiendo incluirse en él disposiciones que no consistan, precisamente, en fijar gastos ó recursos.

b). Se dividirá en cinco incisos, que contendrán:

El primero—el Presupuesto de los gastos administrativos del Consejo N. de Educación y los recursos correspondientes á los mismos.

El segundo—el Presupuesto de los gastos y recursos de la instrucción primaria en la Capital Federal y en los Territorios y Colonias Nacionales.

El tercero—el Presupuesto de los gastos y recursos de la instrucción primaria en las provincias (Ley 4874).

El cuarto—el Presupuesto de los gastos y recursos de la instrucción primaria en las provincias (Ley de Subvenciones Nacionales).

Y el quinto—el Presupuesto de los gastos y recursos de las escuelas normales dependientes del Consejo Nacional de Educación.

c). Cada inciso se dividirá en dos secciones, en la primera de las cuales se indicará las clases y las cantidades de los recursos calculados; y en la segunda, se determinará todos los gastos.

d). Cada una de las dos secciones, se dividirá en ítems. Los de la primera sección, servirán para indicar separadamente, las rentas que se destine á los gastos ordinarios y las que se destine á los extraordinarios; y los de la segunda, servirán para indicar, separadamente, los gastos.

e). Cada ítem se dividirá en Partidas, según lo requiera la clasificación de los gastos y de los recursos.

f). Se especificará todas las clases de gastos, ordinarios y extraordinarios; y cada clase, será materia de una partida, de modo que resulten tantas de éstas como de aquéllos.

g). Podrá comprenderse, excepcionalmente, en una clase, varios gastos de diversa denominación y poca importancia cuando

haya tan estrecha relación entre ellos, que unos sean complementarios de los otros, ó que, el distribuirlos en varias partidas hubiera de ser causa de inconvenientes en la práctica.

- h). Podrán ser excepcionalmente materia de varias partidas, gastos de naturaleza análoga cuando haya interés en que los gastos así separables se efectúen en proporciones determinadas.
- i). Habrá una partida de gastos imprevistos ó eventuales, destinada á todos los gastos que haya que hacer en servicio directo de la enseñanza pública; pero que no se hayan incluído ó previsto en las demás partidas sea por olvido ó por ser ellos contingentes.
- j). Los gastos que se presupongan, deberán ser suficientes para satisfacer todas las necesidades de la enseñanza y de la administración.
- k). Los gastos que no sean necesarios y sí solamente útiles, se fijarán, relacionando el grado de la utilidad con la cantidad de renta de que sea posible disponer después de cubierto el importe de los gastos necesarios.
- l). Ningún fondo se hará figurar en las partidas de bienes destinadas á pagar gastos. El cálculo versará solamente sobre rentas.
- m). No se incluirá en el presupuesto de recursos los bienes espontáneamente donados ó dejados por disposiciones de última voluntad con destino á la instrucción

primaria; ni tampoco los que las autoridades escolares obtengan por suscripciones, fiestas, etc.

- n). Las rentas que se calculen, serán las que efectivamente suela percibirse, con excepción de las mencionadas en el inciso anterior, y el cálculo de las mismas se hará, tomando por base los recursos recibidos en el año próximo anterior al en que se proyecta el presupuesto; teniendo en cuenta además, las circunstancias que pudieran influir en el aumento ó en la disminución de las rentas.
- o). No se asentará en el presupuesto, la cantidad de rentas máxima que se considere posible recibir; se asentará solo la cantidad mínima que sea muy probable.
- p). El cálculo deberá recaer solamente en las rentas que se haya de cobrar por cuenta del año en que ha de regir el presupuesto. No recaerá en las que existan cobradas ni las que se cobren por cuentas de años anteriores, á no ser que en virtud de Ley, pasen á ser rentas del año en que ha de regir el presupuesto.
- q). Al hacerse el cálculo de recursos, se estimará, en primer término, las rentas propias y en segundo, las que la ley destine á cubrir los déficits.
- r). Se sostendrá el mayor número de escuelas que las necesidades reclamen y que las rentas á este objeto destinadas permitan tener convenientemente atendidas, dándose preferencia á las infantiles y ele-

mentales; y solo después que la enseñanza inferior esté suficientemente difundida, se sostendrá escuelas superiores; no debiendo tampoco satisfacerse las necesidades urbanas con preferencia á las rurales de mayor é igual intensidad.

Art. 3.º Promulgada que sea por el P. E. N. la Ley de Presupuesto General y sobre la base de lo votado en la misma para la instrucción primaria, la mencionada comisión procederá á proyectar el *Presupuesto interno del Consejo Nacional de Educación*, distribuyendo convenientemente y con sujeción á las reglas contenidas en el artículo 2.º de la presente resolución, los recursos y el personal acordado por la Ley de Presupuesto General para satisfacer las necesidades de la Educación Común en la República; presentando oportunamente su trabajo á la Presidencia del H. Consejo para ser sometido á la aprobación de éste oportunamente.

Art. 4.º La Comisión nombrada, podrá solicitar de la Presidencia todos los datos que crea necesarios y convenientes para el mejor desempeño de su cometido.

Art. 5.º Comuníquese, anótese, publíquese y resérvese.

J. M. RAMOS MEJÍA.
Segundo M. Linares.

VII

Nota del Presidente del Consejo remitiendo los antecedentes á la Contaduría General de la Nación

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1912.

Nota N.º 7421.

Al Señor Presidente de la Contaduría General de la Nación, Dr. Don Osvaldo M. Piñero.

Oportunamente el Consejo que presido, resolvió pasar á estudio de su Comisionado de Hacienda y en vista al suscrito, las observaciones formuladas por los Señores Contadores Fiscales, Dr. Don Augusto Castellanos y Don León R. Coussio, en su informe correspondiente, que esa Contaduría General se sirvió remitirle en copia con fecha 30 de Septiembre ppdo., á efecto de que tanto aquél como el suscrito, se expidieran, respectivamente, acerca de las observaciones contenidas en dicho informe y concernientes al H. Consejo y á la Presidencia del mismo.

Con arreglo á esa resolución, el suscrito por su parte y el Señor Comisionado de Hacienda por la suya, presentaron al H. Consejo, el día 21 del corriente sus informes respectivos que en copia debidamente legalizada remito adjuntos al Señor Presidente, en cumplimiento de la resolución adoptada por el H. Consejo en sesión de la misma fecha y cuyo tenor es el siguiente:

«Vistos y considerados los informes presentados por el Sr. Presidente Dr. Don José María Ra-

» mos Mejía y por la Comisión de Hacienda, con
» motivo de la nota N.º 926 de la Contaduría Gene-
» ral de la Nación, fecha 30 de Septiembre ppdo.,
» *El H. Consejo,*

RESUELVE:

«Remitir dichos informes á la Contaduría Ge-
» neral de la Nación, como explicaciones y datos
» ilustrativos á las observaciones hechas por los
» Señores Contadores Fiscales en su informe res-
» pectivo.....»

Como igualmente se resolvió oír la opinión de los Señores Asesores Letrados, considero del caso y para mayor ilustración de esa Contaduría General remitir adjunta también copia legalizada del citado dictamen legal.

Con tal motivo, me es grato saludar al Señor Presidente con mi distinguida consideración.

J. M. RAMOS MEJÍA.

Segundo M. Linares.